

Una nación para el desierto argentino

Tulio Halperin Donghi



CENTRO EDITOR DE
AMÉRICA LATINA

BIBLIOTECA
BÁSICA
ARGENTINA

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Una nación para el desierto argentino	7
La herencia de la generación de 1837	10
Las transformaciones de la realidad argentina.....	19
La Argentina es un mundo que se transforma.....	26
Un proyecto nacional en el período rosista	29
Treinta años de discordia	55
El consenso después de la discordia	109
La campaña y sus problemas	120
Balances de una época	138

UNA NACIÓN PARA EL DESIERTO ARGENTINO

A Carlos Real de Asúa

En 1883, al echar una mirada sin embargo sombría sobre su Argentina, Sarmiento creía aún posible subrayar la excepcionalidad de la más reciente historia argentina en el marco hispanoamericano: “en toda la América española no se ha hecho para rescatar a un pueblo de su pasada servidumbre, con mayor prodigalidad, gasto más grande de abnegación, de virtudes, de talentos, de saber profundo, de conocimientos prácticos y teóricos. Escuelas, colegios, universidades, códigos, letras, legislación, ferrocarriles, telégrafos, libre pensar, prensa en actividades... todo en treinta años”. Que esa experiencia excepcional conservaba para la Argentina un lugar excepcional entre los países hispanoamericanos fue convicción muy largamente compartida; todavía en 1938, al prologar *Facundo*¹, Pedro Henríquez Ureña creía posible observar que su sentido era más directamente comprensible en aquellos países hispanoamericanos en que aún no se había vencido la batalla de Caseros. He aquí a la Argentina ofreciendo aún un derrotero histórico ejemplar –y hoy eso mismo excepcional– en el marco hispanoamericano.

¿En qué reside esa excepcionalidad? No sólo en que la Argentina vivió en la segunda mitad del siglo XIX una etapa de progreso muy rápido, aunque no libre de violentos altibajos; etapas semejantes vivieron otros países, y el ritmo de avance de la Argentina independiente es, hasta 1870, menos rápido que el de la Cuba todavía española (que sigue desde luego pautas de desarrollo muy distintas).

La excepcionalidad argentina radica en que sólo allí iba a parecer realizada una aspiración muy compartida y muy constantemente frustrada en el resto de Hispanoamérica: el progreso argentino es la encarnación en el cuerpo de la nación de lo que comenzó por ser un proyecto formulado en los escritos de algunos argentinos cuya única arma política era su superior clarividencia. No es sorprendente no hallar paralelo fuera de la Argentina al debate en que Sarmiento y Alberdi, esgrimiendo sus pasadas publicaciones, se disputan la paternidad de la etapa de historia que se abre en 1852.

Sólo que esa etapa no tiene nada de la serena y tenaz industriosisidad que se espera de una cuyo cometido es construir una nación de acuerdo con planos precisos en torno de los cuales se ha reunido ya un consenso sustancial. Está marcada de acciones violentas y palabras no menos destempladas: si se abre con la conquista de Buenos Aires como desenlace de una guerra civil, se cierra casi treinta años después con otra conquista de Buenos Aires; en ese breve espacio de tiempo caben otros dos choques armados entre el país y su primera provincia, dos alzamientos, de importancia en el Interior, algunos esbozos adicionales de guerra civil y la más larga y costosa guerra internacional nunca afrontada por el país.

La disonancia entre las perspectivas iniciales y esa azarosa navegación no podía dejar de ser percibida. Frente a ella, la tendencia que primero dominó entre quienes comenzaron la exploración retrospectiva del período fue la de achacar todas esas discordias, que venían a turbar el que debía haber sido concorde esfuerzo constructivo, a causas frívolas y anecdóticas; los protagonistas de la etapa –se nos aseguraba una vez y otra– querían todos sustancialmente lo mismo; en su versión más adecuada a la creciente popularidad del culto de esos protagonistas como héroes fundadores de la Argentina moderna, sus choques se explicaban (y a la vez despojaban de todo sentido), como consecuencia de una sucesión de deplorables malos entendidos; en otra versión menos frecuentemente ofrecida, se los tendía a interpretar a partir de rivalidades personales y de grupo, igualmente desprovistas de ningún correlato político más general.

La discrepancia seguía siendo demasiado marcada para que esa explicación pudiese ser considerada satisfactoria. Otra comenzó a ofrecerse: el supuesto consenso nunca existió y las luchas que llenaron esos treinta años de historia argentina expresaron enfrentamientos radicales en la definición del futuro nacional. Es ésta la interpretación más favorecida por la corriente llamada revisionista, que –de descubrimiento en descubrimiento– iba a terminar postulando la existencia de una alternativa puntual a ese proyecto nacional elaborado a mediados del siglo; una alternativa derrotada por una sórdida conspiración de intereses, continuada por una igualmente sórdida conspiración de silencio que ha logrado ocultar a los argentinos lo más valioso de su pasado.

Lo que ese ejercicio de reconstrucción histórica –en que la libre invención toma el relevo de la exploración del pasado para mejor justificar ciertas opciones políticas actuales– tiene de necesariamente inaceptable, no debiera hacer olvidar que sólo gracias a él se alcanzaron a percibir ciertos aspectos básicos de esa etapa de historia argentina. Aunque sus trabajos están a menudo afectados, tanto como por el deseo de llegar rápidamente a conclusiones preestablecidas, por una notable ignorancia del tema, fueron quienes

¹ Domingo Faustino Sarmiento, *Facundo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Argentina Fundamental, n° 18, 1979.

adoptaron el punto de vista revisionista los que primero llamaron la atención sobre el hecho, sin embargo obvio; de que esa definición de un proyecto para una Argentina futura se daba en un contexto ideológico marcado por la crisis del liberalismo que sigue a 1848, y en uno internacional caracterizado por una expansión del centro capitalista hacia la periferia, que los definidores de ese proyecto se proponían a la vez acelerar y utilizar.

Aquí se intentará partir de ello, para entender mejor el sentido de esa ambiciosa tentativa de trazar un plano para un país y luego edificarlo; no sé buscará sin embargo en la orientación de ese proyecto la causa de las discordias en medio de las cuales debe avanzar su construcción. Más bien se la ha creído encontrar en la distancia entre el efectivo legado político de la etapa rosista y el inventario que de él trazaron sus adversarios, ansiosos de transformarse en sus herederos, y que se reveló demasiado optimista. Si la acción de Rosas en la consolidación de la personalidad internacional del nuevo país deja un legado permanente, su afirmación de la unidad interna basada en la hegemonía porteña no sobrevive a su derrota de 1852. Quienes creían poder recibir en herencia un Estado central al que era preciso dotar de una definición institucional precisa, pero que, aun antes de recibirlo, podía ya ser utilizado para construir una nueva nación, van a tener que aprender que antes que ésta –o junto con ella– es preciso construir el Estado. Y en 1880 esa etapa de creación de una realidad nueva puede considerarse cerrada no porque sea evidente a todos que la nueva nación ha sido edificada, o que la tentativa de construirla ha fracasado irremisiblemente, sino porque ha culminado la instauración de ese Estado nacional que se suponía preexistente.

Esta imagen de esa etapa argentina ha orientado la selección de los textos aquí reunidos*. Ella imponía tomar en cuenta el delicado contrapunto entre dos temas dominantes: construcción de una nueva nación; construcción de un Estado. El precio de no dejar de lado un aspecto que pareció esencial es una cierta heterogeneidad de los materiales reunidos; justificar su presencia dando cuenta del complejo entrelazamiento de ideas y acciones que subtiende esa etapa argentina es el propósito de la presente introducción.

La herencia de la generación de 1837

Se ha señalado cómo, al concebir el progreso argentino como la realización de un proyecto de nación previamente definido por sus mentes más esclarecidas la Argentina de 1852 se apresta a realizar una aspiración muy compartida en toda Hispanoamérica. Muy compartida sobre todo por esas mentes esclarecidas o que se consideran tales, y que descubren a cada paso –con decreciente sorpresa, pero no con menos intensa amargura– hasta qué punto su superior preparación y talento no las salva, si no necesariamente de la marginación política, sí de limitaciones tan graves a la influencia y eficacia de su acción que las obligan a preguntarse una vez y otra si tiene aún sentido poner esas cualidades al servicio de la vida pública de sus países.

Es decir que esa concepción del progreso nacional surge como un desiderátum de las élites letradas hispanoamericanas, sometidas al clima inesperadamente inhóspito de la etapa que sigue a la Independencia. Esta indicación general requiere una formulación más concreta: en la Argentina esa concepción será el punto de llegada de un largo examen de conciencia sobre la posición de la élite letrada posrevolucionaria, emprendido en una hora crítica del desarrollo político del país por la generación de 1837.

En 1837 hace dos años que Rosas ha llegado por segunda vez al poder, ahora como indisputado jefe de su provincia de Buenos Aires y de la facción federal en el desunido país. Su victoria se aparece a todos como un hecho irreversible y destinado a gravitar durante décadas sobre la vida de la entera nación. Es entonces cuando un grupo de jóvenes provenientes de las élites letradas de Buenos Aires y el Interior se proclaman destinados a tomar el relevo de la clase política que ha guiado al país desde la revolución de Independencia hasta la catastrófica tentativa de organización unitaria de 1824-27. Que esa clase política ha fracasado parece, a quienes aspiran ahora a reemplazarla, demasiado evidente; la medida de ese fracaso está dada por el triunfo, en el país y en Buenos Aires, de los tanto más toscos jefes federales

Frente a ese grupo unitario raleado por el paso del tiempo y deshecho por la derrota, el que ha tomado a su cargo reemplazarlo se autodefine como la Nueva Generación. Esta autodefinition alude explícitamente a lo que lo separa de sus predecesores; implícitamente, pero de modo no menos revelador, alude a todo lo que no lo separa. No lo distingue, por ejemplo, una nueva y diferente extracción regional o social. Por lo contrario, esa Nueva Generación, en esta primera etapa de actuación política, parece considerar la hegemonía de la clase letrada como el elemento básico del orden político al que aspira, y su apasionada y a

* Este texto fue publicado por primera vez como prólogo a una extensa antología: *Proyecto y construcción de una Nación* (Argentina 1846-1880), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980, CII + 600 págs.

ratos despiadada exploración de las culpas de la élite revolucionaria parte de la premisa de que la principal es haber destruido por una sucesión de decisiones insensatas, las bases mismas de esa hegemonía, para dejar paso a la de los tanto más opulentos, pero menos esclarecidos, jefes del federalismo. La hegemonía de los letrados se justifica por su posesión de un acervo de ideas y soluciones que debiera permitirles dar orientación eficaz a una sociedad que la Nueva Generación ve como esencialmente pasiva, como la materia en la cual es de responsabilidad de los letrados encarnar las ideas cuya posesión les da por sobre todo el derecho a gobernarla. Es poco sorprendente, dada esta premisa, que la Nueva Generación no se haya contentado con una crítica anecdótica de los *faux-pas* que los dirigentes unitarios acumularon frenéticamente a partir de 1824; que, se consagrara en cambio a buscar en ellos el reflejo de la errada inspiración ideológica que la generación revolucionaria y unitaria había hecho suya.

Es aún menos sorprendente que, al tratar de marcar de qué modo una diferente experiencia formativa ha preservado de antemano a la Nueva Generación de la reiteración de los errores de su predecesora, sea la diferencia en inspiración ideológica la que se sitúe constantemente en primer plano. El fracaso de los unitarios es, en suma, el de un grupo cuya inspiración proviene aún de fatigadas supervivencias del Iluminismo. La Nueva Generación, colocada bajo el signo del Romanticismo, está por eso mismo mejor preparada para asumir la función directiva que sus propios desvaríos arrebataron a la unitaria.

Esta noción básica –la de la soberanía de la clase letrada, justificada por su posesión exclusiva del sistema de ideas de cuya aplicación depende la salud política y no sólo política de la nación– explica el entusiasmo con que la Nueva Generación recoge de Cousin el principio de la soberanía de la razón, pero es previa a la adopción de ese principio y capaz de convivir con otros elementos ideológicos que entran en conflicto con él. La presencia de esa convicción inquebrantable subtiende el *Credo de la Joven Generación*, redactado en 1838 por Esteban Echeverría, y brinda coherencia a la marcha tortuosa y a menudo contradictoria de su pensamiento. Para poner un ejemplo entre muchos posibles, ella colorea de modo inequívoco la discusión sobre el papel del sufragio en el orden político que la Nueva Generación propone y caracteriza como democrático. Que el sufragio restringido sea preferido al universal es acaso menos significativo que el hecho de que, a juicio del autor del *Credo*, el problema de la extensión del sufragio puede y debe resolverse por un debate interno a la élite letrada.

El modo en que esa élite ha de articularse con otras fuerzas sociales efectivamente actuantes en la Argentina de la tercera década independiente no es considerado relevante; en puridad no hay –en la perspectiva que la Nueva Generación ha adoptado– otras fuerzas que puedan contarse legítimamente entre los actores del proceso político en que la Nueva Generación se apresta a intervenir, sino a lo sumo como uno de los rasgos de esa realidad social que habrá de ser moldeada de acuerdo a un ideal político-social conforme a la razón.

Sin duda ello no implica que la Nueva Generación no haya buscado medios de integrarse eficazmente en la vida política argentina, y no haya comenzado por usar una ventaja sobre la generación unitaria menos frecuentemente subrayada que su supuestamente superior inspiración ideológica. Los más entre los miembros de la Nueva Generación (un grupo en sus orígenes extremadamente reducido de jóvenes ligados en su mayoría a la Universidad de Buenos Aires) pertenecen a familias de la élite porteña o provinciana que han apoyado la facción federal o han hecho satisfactoriamente sus paces con ella, y el papel de guías políticos de una facción cuya indigencia ideológica le hacía necesitar urgentemente de ellos, no dejó de parecerles atractivo. El grupo surge entonces como un *cercle de pensée*, decidido a consagrarse por largo tiempo a una lenta tarea de proselitismo de quienes ocupaban posiciones de influencia en la constelación política federal, en Buenos Aires y el Interior. Es la inesperada agudización de los conflictos políticos a partir de 1838, con el entrelazamiento de la crisis uruguaya y la argentina y los comienzos de la intervención francesa, la que lanza a una acción más militante a un grupo que se había creído hasta entonces desprovisto de la posibilidad de influir de modo directo en un desarrollo político sólidamente estabilizado. Juan Bautista Alberdi, el joven tucumano protegido por el gobernador federal de su provincia, se marcha al Montevideo antirrosista; un par de años más y Vicente Fidel López, hijo del más alto magistrado judicial del Buenos Aires rosista, participará del alzamiento antirrosista en Córdoba y Marco Avellaneda, amigo y comprovinciano de Alberdi, llegado a gobernador de Tucumán luego del asesinato del gobernador que había protegido las primeras etapas de la carrera de éste, sumará a Tucumán y contribuirá a volcar a todo el Norte del país al mismo alzamiento. Pero los prosélitos que la Nueva Generación ha conquistado y lanzado a la acción son sólo una pequeña fracción del impresionante conjunto de fuerzas que se gloria de haber desencadenado contra Rosas. Desde la Francia de Luis Felipe y la naciente facción colorada uruguaya, hasta los orgullosos herederos riojanos de Facundo Quiroga y santafesinos de Estanislao López (los dos grandes jefes históricos del federalismo provinciano), desde el general Lavalle, primera espada del unitarismo, hasta

sectores importantes del cuerpo de oficiales de Buenos Aires y el propio presidente de la Legislatura e íntimo aliado político de Rosas, el censo es, en verdad, interminable.

Pero como resultado de esa aventura embriagadora, la Nueva Generación sólo podría exhibir el no menos impresionante censo de mártires a los que Esteban Echeverría dedica con melancólico orgullo su *Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37*. Cuando la publica en 1846, está desterrado en un Montevideo sitiado por las fuerzas rosistas (allí ha de morir tres años más tarde). De esa gran crisis la hegemonía rosista ha salido fortalecida: por primera vez desde la disolución del Estado central en 1820, un ejército nacional que es ahora en verdad el de la provincia de Buenos Aires, ha alcanzado las fronteras de Chile y Bolivia. La represión que siguió a la victoria rosista fue aún más eficaz que ésta para persuadir al personal político provinciano de las ventajas de una disciplina más estricta en el seno de una facción federal que Rosas había convertido ya del todo en instrumento de su predominio sobre el país.

El fracaso de la coalición antirrosista es el de una empresa que ha aplicado no sin lógica los principios de acción implícitos en la imagen de la realidad política y social adoptada por la Nueva Generación. Para ella se trataba de enrollar cuantos instrumentos de acción fuese posible en la ofensiva antirrosista. El problema de la coherencia de ese frente político no se planteaba siquiera: sería vano buscar esa coherencia en la realidad que la Nueva Generación tiene frente a sí; sólo puede hallarse en la mente de quienes suscitan y dirigen el proceso, que son desde luego los miembros de esa renovada élite letrada. Ello crea una relación entre ésta y aquéllos a quienes ve como instrumentos y no como aliados, que no podría sino estar marcada por una actitud manipulativa; el fracaso se justificará mediante una condena póstuma del instrumento rebelde o ineficaz. Para Echeverría, su grupo no llegó a constituirse en la élite ideológica y política del Buenos Aires rosista porque Rosas resultó no ser más que un imbécil y un malvado que se rehusó a poner a su servicio su poder político; si Rosas no fue derrocado en 1840, se debe a que Lavalle no era más que “una espada sin cabeza”, incapaz de aplicar eficazmente las tácticas sugeridas por sus sucesivos secretarios, Alberdi y Frías (también éste recluta de la Nueva Generación). Esa experiencia trágica sólo confirma a Echeverría en su convicción de que la coherencia que falta al antirrosismo ha de alcanzarse en el reino de las ideas; en 1846, luego de una catástrofe comparable a la que a su juicio ha condenado para siempre a la generación unitaria, cree posible justificar la trayectoria recorrida por su grupo, a partir de un análisis menos alusivo de lo que ideológicamente lo separa de la tradición unitaria.

La conexión entre la errada inspiración ideológica de la generación unitaria y su desastrosa inclinación por las controversias de ideas, es subrayada ahora con energía aún mayor que en la *Creencia* de 1838. La noción de unidad de creencia –herencia saintsimoniana que no había desde luego estado ausente entonces– ocupa un lugar aún más central en la *Ojeada retrospectiva*. Esa exigencia de unidad se traduce en la postulación de un coherente sistema de principios básicos en torno a los cuales la unidad ha de forjarse, y que deben servir de soporte no sólo para la elaboración de propuestas precisas para la transformación nacional, sino para otorgar la necesaria firmeza a los lazos sociales: ese sistema de principios es, en efecto, algo más que un conjunto de verdades transparentes a la razón o deducidas de la experiencia; es –en sentido saintsimoniano– un dogma destinado a ocupar, como inspiración y guía de la conducta individual y colectiva, el lugar que en la Edad Media alcanzó el cristianismo.

El problema está en que la existencia de este sistema coherente de principios básicos es sólo postulada en la *Ojeada retrospectiva*; al parecer Echeverría había llegado a convencerse de que era precisamente ese sistema lo que había sido proclamado en la *Creencia* de 1838; esa convicción parece sin embargo escasamente justificada: el eclecticismo sistemático de la Nueva Generación tiene por precio una cierta incoherencia que el estilo oracular por ella adoptado no logra disimular del todo; es por otra parte demasiado evidente que algunas tomas de posición, cuya validez universal se postula, están inspiradas por motivaciones más inmediatas y circunstanciales.

¿La adhesión a un sistema de principios cuya definición nunca se ha completado y cuya interna coherencia permanece sólo postulada es el único legado que esa tentativa de redefinición del papel de la élite letrada dejan en la evolución del pensamiento político argentino? No, sin duda. En la *Creencia*, como en la *Ojeada retrospectiva* (y todavía más en los escritos tempranos de quienes, como Juan Bautista Alberdi o Vicente Fidel López, han comenzado bien pronto a definir una personalidad intelectual, vigorosa e independiente, en cuya formación los estímulos que provienen de su integración en el grupo generacional de 1837 se combinan ya con otros muy variados) se hallarán análisis de problemas y aspectos de la realidad nacional (y de las alternativas políticas abiertas para encararlos) que están destinados a alcanzar largo eco durante la segunda mitad del siglo, e incluso más allá (también es cierto que, en esas consideraciones de problemas específicos por el grupo de 1837, el legado de ideas de las generaciones anteriores es mucho más rico de lo que la actitud de ruptura programática con el pasado haría esperar). Aun así, si es posible rastrear en los escritos de madurez de Alberdi, de Juan María Gutiérrez, de Sarmiento, temas y nociones que ya

estaban presentes en las reflexiones de 1837, no es siempre sencillo establecer hasta dónde su presencia refleja una continuidad ideológica real; hasta tal punto sería abusivo considerar el interés por esos temas y nociones, encarados por tantos y desde tan variadas perspectivas antes y después de 1837, la marca distintiva de una tradición ideológica precisa.

En cambio, esa avasalladora pretensión de constituirse en guías del nuevo país (y su justificación por la posesión de un salvador sistema de ideas que no condescienden a definir con precisión) está destinada a alcanzar una influencia quizá menos inmediatamente evidente pero más inequívocamente atribuible al nuevo grupo generacional de 1837. Heredera de ella es la noción de que la acción política, para justificarse, debe ser un esfuerzo por imponer, a una Argentina que en cuarenta años de revolución no ha podido alcanzar su forma, una estructura que debe ser, antes que el resultado de la experiencia histórica atravesada por la entera nación en esas décadas atormentadas, el de implantar un modelo previamente definido por quienes toman a su cargo la tarea de conducción política.

Pero si la directa relación entre ese modo de concebir la tarea del político en la Argentina posrosista y la asignada a la élite letrada por la generación de 1837 es indiscutible, no por eso deja de darse, entre uno y otro, un decidido cambio de perspectiva. La generación de 1837, absorbida por la crítica de la que la había precedido, no había llegado a examinar si era aún posible reiterar con más fortuna la trayectoria de ésta; no dudaba de que bastaba una rectificación en la inspiración ideológica para lograrlo. Tal conclusión era sin embargo extremadamente dudosa: la emergencia de una élite política (que era a la vez halagador y engañoso definir exclusivamente como letrada), dotada de una relativa independencia frente a los sectores populares y a las clases propietarias, se dio en el contexto excepcional creado por esa vasta crisis, uno de cuyos aspectos fue la guerra de Independencia; a medida que avanzaba la década del cuarenta, comenzaba a ser cada vez más evidente que la Argentina había ya cambiado lo suficiente para que el político ilustrado, si deseaba influir en la vida de su país, debía buscar modos de inserción en ella que no podían ser los destruidos probablemente para siempre en el derrumbe del unitarismo. Al legislador de la sociedad que –atento a una realidad que se le ofrece como objeto de estudio– le impone un sistema de normas que han de darle finalmente esa forma tan largamente ausente, sucede el político que, aun cuando propone soluciones legislativas, sabe que no está plasmando una pasiva materia sino insertándose en un campo de fuerzas con las que no puede establecer una relación puramente manipulativa y unilateral, sino alianzas que reconocen a esas fuerzas como interlocutores y no como puros instrumentos. La futura Argentina, que se busca definir a partir de un proyecto que corresponde al ideólogo político precisar y al político práctico implementar, está definida también, de modo más imperioso que en las primeras tentativas de la generación de 1837, por la Argentina presente.

Y esto no sólo en el sentido muy obvio de que cualquier proyecto para el futuro país debe partir de un examen del país presente, sino en el de que ningún proyecto, por persuasivo que parezca a quienes aspiran a constituirse en la futura élite política de un país igualmente futuro, podría implantarse sin encontrar en los grupos cuya posición política, social, económica, les otorga ya peso decisivo en la vida nacional, una adhesión que no podría deberse únicamente a su excelencia en la esfera de las ideas.

Pero no es sólo la evolución de una Argentina que está cambiando tanto bajo la aparente monotonía de ese dorado ocaso del rosismo, la que estimula la transición entre una actitud y otra. Igualmente influyente es la conquista de una imagen más rica y compleja, pero también más ambigua, de la relación entre la Argentina y un mundo en que los avances cada vez más rápidos del orden capitalista ofrecen, desde la perspectiva de estos observadores colocados en un área marginal, promesas de cambios más radicales que en el pasado, pero también suponen riesgos que en 1837 era imposible adivinar del todo.

Las transformaciones de la realidad argentina

En 1847 Juan Bautista Alberdi publica, desde su destierro chileno, un breve escrito destinado a causar mayor escándalo de lo que su autor esperaba. En *La República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo*² traza un retrato inesperadamente favorable del país que le está vedado. Sin duda, algunas de las razones con que justifica su entusiasmo parecen algo forzadas: el nombre de Rosas se ha hecho aborrecido, pero por eso mismo vastamente conocido en ambos mundos; debido a ello la atención universal se concentra sobre la Argentina de un modo que Alberdi parece hallar halagador, las tensiones políticas han obligado a emigrar a muchos jóvenes de aguzada curiosidad intelectual, y es sabido que los viajes son la mejor escuela para la juventud... Pero su línea de razonamiento está lejos de apoyarse en esos argumentos de abogado demasiado hábil: a juicio de Alberdi la estabilidad política alcanzada gracias a la

² Juan Bautista Alberdi, *Obras selectas*, edición de Joaquín V. González, tomo V, Buenos Aires, La Facultad, 1920.

victoria de Rosas no sólo ha hecho posible una prosperidad que desmiente los pronósticos sombríos adelantados por sus enemigos, sino –al enseñar a los argentinos a obedecer– ha puesto finalmente las bases indispensables para cualquier institucionalización del orden político. Si el mismo Rosas toma a su cargo esa tarea que puede ya ser afrontada gracias a lo conseguido hasta el momento bajo su égida, dejará de ser simplemente un hombre extraordinario (digno aún así de excitar la inspiración de un Byron) para transformarse en un gran hombre. Con todo, Alberdi no parece demasiado seguro de que esa suprema metamorfosis del Tigre de Palermo en Licurgo argentino haya de producirse, y su escrito es –más que ese anuncio de una inminente defección que en él vieron algunos de sus lectores– la afirmación de una confianza nueva en un futuro que ha comenzado ya a construirse a lo largo de una lucha aparentemente estéril. Ese futuro no se anuncia como caracterizado por un ritmo de progreso más rápido que el al cabo modesto alcanzado durante la madurez del orden rosista (y que el Alberdi de 1847 halla al parecer del todo suficiente); su aporte será, esencialmente, la institucionalización del orden político que el esfuerzo de Rosas ha creado.

Más preciso es el cuadro de futuro que –dos años antes de Alberdi– proyecta Domingo Faustino Sarmiento en la tercera parte de su *Facundo*. En 1845 este sanjuanino reclutado por un extraño predicador itinerante de la *Creencia* de la Nueva Generación, .ha surgido ya de entre la masa de emigrados arrojados a Chile por la derrota de los alzamientos antirrosistas del Interior. Periodista, estrechamente aliado a la tendencia conservadora del presidente Bulnes y su ministro Montt, ha alcanzado celebridad a través de un encadenamiento de polémicas públicas sobre política argentina y chilena, y todavía sobre educación, literatura, ortografía... Por esas fechas, se ve aún a sí mismo como un remoto discípulo del grupo fundador porteño; la originalidad creciente de sus posiciones no se refleja todavía en reticencia alguna en las expresiones de respetuosa gratitud que sigue tributándole. En *Facundo* esa deuda es aún visible de muy variadas maneras; entre ellas en la caracterización del grupo unitario, que retoma, de modo más vigoroso, las críticas de Echeverría. Si en las dos primeras partes del *Facundo* la distancia entre la perspectiva sarmientina y la de sus mentores parece ser la que corre entre espíritus consagrados a la búsqueda de un salvador código de principios sobre los cuales edificar toda una realidad nueva y una mente curiosa de explorar con rápida y penetrante mirada la corpulenta y compleja realidad de los modos de vivir y de ver la vida que siglos de historia habían creado ya en la Argentina, en la tercera se agrega, a esa divergencia irreductible, la que proviene de que el Sarmiento de 1845, como el Alberdi de 1847, comienza a advertir que la Argentina surgida del triunfo rosista de 1838-42 es ya irrevocablemente distinta de la que fue teatro de las efímeras victorias y no menos efímeras derrotas de su héroe el gran jefe militar de los Llanos riojanos.

Su punto de vista está menos alejado de lo que parece a primera vista del que adoptará Alberdi. Como Alberdi, admite que en la etapa marcada por el predominio de Rosas el país ha sufrido cambios que sería imposible borrar; como Alberdi, juzga que esa imposibilidad no debe necesariamente ser deplorada por los adversarios de Rosas; si Sarmiento excluye la posibilidad misma de que Rosas tome a su cargo la instauración de un orden institucional basado precisamente en esos cambios, aún más explícitamente que Alberdi convoca a colaborar en esa tarea a quienes han crecido en prosperidad e influencia gracias a la paz de Rosas. La diferencia capital entre el Sarmiento de 1845 y el Alberdi de 1847 debe buscarse –más bien que en la mayor o menor reticencia en la expresión del antirrosismo de ambos– en la imagen que uno y otro se forman de la etapa posrosista. Para Sarmiento, ésta debe aportar algo más que la institucionalización del orden existente, capaz de cobijar progresos muy reales pero no tan rápidos como juzga necesario. Lo más urgente es acelerar el ritmo de ese progreso; en relación con ello, el legado más importante del rosismo no le parece consistir en la creación de esos hábitos de obediencia que Alberdi había juzgado lo más valioso de su herencia, sino la de una red de intereses consolidados por la moderada prosperidad alcanzada gracias a la dura paz que Rosas impuso al país, cuya gravitación hace que la paz interna y exterior se transforme en objetivo aceptado como primordial por un consenso cada vez más amplio de opiniones. El hastío de la guerra civil y su secuela de sangre y penuria permitirán a la Argentina posrosista vivir en paz sin necesidad de contar con un régimen político que conserve celosamente, envuelta en decorosa cobertura constitucional, la formidable concentración de poder alcanzada por Rosas en un cuarto de siglo de lucha tenaz. Rosas representa el último obstáculo para el definitivo advenimiento de esa etapa de paz y progreso; nacido de la revolución, su supervivencia puede darse únicamente en el marco de tensiones que morirían solas si el dictador no se viera obligado a alimentarlas para sobrevivir. Aunque la imagen que Sarmiento propone de Rosas en 1845 es tan negativa como en el pasado, no por eso ella ha dejado de modificarse con el paso del tiempo: el que fue monstruo demoníaco aparece cada vez más como una supervivencia y un estorbo.

Es la imagen que de Rosas propone también Hilario Ascasubi, en un diálogo gaucho compuesto en 1846 y retocado con motivo del pronunciamiento antirrosista de Urquiza. El poeta del vivac y el entrevero, cuyas coplas llenas de la dura, inocente ferocidad de la guerra civil, habían llamado a todos los combates

lanzados contra Rosas a lo largo de veinte años, exhibe ahora una vehemente preferencia por la paz productiva. Por boca de su alter ego poético, el correntino y unitario Paulino Lucero, que en el pasado lanzó tantos llamamientos a la lucha sin cuartel, expresa su admiración por la prosperidad que está destinado a alcanzar Entre Ríos bajo la sabia guía de un Urquiza que acaba de pronunciarse contra Rosas. Su viejo adversario, el entrerriano y federal Martín Sayago, observa que gracias a los desvelos de Urquiza ese futuro es ya presente. “Así –responde sentencioso Paulino– debiera proceder todo gobierno. Veríamos que al infierno iba a parar la anarquía”. A esa universal reconciliación en el horror a la anarquía y en el culto del progreso ordenado, sólo falta la adhesión de un Rosas “demasiado envidioso, diablo y revoltoso” para otorgarla.

Aún más claramente que en Sarmiento, Rosas ha quedado reducido al papel de un mero perturbador guiado por su personalísimo capricho. Sin duda la conversión de Ascasubi es pasablemente superficial, y ello se refleja no sólo en el desmaño y falta de bríos de sus editoriales en verso sobre las bendiciones del progreso y la paz, sino incluso en alguna inconsecuencia deliciosamente reveladora: así, tras de ponderar el influjo civilizador que está destinada a ejercer la inmigración, propone como modelo del Hombre Nuevo a ese “carcamancito” que todavía no habla sino francés pero ya ansía degollar a sus enemigos políticos.

Pero si Ascasubi no ha logrado matar del todo dentro de sí mismo al Viejo Adán, ello hace aún más significativa su transformación en propagandista de una imagen del futuro nacional de cuya aceptación depende, antes que la efectiva instauración de la productiva concordia por él reclamada, el triunfo de las ampliadas fuerzas antirrosistas en la lucha que se avecina.

En Ascasubi, como en Sarmiento, la presencia de grupos cada vez más amplios que ansían consolidar lo alcanzado durante la etapa rosista mediante una rápida superación de esa etapa, es vigorosamente subrayada; falta en cambio la tentativa de definir con precisión de qué grupos se trata, y más aún, cualquier esfuerzo por determinar con igual precisión las áreas en las cuales la percepción justa de sus propios intereses y aspiraciones los ha de empujar a un abierto conflicto con Rosas. Sarmiento espera aún en el “honrado general Paz”, cuya fuerza es la del guerrero avezado y no la del vocero de un sector determinado; Ascasubi está demasiado interesado en persuadir a su público popular de que la caída de Rosas ofrece ventajas para todos, para entrar en una línea de indagaciones que por otra parte le fue siempre ajena. Correspondió en cambio a un veterano unitario, Florencio Varela, sugerir una estrategia política basada en la utilización de la que se le aparecía como la más flagrante contradicción interna del orden rosista. Varela descubre esa secreta fisura en la oposición entre Buenos Aires, que domina el acceso a la entera cuenca fluvial del Plata y utiliza el principio de soberanía exclusiva sobre los ríos interiores para imponer extremas consecuencias jurídicas a esa hegemonía, y las provincias litorales, a las que la situación cierra el acceso directo al mercado mundial. Estas encuentran sus aliados naturales en Paraguay y Brasil; aunque la cancillería rosista no hubiese formulado, en la segunda mitad de la década del 40, una decisión creciente por terminar en los hechos con la independencia paraguaya que nunca había reconocido en derecho, el solo control de los accesos fluviales por Buenos Aires significaba una limitación extrema a esa independencia que la mantenía bajo constante amenaza. Del mismo modo, el interés brasileño en alcanzar libre acceso a su provincia de Mato Grosso por vía oceánica y fluvial, hace del Imperio un aliado potencial en la futura coalición antirrosista.

La disputa sobre la libre navegación de los ríos interiores se ha desencadenado ya cuando Varela comienza a martillar sobre el tema en una serie de artículos de su *Comercio del Plata*, el periódico que publica en Montevideo (serie que será interrumpida por su asesinato, urdido en el campamento sitiador de Oribe); en efecto, la exigencia de apertura de los ríos interiores fue ya presentada a Rosas por los bloqueadores anglo-franceses en 1845. Varela advierte muy bien, sin embargo, que para hacerse políticamente eficaz, el tema debe ser insertado en un contexto muy diferente del que lo encuadraba entonces. Está dispuesto a admitir de buen grado que Rosas se hallaba en lo justo al oponer a las potencias interventoras el derecho soberano de la Argentina a regular la navegación de sus ríos interiores. Pero ahora no se trata de eso el futuro conflicto –que Alsina busca aproximar– no ha de plantearse respecto a derechos, sino a intereses, y se desenvolverá en torno a las consecuencias cada vez más extremas que –bajo la implacable dirección de Rosas– ha alcanzado la hegemonía de Buenos Aires sobre las provincias federales.

Varela parte entonces de un examen más preciso de las modalidades que la rehabilitación económica, lograda gracias a la paz de Rosas, adquiere en un contexto de distribución muy desigual del poder político. Pero va más allá, al tomar en cuenta e implícitamente admitir como definitivos otros aspectos básicos de ese desarrollo. Es significativo que al ponderar las ventajas de la apertura de los ríos interiores y, en términos más generales, de la plena integración de la economía nacional al mercado mundial de la que aquélla debe ser instrumento, subraye que de todos modos algunas comarcas argentinas no podrían beneficiarse con esa innovación: “sistema alguno, político o económico, puede alcanzar a destruir las desventajas que nacen de la.

naturaleza. Las provincias enclavadas en el corazón de la República como Catamarca, La Rioja, Santiago, jamás podrán, por muchas concesiones que se les hicieren, adelantar en la misma proporción que Buenos Aires, Santa Fe o Corrientes, situadas sobre ríos navegables”. Sin duda, la desventaja que estas frases sentenciosas atribuyen exclusivamente a la naturaleza tiene raíces más complejas: no la sufría el Interior en el siglo XVII. La transición a una etapa en que, en efecto, las provincias mediterráneas deben resignarse a un comparativo estancamiento, se ha completado en la etapa rosista y es resultado no sólo de la política económica sino de la política general de Rosas. De la primera: si ella ha buscado atenuar los golpes más directos que la inserción en el mercado mundial lanzaba sobre la economía de esas provincias, no hizo en verdad nada por favorecer para ellas una integración menos desventajosa en el nuevo orden comercial. Pero también de la segunda (aunque Varela está aún menos dispuesto a reconocerlo) sólo la definitiva mediatización política de las provincias interiores, logrando mediante la conquista militar de éstas en 1840-42 (y la brutal represión que se le siguió) hace posible que la propuesta de un programa de política económica destinado a reunir en contra de Rosas a la mayor cantidad posible de voluntades políticamente influyentes con la sobria pero clara advertencia de que él tiene muy poco de bueno que ofrecer a esa vasta sección del país.

En Alberdi, Sarmiento, Ascasubi, pero todavía más en Varela, se dibuja una imagen más precisa de la Argentina que la alcanzada por la generación de 1837. Ello no se debe tan sólo a su superior sagacidad; es sobre todo trasunto de los cambios que el país ha vivido en la etapa de madurez del rosismo, y en cuya línea deben darse –como admiten, con mayor o menos reticencia, todos ellos– los que en el futuro harían de la Argentina un país distinto y mejor.

Del mismo modo, la transformación en la imagen del papel que el mundo exterior está destinado a tener en el futuro de la Argentina –desde la de una benévola influencia destinada por su naturaleza misma a favorecer la causa de la civilización en esas agrestes comarcas– se debe no sólo a una acumulación de nuevas experiencias (entre las cuales las adquiridas en el destierro fueron, como suelen, particularmente eficaces) sino también a una transformación de esa realidad externa, cuya gravitación era a la vez modificada y acrecida por la placidez política y la prosperidad económica que marcaron el otoño del rosismo, y cuyas ambigüedades y contradicciones fueron reveladas más claramente que en el pasado a partir de la crisis económica de 1846 y la política de 1848.

La Argentina es un mundo que se transforma

Los cambios cada vez más acelerados de la economía mundial no ofrecen sólo oportunidades nuevas para la Argentina; suponen también riesgos más agudos que en el pasado. No es sorprendente hallar esa evaluación ambigua en la pluma de un agudísimo colaborador y consejero de Rosas, José María Rojas y Patrón, para quien la manifestación por excelencia de esa acrecida presión del mundo exterior ha de ser una incontenible inmigración europea. Esa ingente masa de menesterosos, expulsados por la miseria del viejo mundo, ha de conmover hasta sus raíces a la sociedad argentina. Rojas y Patrón espera mucho de bueno de esa conmoción, por otra parte imposible de evitar; teme a la vez que esa marea humana arrase con “las instituciones de la República”, condenándola a oscilar eternamente entre la anarquía y el despotismo. Corresponde a los argentinos, bajo la enérgica tutela de Rosas, evitarlo, estableciendo finalmente el firme marco institucional que ha faltado hasta entonces al régimen rosista.

Es quizá a primera vista más sorprendente hallar análogas reticencias en Sarmiento. Las zonas templadas de Hispanoamérica, observa éste, tienen razones adicionales para temer las consecuencias del rápido desarrollo de las de Europa y Estados Unidos, que son necesariamente sus competidoras en el mercado mundial. Hay dos alternativas igualmente temibles: si se permite que continúe el estancamiento en que se hallan, deberán afrontar una decadencia económica constantemente agravada; si se introduce en ellas un ritmo de progreso más acelerado mediante la mera apertura de su territorio al juego de fuerzas económicas exteriores, el estilo de desarrollo así hecho posible concentrará sus beneficios entre los inmigrantes (cuya presencia –Sarmiento no lo duda ni por un instante– es de todos modos indispensable) en perjuicio de la población nativa que, en un país en rápido progreso, seguirá sufriendo las consecuencias de esa degradación económica que se trataba precisamente de evitar. Sólo un Estado más activo puede esquivar ambos peligros. En los años finales de la década del 40, el área de actividad por excelencia que Sarmiento le asigna es la educación popular; sólo mediante ella podrá la masa de hijos del país salvarse de una paulatina marginación económica y social en su propia tierra.

Encontramos así, en Sarmiento como en Rojas y Patrón, un eco de la tradición borbónica que asignaba al Estado papel decisivo en la definición de los objetivos de cambio económico-social y también un control preciso de los procesos orientados a lograr esos objetivos. Pero por debajo de esa continuidad –en

parte inconsciente— de una tradición administrativa e ideológica, se da otra quizá más significativa, que proviene de la perspectiva con que quienes están ubicados en áreas marginales asisten al desarrollo cada vez más acelerado de la economía capitalista. Por persuasivas que hallen las doctrinas que postulan consecuencias constantemente benéficas para ese sobrecogedor desencadenamiento de energías económicas, su experiencia inmediata les ofrece tantos testimonios que desmienten esa fe sistemática en las armonías económicas que no les es posible dejar de tomarlos en cuenta. Aunque el respeto por la superior sabiduría de los escritores europeos (y la escasa disposición a emprender una revisión de las bases mismas de un saber laboriosamente adquirido) los disuaden de recusar, a partir de esa experiencia inmediata, las hipótesis presentadas como certidumbres por sus maestros, en cambio no les impide avanzar en la exploración de la realidad que ante sus ojos se despliega, prescindiendo ocasionalmente de la imperiosa guía de doctrinas cuya validez por otra parte postulan. Así, si en Sarmiento se buscará en vano cualquier recusación a la teoría de la división internacional del trabajo, es indudable que sus alarmas no tendrían sentido si creyese en efecto que ella garantiza el triunfo de la solución económica más favorable para todas y cada una de las áreas en proceso de plena incorporación al mercado mundial.

Convendría, sin embargo, no exagerar el alcance de estas reticencias, que no impiden ver en la aceleración del progreso económico en las áreas metropolitanas un cambio rico sobre todo en promesas que las periféricas deben saber aprovechar. Hay otro aspecto del desarrollo metropolitano que da lugar a más generales y graves alarmas: su progreso parece favorecer la agudización constante de las tensiones sociales y políticas; he aquí una innovación que no quisiera introducirse en un área en que ni siquiera una indisputada estabilidad social ha permitido alcanzar estabilidad política. En Sarmiento esta consideración pasa a primer plano en el contexto de una imagen muy rica y articulada de la Europa que conoció en 1845-47; en más de uno de sus contemporáneos se iba a traducir en un simple rechazo de la línea de avance económico, social y político que en 1848 les pareció a punto de hundir a la civilización europea en un abismo; junto con motivos inmediatos, el temor nuevo frente al espectro del comunismo comienza a afectar la línea de pensamientos de algunos entre los que se resuelven, en los últimos años rosistas, a planear un futuro para su país. Ese temor no sólo inspira posiciones tan claramente irrelevantes que están destinadas a encontrar la despectiva indiferencia de la opinión pública rioplatense; ella contribuye a facilitar la transición en la imagen que la élite letrada se hace de su lugar en el país. En 1837 la Nueva Generación, que se veía a sí misma como la más reciente concreción de esa élite, se veía también como la única guía política de la nación. Si hacia 1850 se ve cada vez más como uno de los dos interlocutores cuyo diálogo fijará el destino futuro de la nación, y reconoce otro sector directivo en la élite económico-social, ello no se debe tan sólo a que largos años de paz rosista han consolidado considerablemente a esta última, sino también a que las convulsiones de la sociedad europea han revelado en las clases populares potencialidades más temibles que esa pasividad e ignorancia tan deploradas: frente a ellas, la coincidencia de intereses de la élite letrada y de la económica parece haberse hecho mucho más estrecha.

Un proyecto nacional en el periodo rosista

La caída de Rosas, cuando finalmente en febrero de 1852, no introdujo ninguna modificación sustancial en la reflexión en curso sobre el presente y el futuro de la Argentina: hasta tal punto había sido anticipada y sus consecuencias exploradas en la etapa final del rosismo. Pero incitó a acelerar las exploraciones ya comenzadas y a traducirlas en propuestas más precisas que en el pasado. Gracias a ello iba a completarse, en menos de un año a partir de la batalla de Caseros, el abanico de proyectos alternativos que desde antes de esa fecha divisoria habían comenzado a elaborarse para cuando el país alcanzase tal encrucijada. Proyectos alternativos porque —si existe acuerdo en que ha llegado el momento de fijar un nuevo rumbo para el país— el acuerdo sobre ese rumbo mismo es menos completo de lo que una imagen convencional supone.

1) *La alternativa reaccionaria.* La presentación articulada y consecuente de un proyecto declaradamente reaccionario es debida a Félix Frías. Primero desde París y luego desde Buenos Aires, el temprano secuaz salteño de la generación de 1837 propone soluciones cuya coherencia misma le resta atractivo en un país en cuya tradición ideológica el único elemento constante es un tenaz eclecticismo, y cuyo conservadorismo parece tan arraigado en las cosas mismas que la tentativa de construir una inexpugnable fortaleza de ideas destinada a defenderlo parece a casi todos una empresa superflua.

Frías no sólo comienza su práctica desde París: sus términos de referencia son los que proporciona la Europa convulsionada por las revoluciones de 1848. Las enseñanzas que de ellas deriva, son sin duda escasamente originales: la rebelión social que agitó a Europa es el desenlace lógico de la tentativa de constituir un orden político al margen de los principios católicos. De Voltaire y Rousseau hasta la pura

criminalidad que a juicio de Frías fue la nota distintiva de la revolución de 1789, antes de serlo de la de 1848, la filiación es directa e indiscutible. Pero ya en los franceses a los que sigue el argentino (Montalembert o Dupanloup) la condena del orden político posrevolucionario no se traduce en una propuesta de retorno puro y simple al *ancien régime*; esa propuesta sería aún menos aceptable para Frías. Muy consciente de que escribe para países que la Providencia ha destinado a ser republicanos, se apresura a subrayar que su deseo de ver restaurada la monarquía en Francia no nace de una preferencia sistemática por ese régimen.

Más que a la restauración de un determinado régimen político, Frías aspira en efecto a la del orden; y concibe como de orden a aquel régimen que asegure el ejercicio incontrastado y pacífico de la autoridad política por parte de “los mejores”. Ello sólo será posible cuando las masas populares hayan sido devueltas a una espontánea obediencia por el acatamiento universal a un código moral apoyado en las creencias religiosas compartidas por esas masas y sus gobernantes.

Si el orden debe aún apoyarse en Hispanoamérica en fuertes restricciones a la libertad política, ello se debe tan sólo al general atraso de la región. Este atraso sólo podrá ser de veras superado si el progreso económico y cultural consolida y no resquebraja esa base religiosa sin la cual no puede afirmarse ningún orden estable. Católico, acostumbrado a recordar su condición de tal a sus lectores aun a sabiendas de que éstos se han acostumbrado a ver eliminada de los debates políticos toda perspectiva religiosa, Frías no parece desconcertado porque los únicos países que se le aparecen organizados sobre las líneas por él propuestas no son católicos. El ejemplo de los Estados Unidos, que invoca a cada paso, no lo lleva en efecto a revisar sus premisas, sino que le sirve para mostrar hasta qué punto la perspectiva ético-religiosa por él adoptada adquiere particular relevancia en un contexto republicano y democrático.

Sin duda, Hispanoamérica no está todavía preparada para adoptar un sistema político como el de los Estados Unidos (Frías va a marcar vigorosamente –por ejemplo– sus reservas frente a la preferencia por el municipio autónomo y popularmente elegido que caracterizó a la generación de 1837). Pero aun esa plena democracia sólo alcanzable en el futuro significará la consolidación –más bien que la superación– de un orden oligárquico que para Frías es el único conforme a naturaleza: las formas democráticas sólo podrán ser adoptadas sin riesgo cuando la distribución desigual del poder político haya sido aceptada sin ninguna reserva por los desfavorecidos por ella.

La desigualdad se da también en la distribución de los recursos económicos, e igualmente aquí es conforme a naturaleza. Sin embargo, la tendencia a desafiar ese orden natural no ha sido desarraigada de quienes menos se benefician con él, y el riguroso orden político que Frías postula tiene entre sus finalidades defender la propiedad no sólo frente a la arbitrariedad dominante en etapas anteriores de la vida del Estado y la amenaza constante del crimen, sino contra la más insidiosa que proviene del socialismo. También aquí la utilización del poder represivo del Estado significa sólo una solución de emergencia, es de esperar que temporaria: la definitiva únicamente se alcanzará cuando la religión haya coronado, bajo la protección de los poderes públicos, su tarea moralizadora y –al encontrar eco en el poder cuyo infortunio consuela– lo haya librado de la tentación de codiciar las riquezas del rico.

¿Pero ese programa de conservación y restauración social y política es compatible con el desarrollo dinámico de economía y sociedad que –Frías lo admite de buen grado– Hispanoamérica requiere con más urgencia que nunca? La respuesta es para él afirmativa: no se trata de traer de Europa ideologías potencialmente disociadoras, sino hombres que enseñarán con el ejemplo a practicar “los deberes de la familia” y –puesto que están habituados “a vivir con el sudor de su frente, a cultivar la tierra que les da su alimento, a pagar a Dios el tributo de sus oraciones y de sus virtudes”– se constituirán en los mejores guardianes del orden.

Frías va más allá de la mera disociación entre la aspiración a un progreso económico y social más rápido y cualquier ideología políticamente innovadora: subraya la presencia de un vínculo, para él evidente, entre cualquier progreso económico ordenado y la consolidación de un estilo de convivencia social y política basado en la religión. Sin duda, ese estilo de convivencia impone algunas limitaciones a quienes, por su posición socioeconómica, están destinados por el orden natural a recoger la mayor parte de los beneficios de ese progreso, y Frías va a deplorar que la ley dictada por el estado de Buenos Aires contra los vagos, si fulmina a quienes visitan las tabernas en días de trabajo, no reprime a quienes lo hacen en el Día del Señor. Pero esas limitaciones son extremadamente leves, y Frías insiste más en el apoyo que los principios cristianos pueden ofrecer al orden social que en las correcciones que sería preciso introducir en éste para adecuarlo a aquéllos.

Esa era una de las facilidades que debe concederse, porque sabe demasiado bien que su prédica se dirige a un público cuya indiferencia es aún más difícil de vencer que una hostilidad más militante. Si las apelaciones a una fe religiosa que ese público no ha repudiado no parecen demasiado eficaces, tampoco lo son más las dirigidas al sentido de conservación de las clases propietarias. La prédica de Frías será recusada

sobre todo por irrelevante, y nadie lo hará más desdeñosamente que Sarmiento. Según el alarmado paladín de la fe, observa Sarmiento en 1856, “estamos en plena Francia y vamos recién por los tumultos de junio, los talleres nacionales, M. Falloux ministro, y los socialistas enemigos de Dios y de los hombres”. Sarmiento, por su parte, prefiere creer que está en Buenos Aires, y que ni el errante espectro del comunismo ni el autoritarismo conservador y plebiscitario tienen soluciones válidas que ofrecer a un Río de la Plata que afronta problemas muy distintos de los de la Francia posrevolucionaria.

2) *La alternativa revolucionaria*. Si la lección reaccionaria que Frías dedujo de las convulsiones de 1848 fue recibida con glacial indiferencia, la opuesta fue aún más pronto abandonada. Sin duda al fin de su vida Echeverría saludó en las jornadas de febrero el inicio de una “nueva era palingenésica” abierta por el “pueblo revelador”, suerte de Cristo colectivo “que santificó con su sangre los dogmas del Nuevo Cristianismo”. Sin duda creyó posible en su entusiasmo abandonar así las reticencias que frente a la tradición saintsimoniana había aún juzgado ineludible exhibir sólo un año antes en su polémica con el rosista Pedro de Angelis; sin duda fue aún más allá al señalar como legado de la revolución “el fin del *proletarismo*, forma postrera de esclavitud del hombre por la propiedad”.

Pero ese entusiasmo no iba a ser compartido por mucho tiempo. Al conmemorar en Chile el primer aniversario de la revolución de febrero, Sarmiento se apresura a celebrar en ella el triunfo final del principio republicano, luego de un conflicto que ha llenado casi tres cuartos de siglo de historia de Francia. Del resto del mensaje revolucionario ofrece una versión que lo depura de sus motivos más capaces de causar alarma: “Lamartine, Arago, LedruRollin, Louis Blanc –no deja de recordar a sus lectores chilenos– han proclamado el principio de la inviolabilidad de las personas y de la propiedad”. Pero incluso esa edulcorada del programa social de algunos sectores revolucionarios es condenada por irrelevante en el contexto hispanoamericano; sería oportuno dejar que en París “los primeros pensadores del mundo discutan pacíficamente las cuestiones sociales, la organización del trabajo, ideas sublimes y generosas, pero que no están sancionadas aún por la conciencia pública, ni por la práctica”. Ello es tanto más necesario porque cualquier planteamiento prematuro de esos problemas podría persuadir a muchos de que “las insignificantes luchas de la industria son la guerra del *rico* contra el *pobre*”. Esa idea “lanzada en la sociedad, puede un día estallar”. Para evitar que eso ocurra, la represión del debate ideológico no parece ser demasiado eficaz, sobre todo porque la disposición a imponerla parece estar ausente. La educación, en cambio, hará ineficaz cualquier prédica disolvente: “ya que no imponéis respeto a los que así corrompen por miedo, o por intereses políticos, la conciencia del que no es más que un poco más pobre que los otros, educad su razón, o la de sus hijos, por evitar el desquiciamiento que ideas santas, pero mal comprendidas, pueden traer un día no muy lejano”. La conmemoración de la revolución desemboca así en la defensa de la educación popular como instrumento de paz social en el marco de una sociedad desigual. Pero aun esa aceptación tan limitada y reticente de la tradición revolucionaria parecerá pronto excesivamente audaz: en las acusaciones recíprocas que en 1852 se dirigirán Alberdi y Sarmiento, la menos grave no será la de tibieza en la oposición al peligro revolucionario. Muy pocos, entre los que en el Río de la Plata escriben de asuntos públicos en medio de la marea contrarrevolucionaria que viene de Europa, dejan de reflejar ese nuevo clima marcado por un creciente conservadorismo. Lo eluden mejor quienes creen aún posible, después de las tormentas de 1848, proponer vastas reformas del sistema económico-social en las que no ven el objetivo de la acción revolucionaria de los desfavorecidos por el orden vigente, sino el fruto de la acción esclarecida de un poder situado por encima de facciones y clases.

3) *Una nueva sociedad ordenada conforme a razón*. En esos años agitados no podrán encontrarse entre los miembros de la élite letrada del Río de la Plata muchos que sean capaces de conservar esa concepción del cambio social. Es comprensible que la obra de Mariano Fragueiro se nos presente en un aislamiento que sus no escasos admiradores retrospectivos hallan espléndido, y que sus contemporáneos preferían atribuir a su total irrelevancia. Este próspero caballero cordobés, de antigua lealtad unitaria, contó entre los maduros y entusiastas reclutas de la Nueva Generación. Las tormentas políticas que lo llevaron a Chile no alcanzaron a privarlo de una sólida fortuna, que lo ocupó más que la acción política, y en su país de destierro publicó en 1850 su *Organización del crédito*³. Encontramos en ella la misma apreciación de las ventajas que para cualquier orden futuro derivarán del esfuerzo de Rosas por dar uno estable a las provincias rioplatenses, que tres años antes había expresado Alberdi. Fragueiro halla ese legado de concentración del poder político tanto más digno de ser atesorado porque –como intentará probar en su libro– ese poder debe tomar a su cargo un vasto conjunto de tareas que en ese momento no ha asumido en ninguna parte del mundo.

³ En *Cuestiones argentinas y organización del crédito*, Buenos Aires, Solar Hachette, 1976.

Toca al Estado, en efecto, monopolizar el crédito público. La transferencia de éste a la esfera estatal es justificada por Fraguero a través de una distinción entre los medios de producción –sobre los cuales el derecho de propiedad privada debe continuar ejerciéndose con una plenitud que no tolera ver limitada– y la moneda que –en cuanto tal– “no es producto de la industria privada ni es capital”; moneda y crédito no integran, por su naturaleza misma, la esfera privada. La estatización del crédito debe hacer posible al Estado “la realización de empresas y trabajos públicos, casas de seguros de todo género, y todo aquello de cuyo uso se saca una renta pagada por una concurrencia de personas y de cosas indeterminadas, como puertos, muelles, ferrocarriles, caminos, canales, navegación interior, etc.”, que serán también ellos de propiedad pública. En la exploración de nuevos corolarios para su principio básico, Fraguero no se detiene ante la prensa periódica; aquí la iniciativa del Estado concurrirá con la privada, pero sólo la prensa estatal podrá publicar avisos pagados, y toda publicación, periódica o no, que haya sido financiada apelando al crédito, sólo verá la luz si un cuerpo de lectores designados por el gobierno le asigna “la clasificación de útil”.

Sin duda el edificio de ideas construido por Fraguero no carece de coherencia, pero no parece que de él puedan derivarse soluciones fácilmente aplicables a la Argentina que está dejando atrás la etapa rosista. Así lo entendió Bartolomé Mitre; este recluta más joven y tardío de la generación de 1837 –tras de rendir homenaje a la intención generosa de su antiguo compañero de causa– la juzgaba de modo efectivista pero no totalmente injusto, al señalar que el medio descubierto por Fraguero para asegurar la libertad de prensa era la reimplantación de la censura previa. La imposibilidad de confiar la solución de los problemas argentinos a un conjunto de propuestas cuyo mérito principal debía ser su adecuación a una noción básica juzgada de verdad evidente, parece haber sido advertida también por el mismo Fraguero cuando –luego de la caída de Rosas– compuso sus *Cuestiones Argentinas*. Allí propone una agenda para el país en trance de renovación, y aunque algunas de sus propuestas reiteran las de *Organización del crédito*, el conjunto está caracterizado por un marcado eclecticismo. Ello no aumenta necesariamente el poder convincente de su obra; si –como quiere Ricardo Rojas– las *Cuestiones Argentinas* son un libro gemelo de las *Bases* de J. B. Alberdi, basta hojearlo para advertir muy bien por qué ese demasiado afortunado hermano lo iba a mantener en la penumbra, pese a los esfuerzos de tantos comentaristas benévolos por corregir esa secular indiferencia.

4) *En busca de una alternativa nueva; el autoritarismo progresista de Juan Bautista Alberdi*. Como la *Organización del crédito*, el programa ofrecido en las *Bases* había sido desarrollado a partir de un número reducido de premisas explícitas; a diferencia del Fraguero de 1850, Alberdi había sabido deducir de ellas colorarios cuyo más obvio atractivo era su perfecta relevancia a esa coyuntura argentina.

Ya en 1847 Alberdi había visto como principal mérito de Rosas, su reconstrucción de la autoridad política. Por entonces había invocado, del futuro, la institucionalización de ese poder. De ese cambio que se le aparecía como valioso en sí mismo, esperaba que ayudase a mantener el moderado avance económico que estaba caracterizando a los últimos años rosistas. En las *Bases*⁴ va a reafirmar con nuevo vigor ese motivo autoritario, que se exhibe ahora con mayor nitidez porque la reciente experiencia europea –y en primer lugar la de una Francia que está completando su vertiginosa evolución desde la república democrática y social al imperio autoritario– parece mostrar en él la inesperada ola del futuro; Alberdi desde 1837 ha intentado sacar lecciones permanentes del estudio de los procesos políticos que se desenvuelven ante sus ojos, y no está inmune al riesgo implícito en esa actitud; a saber, el de descubrir en la solución momentáneamente dominante el definitivo punto de llegada de la historia universal.

Pero si el ejemplo europeo incita a Alberdi a articular explícitamente los motivos autoritarios de su pensamiento, la función política que asigna el autoritarismo sigue siendo diferente de la que justifica al de Napoleón III. La solución propugnada en las *Bases* tiene sin duda en común con éste la combinación de rigor político y activismo económico, pero se diferencia de él en que se rehúsa a ver en la presión acrecida de las clases desposeídas el estímulo principal para esa modificación en el estilo de gobierno. Por el contrario, él aparece como un instrumento necesario para mantener la disciplina de la élite, cuya tendencia a las querellas intestinas sigue pareciendo –como cuando primero fue formulado el *Credo de la Joven Generación*– la más peligrosa fuente de inestabilidad política para el entero país. Del mismo modo, Alberdi permanecerá sordo a los motivos “sociales” que estarán presentes en el progresismo económico –como lo están ya en el autoritarismo– de Luis Napoleón. Para éste, en efecto el bienestar que el avance de la economía hace posible no sólo está destinado a compensar las limitaciones impuestas a la libertad política, sino también a atenuar las tensiones sociales dramáticamente reveladas en 1848.

Para Alberdi, la creación de una sociedad más compleja (y capaz de exigencias más perentorias) que la moldeada por siglos de atraso colonial, deberá ser el punto de llegada del proceso de creación de una

⁴ Juan Bautista Alberdi, *Bases y puntos de partida para la organización nacional*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Argentina Fundamental, n°16, 1979.

nueva economía. Esta será forjada bajo la férrea dirección de una élite política y económica consolidada en su prosperidad por la paz de Rosas y heredera de los medios de coerción por él perfeccionados; esa élite contará con la guía de una élite letrada, dispuesta a aceptar su nuevo y más modesto papel de definidora y formuladora de programas capaces de asegurar —a la vez que un rápido crecimiento económico para el país— la permanente hegemonía y creciente prosperidad de quienes tienen ya el poder.

Mientras se edifica la base económica de una nueva nación, quienes no pertenecen a esas élites no recibirán ningún aliciente que haga menos penoso ese período de rápidos cambios e intensificados esfuerzos. Su pasiva, subordinación es un aspecto esencial del legado rosista que Alberdi invita a atesorar: por vía autoritaria se los obligará a prescindir de las prevenciones frente a las novedades del siglo., que Rosas había creído oportuno cultivar para consolidar su poder. Que el heredero de éste es lo bastante fuerte para imponer disciplina a la plebe, es para Alberdi indudable; es igualmente su convicción (una convicción nada absurda) que de esa plebe debe temerse, por el momento, más el pasivo apego que cualquier veleidad de recusar de modo militante las desigualdades sociales vigentes.

Crecimiento económico significa para Alberdi crecimiento acelerado de la producción, sin ningún elemento redistributivo. No hay —se ha visto ya— razones político-sociales que hagan necesario este último; el autoritarismo preservado en su nueva envoltura constitucional es por hipótesis suficiente para afrontar el módico desafío de los desfavorecidos por el proceso. Alberdi no cree siquiera preciso examinar si habría razones económicas que hicieran necesaria alguna redistribución de ingresos, y su indiferencia por este aspecto del problema es perfectamente, entendible: el mercado para la acrecida producción argentina ha de encontrarse sobre todo en el extranjero.

Entregándose confiadamente a las fuerzas cada vez más pujantes de una economía capitalista en expansión, el país conocerá un progreso cuya unilateralidad Alberdi subraya complacido. Sería vano buscar en él eco alguno de la actitud más matizada y reticente que frente a las oportunidades abiertas por esa expansión habían madurado en el mundo hispánico y que conservaban tanto imperio sobre Sarmiento. Que el avance avasallador de la nueva economía no podría tener sino consecuencias benéficas, es algo que para Alberdi no admite duda, y esta convicción es el correlato teórico de su decisión de unir el destino de la élite letrada, a la que confiesa pertenecer, con el de una élite económico-política cuya figura representativa es el vencedor de Rosas, ese todopoderoso gobernador de Entre Ríos, gran hacendado y exportador, que ha hecho la guerra para abrir del todo a su provincia el acceso al mercado ultramarino.

Ese proyecto de cambio económico, a la vez acelerado y unilateral, requiere un contexto político preciso, que Alberdi describe bajo el nombre de república posible. Recordando a Bolívar, Alberdi dictamina que Hispanoamérica necesita por el momento monarquías que puedan pasar por repúblicas. Pero no se trata tan sólo de ofrecer un homenaje simbólico a los prejuicios antimonárquicos de la opinión pública hispanoamericana. La complicada armadura institucional propuesta en las *Bases*, si por el momento está destinada sobre todo a disimular la concentración del poder en el presidente, busca a la vez impedir que el régimen autoritario que Alberdi postula sea también un régimen arbitrario. La eliminación de la arbitrariedad no es tampoco un homenaje a un cierto ideal político; es por lo contrario vista por Alberdi como requisito ineludible para lograr el ritmo de progreso económico que juzga deseable. Sólo en un marco jurídico definido rigurosamente de antemano, mediante un sistema de normas que el poder renuncia a modificar a su capricho, se decidirán los capitalistas y trabajadores extranjeros a integrarse en la compañía argentina. Que la eliminación de la arbitrariedad no es para Alberdi un fin en sí mismo lo revela su balance del régimen conservador chileno: su superioridad sobre los claramente arbitrarios de los países vecinos le parece menos evidente desde que cree comprobar que ella no ha sido puesta al servicio de una plena apertura de la economía y la sociedad chilena al aporte extranjero, por el contrario restringido por las limitaciones que le fija la Constitución de 1833 y las igualmente importantes que las leyes chilenas conservan.

Para Alberdi, en efecto, la apelación al trabajo y el capital extranjero constituye el mejor instrumento para el cambio económico acelerado que la Argentina requiere. El país necesita población; su vida económica necesita también protagonistas dispuestos de antemano a guiar su conducta en los modos que la nueva economía exige. Como corresponde a un momento en que la inversión no ha adoptado aún por completo las formas societarias que la dominarán bien pronto. Alberdi no separa del todo la inmigración de trabajo de la de capital, que ve fundamentalmente como la de capitalistas. Para esa inmigración, destinada a traer al país todos los factores de producción —excepto la tierra, hasta el momento ociosa— se prepara sobre todo el aparato político que Alberdi propone. Pero éste no ofrece suficiente garantía en un país que no es seguro que haya alcanzado definitivamente la estabilidad política, y Alberdi urgirá al nuevo régimen a hacer de su apertura al extranjero tema de compromisos internacionales: de este modo asegurará, aun contra sus sucesores, lo esencial del programa alberdiano.

Sin duda Alberdi está lejos de ver en esta etapa de acelerado desarrollo económico, hecho posible por una estricta disciplina política y social, el punto de llegada definitivo de la historia argentina. La mejor justificación de la república posible (esa república tan poco republicana) es que está destinada a dejar paso a la república verdadera. Esta será también posible cuando (pero sólo cuando) el país haya adquirido una estructura económica y social comparable a la de las naciones que han creado y son capaces de conservar ese sistema institucional. Alberdi admite entonces explícitamente el carácter provisional del orden político que propone; de modo implícito postula una igual provisionalidad para ese orden social marcado por acentuadas desigualdades y la pasividad espontánea o forzada de quienes sufren sus consecuencias, que juzga inevitable durante la construcción de una nación nueva sobre el desierto argentino.

Aunque Alberdi dedica escaso tiempo a la definición del lugar de los sectores ajenos a la élite de esa etapa de cambio vertiginoso, cree necesario examinar con mayor detención, aun en relación con ellos, la noción que hace de los avances de la instrucción un instrumento importante de progreso económico y social. No es necesaria, asegura Alberdi, una instrucción formal muy completa para poder participar como fuerza de trabajo en la nueva economía; la mejor instrucción la ofrece el ejemplo de destreza y diligencia que aportarán los inmigrantes europeos. Y por otra parte, una difusión excesiva de la instrucción corre el riesgo de propagar en los pobres nuevas aspiraciones, al darles a conocer la existencia de un horizonte de bienes y comodidades que su experiencia inmediata no podría haberles revelado; puede ser más directamente peligrosa si al enseñarles a leer pone a su alcance toda una literatura que trata de persuadirlos de que tienen, también ellos, derecho a participar más plenamente del goce de esos bienes.

Un exceso de instrucción formal atenta entonces contra la disciplina necesaria en los pobres. Traspuesta en una clave diferente, encontramos la misma reticencia frente al elemento que ha servido para justificar la pretensión de la élite letrada a la dirección de los asuntos nacionales: su comercio exclusivo con el mundo de las ideas y las ideologías, que la constituiría en el único sector nacional que sabe qué hacer con el poder.

Esa imagen –que Alberdi ahora recusa– propone una estilización de su lugar y su función en el país que constituye una autoadulación, pero también un autoengaño, de la élite letrada. La superioridad de los letrados, supuestamente derivada de su apertura a las novedades ideológicas que los transforma en inspiradores de las necesarias renovaciones de la realidad local, vista más sobriamente, es legado de la etapa más arcaica del pasado hispanoamericano: se nutre del desprecio premoderno de la España conquistadora por el trabajo productivo. Que así están las cosas lo prueba la resistencia de la élite letrada a imponerse a sí misma las transformaciones radicales de actitud y estilo que tan infatigablemente sigue proponiendo al resto del país. El ideólogo renovador no es sino el heredero del letrado colonial, a través de transformaciones que sólo han servido para hacer aún más peligroso su influjo.

En efecto, si de la colonia viene la noción de que los letrados tienen derecho al lugar más eminente en la sociedad, de la revolución viene la de que la actividad adecuada para ellos es la política. No sólo eso: la revolución ha hecho suyo un estilo político que legitima las querellas superfluas en que se entretiene el ocio aristocrático, aceptado desde su origen como ideal por la clase letrada. Así se transforma ésta en gravísimo factor de perturbación. ¿En nombre de qué? De ideales políticos tan intransigentes como irrelevantes, que traducen casi siempre el deseo de adquirir el poder y utilizarlo, para satisfacer pasajeros caprichos, o en el mejor (o más bien peor) de los casos, el proyecto aún más peligroso de rehacer todo el país sobre la imagen de su élite letrada.

Este retrato sistemáticamente sombrío del grupo al que pertenece Alberdi, inspirado en un odio a sí mismo que se exhibe, por ejemplo, en su identificación como uno de esos “abogados. que saben escribir libros”, deplorable tipo humano que es de esperar haya de desaparecer pronto del horizonte nacional, no carece sin duda de una maligna penetración. Pero induce a Alberdi a recusar demasiado fácilmente las objeciones que a su proyecto político, presentado con sobría maestría en el texto descarnado de las *Bases*, van a oponerse. No tendrá así paciencia con un Sarmiento, que halla excesiva la pena de muerte que en Entre Ríos, se aplica a quien roba un cerdo. Esa “absolución inaudita del comunismo” revela que Sarmiento no es de veras partidario de los cambios radicales que el país necesita. Si quisiera los fines que dice ansiar tanto como Alberdi, querría también los únicos medios que pueden llevar a ellos.

¿Pero es cierto que son éstos los únicos medios? Las objeciones que oponen al proyecto de Alberdi quienes entraron con él en la vida pública en pos de transformaciones muy diferentes de las propuestas en las *Bases*, no son las únicas imaginables: el camino que Alberdi propone no sólo choca con ciertas convicciones antes compartidas con su grupo; se apoya en una simplificación tan extrema del proceso a través del cual el cambio económico influye en el social y político, que su utilidad para dar orientación a un proceso histórico real puede ser legítimamente puesta en duda. Alberdi espera del cambio económico que haga nacer a una sociedad, a una política, nuevas; ellas surgirán cuando ese cambio económico se haya consumado; mientras

tanto, postula el desencadenamiento de un proceso económico de dimensiones gigantescas que no tendría, ni entre sus requisitos ni entre sus resultados inmediatos, transformaciones sociales de alcance comparable; así cree posible crear una fuerza de trabajo adecuada a una economía moderna manteniendo a la vez a sus integrantes en feliz ignorancia de las modalidades del mundo moderno (para lo cual aconseja extrema parsimonia en la difusión de la instrucción popular). Antes de preguntarnos si ese ideal es admisible, cabe indagar si es siquiera realizable.

Aun así, las *Bases* resumen con una nitidez a menudo deliberadamente cruel el programa adecuado a un frente antirrosista tal como la campaña de opinión de los desterrados había venido suscitando: ofrece, a más de un proyecto de país nuevo, indicaciones precisas sobre cómo recoger los frutos de su victoria a quienes han sido convocados a decidir un conflicto definido como de intereses. Y dota a ese programa de líneas tan sencillas, tan precisas y coherentes, que es comprensible que se haya visto en él sin más el de la nueva nación que comienza a hacerse en 1852.

Bien pronto ese papel fundacional fue reconocido a las *Bases* incluso por muchos de los que sentían por su autor un creciente aborrecimiento: la convicción de que los textos que puntuaron la carrera pública tanto más exitosa de sus grandes rivales pesan muy poco al lado del descarnado y certero en que Alberdi fijó la tarea para la nueva hora argentina fue igualmente compartida. Aquí no se intentará recusarla; sólo limitarla al señalar que –aunque, como suele, nunca la haya presentado de modo sistemático– Sarmiento elaboró una imagen del nuevo camino que la Argentina debía tomar, que rivaliza en precisión y coherencia con la alberdiana, a la que supera en riqueza de perspectivas y contenidos.

5) *Progreso sociocultural como requisito del progreso económico*. Se ha visto ya que Alberdi prefirió no verlo así: Sarmiento se atreve a dudar de la validez de sus propuestas porque es a la vez un nostálgico de la siesta colonial y de la turbulencia anárquica que siguió a la Independencia. Sin duda este diagnóstico malévolo es más certero que el de adversarios más tardíos de Sarmiento, que afectan ver en él el paladín de un progresismo abstracto y escasamente interesado en lo que el progreso destruye. Sarmiento sintió más vivamente que muchos de sus contemporáneos el vínculo con el pasado colonial, y su temperamento se hallaba más cómodo en el torbellino de una vida política facciosa que en un contexto de acción más disciplinada. Pero la *pietas* con que se vuelve hacia la tradición colonial no le impide subrayar que está irrevocablemente muerta y que cualquier tentativa de resucitarla sólo puede concluir catastróficamente, y su desgarrado estilo político fue compatible, por ejemplo, con una constancia en el apoyo al conservadorismo chileno, que iba bien pronto a tener ocasión de comparar favorablemente con la más voluble actitud de Alberdi... No es entonces la imposibilidad congénita de aceptar un orden estable la que mueve a Sarmiento a recusar el modelo autoritario-progresista propuesto por Alberdi; es su convicción de que conoce mejor que Alberdi los requisitos y consecuencias de un cambio económico-social como el que la Argentina posrosista debe afrontar.

Esa imagen del cambio posible y deseable, Sarmiento la elaboró también bajo el influjo de la crisis europea que se abrió en 1848. Como Alberdi, Sarmiento deduce de ella justificaciones nuevas para una toma de distancia, no sólo frente a los ideólogos del socialismo sino ante una entera tradición política que nunca aprendió a conciliar el orden con la libertad. Pero mientras Alberdi juzgaba aún posible recibir una última lección de Francia, y veía en el desenlace autoritario de la crisis revolucionaria un ejemplo y un modelo, Sarmiento deducía de ella que lo más urgente era que Hispanoamérica hallase manera de no encerrarse en el laberinto del que Francia no había logrado salir desde su gran revolución.

Esa recusación de Francia como nación guía había sido ya preparada por el contacto que Sarmiento tuvo con el que Echeverría iba a llamar pueblo revelador, que no dejó de provocarle algunas decepciones. De París a Bayona se le reveló toda una Francia por él insospechada, que se le aparecía tan arcaica como los rincones más arcaicos de Chile. En ese vasto mar, algunas islas de modernidad emergían, y en primer término París, que provocó en Sarmiento reacciones bastante mezcladas. Aunque París no podía proporcionarle una experiencia directa del nuevo orden industrial, le permitía percibir la presencia de tensiones latentes y contrastes demasiado patentes que confirmaban su imagen previa de las condiciones en que se daban los avances del maquinismo. Esas reticencias lo preparaban muy bien para proclamar, ante la crisis político-social abierta en 1848, las insuficiencias del modelo francés y la necesidad de un modelo alternativo. Para entonces creía haberlo encontrado ya en los Estados Unidos.

La sección de los *Viajes* dedicada a ese país, si mantiene el equilibrio entre análisis de una sociedad y crónica de viaje que caracteriza a toda la obra, incluye una tentativa más sistemática de lo que parece a primera vista por descubrir la clave de la originalidad: aunque los estudios del texto sarmientino no dejan de evocar el obvio paralelo con Tocqueville, el interés que guía a Sarmiento y la lección que espera de Estados Unidos son muy distintos que en el francés. No le preocupa primordialmente examinar de qué modo se ha alcanzado allí una solución al gran problema político del siglo XIX, la conciliación de la libertad y la

igualdad, sino rastrear el surgimiento de una nueva sociedad y una nueva civilización basadas en la plena integración del mercado nacional.

A los arados de diseño y material cambiantes y casi siempre arcaicos que ofrece Europa, los Estados Unidos oponen unos pocos modelos constantemente renovados y mejorados, y que comienzan ya a producirse para toda la nación en contados centros industriales: la misma diferencia se presenta en cocinas, aperos, ropas... He aquí una perspectiva que no se esforzaron por explorar ni siquiera los escasos observadores que centraron su interés en la peculiaridad económica, antes que en las político-sociales, de los Estados Unidos, y que permitiría a Sarmiento aproximarse de modo nuevo a otros aspectos de la realidad norteamericana. La importancia de la palabra escrita en una sociedad que se organiza en torno a un mercado nacional –y no a una muchedumbre de semiaislados mercados locales– se le aparece de inmediato como decisiva: ese mercado sólo podría estructurarse mediante la comunicación escrita con un público potencial muy vasto y disperso: el omnipresente aviso comercial pareció a Sarmiento, a la vez que un instrumento indispensable para ese nuevo modo de articulación social, una justificación adicional de su interés en la educación popular.

. Pero si esa sociedad requiere una masa letrada es porque requiere una vasta masa de consumidores; para crearla no basta la difusión del alfabeto, es necesaria la del bienestar y de las aspiraciones a la mejora económica a partes cada vez más amplias de la población nacional. Si para esa distribución del bienestar a sectores más amplios debe ofrecer una base sólida la de la propiedad de la tierra (y desde que conoce Estados Unidos, Sarmiento no dejará de condenar –aunque con vehemencia variable según la coyuntura– la concentración de la propiedad territorial en Chile y la Argentina), para asegurar la de las aspiraciones será preciso hallar una solución intermedia entre una difusión masiva y prematura de ideologías igualitarias (que había señalado en *Facundo* como una de las causas del drama político argentino) y ese mantenimiento de la plebe en feliz ignorancia que iba a preconizar Alberdi.

Sarmiento veía en la educación popular un instrumento de conservación social, no porque ella pudiese disuadir al pobre de cualquier ambición de mejorar su lote, sino porque debía, por el contrario, ser capaz –a la vez que de sugerirle esa ambición– de indicarle los modos de satisfacerlas en el marco social existente. Pero esa función conservadora no podría cumplirla si esto último fuese en los hechos imposible.

El ejemplo de Estados Unidos persuadió a Sarmiento de que la pobreza del pobre no tenía nada de necesario. Lo persuadió también de algo más: que la capacidad de distribuir bienestar a sectores cada vez más amplios no era tan sólo una consecuencia socialmente positiva del orden económico que surgía en los Estados Unidos, sino una condición necesaria para la viabilidad económica de ese orden. La imagen del progreso económico que madura en Sarmiento, porque es más compleja que la de Alberdi, postula un cambio de la sociedad en su conjunto, no como resultado final y justificación póstuma de ese progreso, sino como condición para él.

. En la que Sarmiento presenta como modelo (más móvil, si no necesariamente más igualitario, que las hispanoamericanas) la apetencia de la plebe por elevarse sobre su condición, lejos de constituir la amenaza al orden reinante que temía Alberdi, puede alimentar los mecanismos que mantienen su vigencia. Sin duda esta imagen del cambio económico-social deseable no deja de reflejar la constante ambivalencia en la actitud de Sarmiento frente a la presión de los desfavorecidos en una sociedad desigual; si quiere mejorar su suerte, sigue hallando peligroso que alcancen a actuar como personajes autónomos en la vida nacional; la alfabetización les enseñará a desempeñar un nuevo papel en ella, pero ese papel habrá sido preestablecido por quienes han tomado a su cargo dirigir el complejo esfuerzo de transformación a la vez económica, social y cultural, de la realidad nacional.

El ejemplo de los Estados Unidos a la vez que incita a Sarmiento a prestar atención al contexto sociocultural dentro del cual ha de darse el progreso económico, hace para él innecesario definir los requisitos políticos para ese progreso con una precisión comparable a la que buscó alcanzar Alberdi. Sarmiento no sólo no se formó una idea muy alta del nivel de la vida política norteamericana (Tocqueville, que había alcanzado un juicio también matizado, no había dejado por eso de buscar en ella el ejemplo de una solución viable al dilema político de su tiempo); no parece tampoco haber advertido en esa esfera el anticipo aún inmaduro de un orden futuro que creyó descubrir, en cambio, en la social y económica. Por eso mismo no se empeña en escudriñar la presencia de un sistema de soluciones políticas detrás de las anécdotas a veces grotescas con que ameniza sus recuerdos de viaje.

Sin duda, si no una lección explícita, hay sí una implícita en ese espectáculo abigarrado: ese orden férreo mantenido por una autoridad siempre dispuesta a afirmar su supremacía –que Alberdi postularía como requisito esencial del progreso– no ha sido necesario para asegurar el de Estados Unidos: una constante turbulencia, un desgarramiento polémico que no conoce los límites de la prudencia mejor que los del buen gusto, una sucesión frenética de emergencias políticas seguidas con curiosidad entre apasionada y divertida por una

activísima opinión pública, todo eso, que el observador de paso corre riesgo de interpretar como signo de una inminente quiebra del orden político, es por el contrario uno de los rasgos normales de ese orden, que ha hecho posible un vertiginoso progreso económico. Pero, precisamente porque se inhibe de extraer ninguna enseñanza explícita de tal espectáculo incongruente, Sarmiento no va por el momento a deducir de él siquiera la puramente negativa que rehúsa al autoritarismo la dignidad de precondition del progreso.

Al salir de los Estados Unidos, Sarmiento podría haber dicho, como algún peregrino a la URSS noventa años más tarde, que había visto el futuro y que el futuro en efecto funcionaba. De vuelta en Chile, se dedicaría a escudriñar los primeros anticipos de ese futuro, rastreando los efectos mediatos e inmediatos de la nueva prosperidad creada por la del mercado californiano a las exportaciones chilenas: más allá de la zona triguera, advertía en 1849 su impacto en los avances de la construcción privada en Santiago y en los del nivel de vida de la plebe urbana; era la ampliación del mercado, a través de la del consumo, la que subtendía todos esos avances y dotaba de un nuevo dinamismo a la economía chilena en su conjunto.

En 1855 vería en ese episodio una oportunidad perdida: Chile creyó eterno su dominio del mercado ofrecido por las tierras del oro, bien pronto borrado por el surgimiento de la agricultura californiana. Esa falta de todo cálculo y toda previsión juzga a los terratenientes como a los labradores chilenos; ella es en suma fruto de la ignorancia, y confirma que la supervivencia misma de la economía chilena depende de la mejora rápida del nivel de instrucción popular. Hay otra lección que Sarmiento no subraya pero no deja de atesorar: en un Chile dominado por la clase terrateniente, los avances de la igualdad social no podrían basarse en una mayor difusión de la propiedad de la tierra. En pocas páginas, admirablemente penetrantes, Sarmiento va a esbozar una línea alternativa de desarrollo: la modernización de la agricultura chilena –de todos modos condición indispensable para su supervivencia– sólo puede hacerse en el marco de la gran explotación capitalista (aunque Sarmiento ignora el nombre, describe muy bien la cosa). Ello exige una masa de asalariados rurales instruidos y bien remunerados, pero poco numerosos; complemento de ese cambio debe ser el crecimiento de las ciudades, único desemboque a la población campesina expulsada de la tierra por esa vasta transformación. Será en la ciudad donde surja una sociedad más completa y móvil, y para que esto ocurra, la difusión de la instrucción es todavía más imprescindible.

Como se ve –a diferencia de Alberdi, que conoce una sola receta de transformación económico-social– Sarmiento es perfectamente capaz de percibir la posibilidad de caminos y estilos de desarrollo alternativos al que había descubierto en los Estados Unidos. Pero ese texto de 1855 muestra además otra cosa, pese a que su entusiasmo por el modelo norteamericano se debe a algo más que a la confianza en su eficacia para lograr progresos rápidos (como lo revela la imagen de la futura hegemonía norteamericana como suprema victoria de la democracia plebeya sobre la Europa monárquica y aristocrática, que muestra hasta qué punto Sarmiento ha buscado en Estados Unidos una confirmación antes que una alternativa para el ideario democrático-igualitario que cree definitivamente comprometido en Europa), está dispuesto a acatar la gravitación a su juicio incontrastable de ciertos condicionantes sociales o políticos que hacen imposible la adopción de ese modelo.

También en ese aspecto esos escritos anticipan el sentido de la acción política de Sarmiento, una vez vuelto a la Argentina. El espectáculo que se le presenta al retornar a Buenos Aires confirma a la vez las seguridades y las perplejidades inspiradas en el ejemplo norteamericano y en el de un Chile que –quizá porque sospecha que ha de abandonarlo pronto– le parece ofrecer un modelo cada vez menos válido para la Argentina futura.

El progreso de Santiago, el de Valparaíso, empalidecen en comparación con el de Buenos Aires. Aunque la que fue capital rosista atraviesa ahora constantes turbulencias políticas y vive una permanente indefinición en aspectos tan esenciales como el papel de la ciudad y la provincia en un país en trance de organización, todo eso no logra afectar su insolente prosperidad presente y su inquebrantable confianza en su prosperidad futura.

De ello deduce Sarmiento que la preocupación por el orden que había obsesionado al partido conservador chileno no había estado tan claramente justificada como él mismo había creído durante su etapa de destierro. La desenfadada, la caótica libertad de Buenos Aires no era incompatible con un progreso más rápido que el chileno. Hay otra conclusión ante la que Sarmiento dice detenerse, asustado del rumbo que toma su pensamiento: el vertiginoso progreso de Buenos Aires es más antiguo que su turbulenta libertad; fue alcanzado primero bajo la administración de Rosas, cuyo despotismo arbitrario y obtuso el propio Sarmiento –entre tantos otros– había denunciado como incompatible con cualquier progreso sostenido. Al parecer ni el despotismo ni la desordenada libertad, ese Escila y ese Caribdis entre los cuales el liberalismo posrevolucionario buscaba afanosamente un rumbo salvador, tenía consecuencias tan temibles como Sarmiento, entre muchos otros, había creído.

Sin duda Sarmiento se muestra reacio a llevar a fondo la exploración de esa nueva perspectiva; con sólo vislumbrarla se ve confirmada su previa tendencia a colocar en segundo plano el marco político-institucional, cuando considera los requisitos para el radical cambio en la estructura del país que juzga a la vez urgente e inevitable.

Esa relativa indefinición de los aspectos propiamente políticos de su programa se continúa en una indefinición por lo menos igualmente marcada acerca de la articulación del grupo políticamente dirigente que tendrá a su cargo guiar la construcción de una nueva nación y la sociedad argentina en su conjunto. Alberdi había arrojado sobre esta cuestión una claridad cruel: la Argentina sería renovada por la fuerza creadora y destructora del capitalismo en avance; había en el país grupos dotados ya de poderío político y económico, que estaban destinados a recoger los provechos mayores de esa renovación; el servicio supremo de la élite letrada sería revelarles dónde estaban sus propios intereses; una vez logrado esto, esa élite debía prepararse a bien morir; una concepción que postula consecuencias constantemente benéficas para la libre acción de las fuerzas económicas y afirma con igual vigor la coincidencia necesaria entre el interés nacional y el del grupo que controla a la vez el poder político y los recursos económicos de la nación. No reconoce ya función legítima para una clase política que ambicione ser algo más que el agente de negocios de ese grupo dominante.

Sarmiento no cree, con la misma fe segura, que las consecuencias del avance de la nueva economía sobre las áreas marginales (que juzga no sólo inevitable sino también deseable) sean siempre benéficas; postula un poder político con suficiente independencia de ese grupo dominante para imponer por sí rumbos y límites a ese aluvión de nuevas energías económicas que habrá contribuido a desencadenar sobre el país. ¿Quiénes han de ejercer ese poder político, y en qué se apoyarán para ejercerlo? Sarmiento nunca se planteó la segunda pregunta; en cuanto a la primera, en el momento de retorno del destierro su respuesta es contraria a la de Alberdi: es desde luego la élite letrada, de la que se declara orgulloso integrante, y cuya historia colonial ha tratado con humilde orgullo en *Recuerdos de provincia*, la que tendrá a su cargo la función directiva. Sólo paulatinamente la acumulación de desengaños políticos (entre los cuales fue particularmente revelador el que le produjo el desinterés de la clase ilustrada sanjuanina por los programas de reforma que intentó introducir durante su breve gobernación de esa provincia, y que acrecían las cargas fiscales para las clases propietarias) lo convenció de que, si no en el pasado, en el presente esa élite letrada no estaba más interesada que otros sectores de la sociedad en favorecer el interés de la nación o el Estado; deplorablemente carente de espíritu público, usaba su superior ilustración como justificativo para ver realizado su ideal de *otium cum dignitate* a costa del erario público.

Pero Sarmiento no descubre ningún otro sector mejor habilitado para asumir esa tarea, y desde entonces se resigna a que su carrera política se transforme en una aventura estrictamente individual; sólo puede contar sobre sí mismo para realizar una cierta idea de la Argentina, y puede aproximarse a realizarla a través de una disposición constante a explorar todas las opciones para él abiertas en un panorama de fuerzas sociales y políticas cuyo complejo abigarramiento contrasta con ese orden de líneas simples y austeras que había postulado Alberdi. Para ello la relativa indiferencia por los aspectos político-institucionales del cambio que postula, lo prepara desde luego particularmente bien.

Sin duda, no es ésa una solución que Sarmiento halle admirable, y a veces va a revelar, en breves relámpagos, su cólera frente a ella y su nostalgia de alguna solución diferente. De esta manera, el mismo Sarmiento que en 1862 preconizaba la masacre de gauchos para terminar con la rebelión federal riojana, asiste menos de diez años después con orgullo patriótico a otra rebelión más vasta del federalismo andino: siguiendo a Felipe Varela, la plebe de esas provincias revela tener fibra más dura que esos chilenos acostumbrados a una mansa obediencia por el largo predominio conservador; la paz chilena es la de la muerte, pero la Argentina de la última montonera bulle de vida... Sin duda estos exabruptos quedan para la confidencia privada y no reflejan una actitud sistemática de Sarmiento; aun así expresan muy bien su convicción va inquebrantable de que —en la hora de organizar la victoria— el grupo con el cual se ha identificado y en cuyo nombre ha combatido ha hecho deserción. No mejor reflejo de una actitud sistemática es el curioso pasaje del discurso que Sarmiento pronuncia en Chivilcoy, en 1868, cuando esa carrera política que combina arisca independencia y considerable ductilidad acaba de llevarlo a la presidencia de la República. Allí se proclama dispuesto a recoger la herencia caudillesca, traspuesta a la nueva clave proporcionada por una nación moderna: el presidente es el caudillo de unos gauchos que se habrán transformado en la competencia pacífica por la conquista del bienestar. Y sin duda en una nación de veras transformada, unas masas populares capaces de hacer suya la noción que sobre el lugar que les correspondía en la sociedad había propuesto Sarmiento, hubieran podido proporcionar la base política para un programa como el que éste ofrece. Pero desde luego, la nación no se ha transformado tanto como Sarmiento quiere creer cuando la contempla desde ese rincón de excepcional prosperidad campesina que es Chivilcoy: las

clases populares no ofrecen por el momento un apoyo más sólido al programa renovador que la élite letrada. Es comprensible entonces que Sarmiento haya preferido no proseguir el examen del problema sino a través de ocasionales alusiones inspiradas por la decepción o la eurofía: de un examen más sistemático sólo podía obtener una desesperanzada lucidez frenadora de cualquier acción política.

Pero él tampoco iba a recibir estímulo del contexto en que proseguirá el debate político en la Argentina posrosista; el marcado eclecticismo y las oscilaciones aparentemente erráticas que desde 1852 iba a caracterizar a sus tomas de posición, se mostrarían más adecuados que la rigidez política del modelo alberdiano en esa permanente tormenta que iba a ser la vida política argentina en la larga etapa que se abría en Caseros. Es ya revelador que muy poco después de la caída de Rosas, cuando Alberdi y Sarmiento se enfrasquen en una no siempre decorosa batalla de pluma, no intentarán ya seriamente explorar qué los separa en la definición de los objetivos que uno y otro proponen a la nación.

Ello no se debe tan sólo a que ambos siguen aplicadamente los consejos irónicamente formulados por Larra para uso de polemistas, y revuelven su pasado, presente y futuro en busca de motivos de injuria más que de argumentos para un debate serio. Aun cuando éste se entabla se dará en torno de perspectivas de corto plazo: girará en torno a la ubicación de ambos en los conflictos que han vuelto a arremolinarse en un país que realiza tan mal el proyecto de reconciliación universal en el nuevo credo de la paz productiva, que tan útil había sido para allegar nuevos e influyentes reclutas a la batalla antirrosista.

Treinta años de discordia

Alberdi había postulado que el sistema de poder creado por Rosas sería capaz de sobrevivir a su caída para dar sólida base al orden posrosista; Varela, que el lugar de Buenos Aires en el país no sería afectado por la victoria de una coalición cimentada en la oposición común a la hegemonía de Buenos Aires sobre la entera cuenca del Plata. Ambos postulados, útiles para evitar desfallecimientos y disensiones en vísperas del combate decisivo, resultaban, apenas se los examinaba, algo de muy poca probable realización. Nada sorprendentemente, luego de 1852 el problema urgente no fue el de cómo utilizar el “poder enorme” legado por Rosas a sus enemigos, sino cómo erigir un sistema de poder en reemplazo del que en Caseros había sido barrido junto con su creador.

Así, a un Alberdi que lo invitaba a aceptar la realidad y ver en Urquiza el heredero, a la vez que el vencedor de Rosas, Sarmiento podía replicar rogando a su contrincante que se dignase mirar la realidad a la que constantemente aludía. No se trata, tan sólo, de que a juicio de Sarmiento, Urquiza no está de veras dispuesto a poner su poder al servicio de una política de rápido progreso como las que él y Alberdi proponen. La convicción de que así estaban las cosas había llevado a Sarmiento a retornar a Chile y marginarse de la política argentina; lo que lo devuelve a ella es el descubrimiento de que Urquiza no ha sabido hacerse el heredero de Rosas; no hay en la Argentina una autoridad irrecusable, hay de nuevo bandos rivales en un combate que se ha reabierto. ¿Llegará el realismo de Alberdi hasta aceptar esta situación tan distinta de la que había proyectado en 1847?

Para Alberdi objeciones como ésta reflejan un inaceptable cinismo. La creación en Buenos Aires de un centro de poder rival del que reconocía por jefe al general Urquiza no podía tener sino consecuencias calamitosas para el país, al que distraía de emprender esa transformación radical que también Sarmiento había proclamado imprescindible, para volverlo a encerrar en el viejo laberinto de querellas facciosas. Los partidos que se proclamaron muertos en Caseros resucitan para retomar su carrera de sangre, y esa tragedia fútil e interminable será la obra de quienes, como Sarmiento, se jactan de haber frustrado una ocasión, quizá irrepetible, en nombre de una política de principios. Alberdi prefiere creer que la ofuscación no es la única responsable de tan inoportuna intransigencia: Sarmiento guarda una inconfesada nostalgia de la guerra civil, y es de temer que esa inclinación secreta sea demasiado compartida en un país largamente acostumbrado a ella.

1) *Las facciones resurrectas*. Ya que Caseros no ha creado ese sólido centro de autoridad puesto al servicio del progreso –viene a decir Alberdi– ha dejado en sustancia las cosas como estaban.... Toda una literatura facciosa servida en porciones rebosantes por la prensa diaria, parece sugerir en efecto que el nuevo país vive prisionero de sus viejos dilemas. A más de diez años de la caída de Rosas, José Hernández podía abrir su serie de artículos sobre la reciente ejecución del general Peñaloza, con la denuncia de que “los salvajes unitarios están de fiesta”. Cinco años antes, en los *Debates* que publica Mitre en Buenos Aires el oriental Juan Carlos Gómez, al evocar las víctimas más numerosas de la masacre de Quinteros, denuncia en ésta el comienzo de aplicación del único programa que los blancos orientales y sus aliados los federales argentinos conocen: el exterminio del adversario.

Como temía Alberdi, un periodismo formado en el clima de guerra civil que acompañó toda la etapa rosista se esfuerza –al parecer con éxito– por mantenerlo vivo. Pero no es fácil creer que las facciones que todos habían proclamado muertas antes de Caseros, deban su inesperada vitalidad tan sólo al influjo de unas cuantas plumas mal inspiradas. Las lealtades heredadas de la etapa que cerró Caseros, ofrecen solidaridades ya hechas, que los nuevos protagonistas de las nuevas luchas no renunciarán a utilizar. El problema es que a la vez se adaptan mal a las nuevas líneas de clivaje político: la tentación de tomar distancia frente a esas identificaciones facciosas está constantemente presente, y, apenas se los examina con cuidado, los textos simétricos de Gómez y Hernández, que parecerían expresar con una inmediatez reflejada en su lenguaje violento la sed de venganza de una facción sometida a la dura ley de su vencedor, esconden una exhortación alarmada a perseverar en una lealtad facciosa cuya espontánea solidez no resulta evidente ni siquiera en ese momento de amarga prueba, en que la sangre derramada parece excluir la posibilidad misma de una solución al conflicto político, más conciliatoria que la eliminación del enemigo.

La fragilidad de ese elemento cohesivo que las facciones históricas proporcionan, se advierte ya en la relación tan ambigua que tanto Gómez como Hernández mantienen con aquéllas a las que convocan a una lucha sin cuartel. En el escrito de Gómez, si el nombre execrado del partido blanco es reiterado hasta la saciedad, su rival colorado es evocado con mucha mayor parsimonia. Es que no es evidente que Gómez sea aún colorado. Por la primera espada de ese partido, el general Flores, no tiene sino horror; su juicio, Flores no sólo ha deshonrado a su facción con una conducta digna de la adversaria, sino la ha debilitado al entrar (para favorecer su carrera personal) en transacciones con el enemigo. Quinteros debe devolver a la realidad y la acción a cuantos no están dispuestos a aceptar la sangrienta tiranía blanca, pero la victoria de éstos no significará sin más el retorno al poder de un coloradismo irremediamente manchado por culpas y claudicaciones; debe ser el comienzo de una más ambiciosa regeneración política... Gómez busca, en suma, utilizar la disciplina que surge de la lealtad a un pasado y a una divisa, para persuadir a una entera colectividad política de que su deber es recibir inspiración de quien está poniéndose al margen de ella. Esa disciplina y la más elemental que surge del miedo: quienes no reaccionen a tiempo se equivocarán al creer que su mansedumbre habrá salvado su vida.

La relación entre Hernández y el federalismo argentino es muy semejante. Sí busca ahorrar censuras explícitas a su trayectoria pasada, el hecho de que el mártir cuyo sacrificio conmemora haya luchado tenazmente contra Rosas lo obliga a los más delicados equilibrios para evitarlas, sin arrojar a la vez una mancha sobre su memoria. Aunque menos dramáticamente expresada, la relación de Hernández con el pasado de su partido no es entonces menos ambigua que la de Gómez. La misma ambigüedad básica la volvemos a encontrar en la que guarda con el jefe de ese partido. Hernández no tiene sino expresiones de respeto por el general Urquiza; aun así, le profetiza que la muerte bajo el puñal unitario será el desenlace de su carrera, si no abandona el camino las concesiones frente a un enemigo incapaz –cualquiera sea el lenguaje que adopte– de controlar su propia vocación asesina. En suma, Hernández expresa en términos de extremo decoro el temor de que su partido esté siendo traicionado por un jefe que juzga por otra parte insustituible de que el partido siga a pesar de todo esa orientación a la vez claudicante y suicida.

La apelación apasionada a una tradición facciosa refleja entonces la convicción de que esa tradición está perdiendo su imperio. No es sorprendente que el extremismo faccioso adoptado como recurso desesperado deje paso al anuncio jubiloso de la muerte de las facciones: Gómez había tomado ya la costumbre de combinar una y otra actitud; Hernández iba a pasar de la primera a la segunda a lo largo de la década del sesenta.

Si esas tradiciones facciosas agonizan es porque –como había declarado Alberdi– se están haciendo irrelevantes, y lo que las hace irrelevantes son los cambios que a pesar de todo ha traído consigo Caseros, esa victoria que Alberdi está dispuesto a confesar estéril.

¿Pero qué ha cambiado Caseros? No por cierto las situaciones provinciales consolidadas en la etapa de hegemonía del Buenos Aires rosista, que ahora se apresuran a cobijarse bajo la de su vencedor. Tampoco decisivamente el equilibrio interno a las facciones políticas uruguayas. Evidentemente Caseros ha puesto en entredicho la hegemonía de Buenos Aires y ha impuesto la búsqueda de un nuevo modo de articulación entre esta provincia, el resto del país y los vecinos. Este cambio obvio dará su tema básico a los conflictos de varias décadas revueltas, al lado de él se olvida otro no menos importante, que va también a efectuar esos conflictos.

También se ha derrumbado en Caseros el sistema de poder creado por Rosas en su provincia. Ese sistema, construido a partir de la gran movilización urbana y rural de 1828-29, había sido lenta y tenazmente despojado por su creador y beneficiario de toda capacidad de reacción espontánea, en un esfuerzo de veinte años que hace posible –bajo la apariencia de una rabiosa politización– una despolitización creciente de la sociedad entera.

La caída de Rosas deja entonces en Buenos Aires un vacío que llenan mal los sobrevivientes de la política prerrosista, como ese Vicente López y Planes, alto magistrado de la judicatura rosista que lleva a la gobernación de la provincia, en que lo instala Urquiza, la fatiga acumulada en casi medio siglo de carrera pública. Ese vacío será llenado entre junio y diciembre de 1852; en esos meses afiebrados un nuevo sistema de poder es creado en la provincia vencida; al cabo de ellos habrá surgido una nueva dirección política, con una nueva base urbana y un sostén militar improvisado en el combate, pero suficiente para jaquear, aun en ese campo, la hegemonía que Entre Ríos creyó haber ganado en Caseros. El 11 de setiembre de 1852, el día en que la ciudad y la provincia se alzaron contra su vencedor, es una fecha ya borrada de la memoria colectiva: es, sin embargo, la de una de las no muchas revoluciones argentinas que significaron un importante punto de inflexión en el desarrollo político del país.

.2) *Nace el Partido de la Libertad*. A fines de junio de 1852, la recién elegida legislatura de la provincia de Buenos Aires rechaza los términos del Acuerdo de San Nicolás, por el que las provincias otorgan a Urquiza la dirección de los asuntos nacionales durante la etapa constituyente. Un miembro distinguido de la generación de 1837, Vicente Fidel López, hecho ministro por su padre el gobernador de la provincia, defiende sus términos ante una muchedumbre que llena el recinto y las calles, a la que acusa de haber sólo recientemente brindado marco a las ceremonias rosistas. Estas líneas de razonamiento no es apreciada por su vasto público; el héroe de la jornada es, en cambio, un militar de treinta años que comienza su carrera parlamentaria de vuelta de peregrinaciones que lo han llevado por Uruguay, Bolivia y Chile. Bartolomé Mitre quiere ser portavoz de una ciudad y una provincia que ni aun en la adversidad más extrema han renunciado a defender la causa de la libertad. En nombre de ella habla quien se presenta a sí mismo como el joven héroe porteño que ha abierto a cañonazos el camino de los ministerios que otros más pusilánimes ocupan..

El proceso de invención de un pasado está comenzando: la provincia que ha conquistado al país y le ha impuesto como marca de su victoria la divisa punzó del federalismo, afecta ver en esa divisa el símbolo de la barbarie en que yacen las provincias, y que su vencedor (pero ya no libertador, pues su liberación ha sido preparada por la sangre de sus mártires y consumada por sus mejores hijos) ha intentado afrentosamente imponerle.

Está renaciendo a la vez algo que faltaba en la ciudad desde hacía veinte años: una vida política. En el mesurado diálogo entre un grupo dirigente político-económico y una élite letrada resignada a su definitiva mediatización, que según Alberdi debía determinar el futuro político de la Argentina, se entremezclaba otro turbulento e imprevisible interlocutor. La novedad comenzó por ser recibida con desdén por quienes iban a enfrentar su desafío; los horteras sentimentales que formaban público a la oratoria de Mitre no podían desde luego ser tomados en serio; esa oratoria misma, llena de efectos sabiamente calibrados con vistas a ese público, juzgaba a la empresa política a cuyo servicio era puesta.

En efecto, esa rebotante oratoria girondina parecía anunciar una recaída en el estilo político que –según todos habían convenido hasta hacía poco– había provocado la reacción federal y rosista. La breve trayectoria de Mitre no era más tranquilizadora; de Chile había sido desterrado por su participación en las agitaciones del ala extrema del renaciente liberalismo, no desprovistas de puntas socialistas. El comentario de Alberdi había sido entonces conciso, compasivo y desdeñoso: “¡Pobre, es un niño!” El pobre niño y su culto fanático de la libertad no parecían con todo demasiado temibles; su éxito parlamentario fue contrarrestado por un golpe de estado de Urquiza, dispuesto a devolver a la obediencia a la ingrata Buenos Aires. Pero la ocupación militar entrerriano-correntina se hace bien pronto insostenible: el 11 de setiembre se asistirá a un alzamiento exitoso en desafío a un ejército dispuesto de antemano a la desbandada. Entonces, esos hombres nuevos a quienes las jornadas de junio han dotado de un séquito urbano, transforman su base política en militar; cuando la fecha estaba aún viva en la memoria colectiva, la imagen que primero evocaba era quizá la del joven Adolfo Alsina, convocando esa madrugada a los guardias nacionales de la ciudad al airoso redoble de su propio tambor.

Pero esos advenedizos de la política rioplatense no están solos; junto con ellos se levantan los titulares del aparato militar creado por Rosas en la frontera india; unos y otros reciben de inmediato el apoyo de las clases propietarias de ciudad y campaña. Es que, como no se fatigará desde entonces de denunciar Alberdi, la causa de la libertad que Mitre evoca en riadas de cálida oratoria, oculta la eterna causa de Buenos Aires. La provincia hegemónica, que ha visto partir al destierro a su paladín de un cuarto de siglo, sólo ha necesitado unos pocos meses para reemplazarlo.

Las cosas no son sin embargo tan sencillas. La causa de Buenos Aires no es idéntica para los jefes de frontera, para las clases propietarias, para la nueva opinión urbana movilizada por los dirigentes surgidos en junio. Esta última identifica, en efecto, la causa de Buenos Aires con la de la libertad que se propone imponer con violenta pedagogía a las demás provincias, poco ansiosas de compartir ese bien inestimable.

Para las clases propietarias, ella significa la resistencia a incorporarse a un sistema político y fiscal que los intereses porteños no controlan; para el aparato militar exrosista, la negativa a aceptar la hegemonía entrerriana sobre la primera provincia argentina. Cuando, vencedor el movimiento en Buenos Aires busca expandirse al interior amenazando inaugurar un nuevo cielo de guerras civiles, ese aparato militar se alza, expresando así la fatiga de guerra de la entera campaña.

No logra derrocar de inmediato al gobierno de la ciudad, y Urquiza decide darle apoyo, sometiendo a la ciudad disidente a bloqueo naval. Buenos Aires supera la prueba, gracias entre otras cosas al uso generoso del soborno; Urquiza se retira una vez más y la organización militar de la campaña es cuidadosamente reestructurada para que no pueda servir de contrapeso a esa Guardia Nacional de Infantería que es la expresión militar de la facción dominante en la ciudad.

Sin duda, la prueba atravesada ha enseñado a los dirigentes políticos urbanos los límites de su libertad de decisiones; su victoria se debe en no escasa parte a que, en la emergencia, el arbitraje de las clases propietarias no les ha sido desfavorable; éstas seguirán apoyándolos, en parte debido a sus prevenciones contra la incorporación a la confederación urquicista, en parte a que no ansían enfrentar a un grupo de dirigentes que han revelado ya hasta dónde están dispuestos a llegar para conservar las posiciones adquiridas. Pero esas clases propietarias no tolerarían una política interprovincial de conflicto y aventura, y sus incómodos aliados deben aprender a combatir frente a la Confederación de las trece provincias interiores (que en 1853 se da una constitución muy cercana en sus grandes líneas a la propuesta por Alberdi) una extrema violencia verbal, cuya ausencia su clientela urbana extrañaría, con acciones mucho más circunspectas.

He aquí, entonces, a una nueva fuerza política consolidada sobre el vacío que la fuga del derrotado Rosas había creado en Buenos Aires, una fuerza que había suscitado y sabido utilizar el renacimiento de esa politización urbana que había sido ya antes clave en la vida política de la provincia y del país hasta que Rosas, la había desmontado en un esfuerzo de dos décadas. Su súbita presencia es recibida con sorpresa muy viva. Casi un cuarto de siglo después de esos episodios, un Sarmiento ya serenado concluye que Urquiza había tenido razón en preferir, al apoyo de los exigentes jóvenes con quienes el propio Sarmiento se había identificado, el de los propietarios y hombres de consejo que lo habían otorgado antes al régimen rosista. La conclusión parece algo absurda (esos jóvenes sin dinero, prestigio o influencia se alzaron en unos meses con la provincia) pero conserva un eco de la sorpresa de un país que no había esperado, al parecer, de la caída del rosismo una renovación profunda de su elenco dirigente, y hace comprensible la indignación de cuantos contaban con que el poder se transformaría a la caída de éste en recompensa a mérito acumulados en el anterior medio siglo de historia argentina.

Esa indignación está aún viva en los capítulos iniciales de *El gobierno y la alianza*⁵, Para Carlos Guido y Spano, hijo de ese ilustre confidente del general San Martín, y luego servidor discreto y eficaz de tantos gobiernos (entre ellos el de Rosas) que fue el general Guido, para este joven de bellas esperanzas e indudables talentos que nunca tendría una carrera pública, el grupo que ruidosamente invadió el escenario político porteño en 1852 sigue estando marcado en 1865 por una irremediable mediocridad; el triunfo al que ha llevado a su causa en la entera nación no es sino un cruel capricho de la fortuna.

Esa condena concisa e incisiva resume con acrecida eficacia la infatigablemente reiterada durante años por Nicolás Calvo. En el Buenos Aires organizado en estado separado, Calvo consagra su diario *La reforma pacífica* a propugnar la integración de la provincia en la confederación urquicista. Denuncia el mayor obstáculo a esa solución salvadora en un grupo dirigente al que acusa de oponerse a la reconciliación nacional únicamente para conservar su poder, ya que la intransigencia antifederal que ostenta es sólo un recurso oportunista.

Ello lo lleva a examinar prolijamente las credenciales del grupo que domina la política porteña, para hallarlas gravemente deficientes. Y no sin motivo: en él se cuentan sin duda algunos antiguos unitarios de segunda fila, como Valentín Alsina o el cordobés Vélez Sársfield (a quien Caseros sorprendió en Buenos Aires, ya asiduo concurrente a la tertulia de Manuelita Rosas), pero ¿qué pesan estas presencias al lado de la de Salvador María del Carril, el vicepresidente de Urquiza, en la constelación política de Paraná? Mitre y Sarmiento han comenzado su vida pública como seguidores de la generación de 1837, pero los sobrevivientes del grupo fundador (Alberdi, Vicente F. López, Juan M. Gutiérrez) se han identificado con la confederación urquicista.

Y la demasiado tenue justificación de los derechos de herencia exclusiva a la tradición antirrosista es todavía comprometida por la presencia, en posiciones influyentes, de figuras que no han mostrado militancia alguna frente al régimen rosista, desde ese gobernador Pastor Obligado, al cual el mote de “Nerón porteño”

⁵ En *Ráfagas*, Buenos Aires, Igon, 1879.

que liberalmente le aplica Calvo describe sin duda muy mal, pero cuya trayectoria anterior a Caseros no invita a evocar tampoco a Catón, hasta ese doctor Rufino de Elizalde, destinado a convertirse en ministro de Relaciones Exteriores del presidente Mitre, y cuya escuela ha sido la cancillería de Rosas... Calvo no escatima los ataques ad *hominem*, y ninguna falsa modestia le impide comparar a esas notabilidades de campanario, de pasado a veces escasamente claro, y su propia tanto más espectable persona.

Su crítica es sostenida por un considerable valor personal (que no convendría exagerar, sin embargo: sus denuncias cotidianas del Nerón porteño y la mazorca celeste no parecen haberle ocasionado agresión mucho más seria que la de un Sarmiento armado de su bastón, una santa cólera y la dosis en él habitual de amor al escándalo). No se caracteriza, en cambio, ni por su perspicacia ni por su eficacia; es acaso revelador que una oposición que contaba no sólo con el apoyo de ese pequeño círculo de acaudalados nostálgicos a que había quedado reducido el rosismo, sino con el de los muchos que en Buenos Aires apreciaban en poco una política que suponía un riesgo constante de colisión con el resto del país, haya encontrado vocero tan insuficiente; el hecho refleja, a su manera, el éxito de la empresa política inaugurada en junio de 1852.

Tal éxito se da en un contexto muy diferente del previsto por quienes pretendían predecir antes de 1852 el rumbo de la Argentina posrosista. No se mide en cambios sociales, en un nuevo ritmo de progreso económico estimulado por la acción estatal o en avances institucionales (sin duda Buenos Aires entra, un año después de la Confederación, en la etapa constitucional, pero ella supone innovaciones menos radicales que para su rival). Es un éxito estrechamente político: comienza a borrar las consecuencias de la derrota de Buenos Aires en Caseros, otorga, a una tradición antirrosista que se está haciendo genéricamente antifederal, una sólida base popular al identificarla con la causa de la provincia.

En ese inesperado contexto, tanto el pensamiento político como su expresión no podía sino adquirir modalidades nuevas. Los enemigos de la experiencia porteña que desde Paraná denunciaban en los improvisados dirigentes de Buenos Aires a tráfugas de la empresa común, prestan sobre todo atención al segundo aspecto: los políticos de Buenos Aires se dirigen a un público distinto y más vasto que esos grupos dominantes que Alberdi había reconocido como únicos interlocutores legítimos; el estilo que el público popular impone parece, a los de Paraná, irresponsablemente demagógico.

Pero esa imagen de los cambios que la experiencia porteña imponía a la perspectiva política de sus dirigentes era, a la vez que tendenciosa, abusivamente simple. El éxito de la disidencia de Buenos Aires había revelado la presencia decisiva de ciertos aspectos de la realidad argentina cuya gravitación no había sido aquilatada en los escritos destinados a anticipar y preparar el fin de la etapa rosista. Me aquí todo un nuevo mundo de problemas e ideas que Alberdi había ignorado sistemáticamente, al que Sarmiento sólo atendió episódicamente, pero cuya significación no podría continuar ignorada. Sin duda no es imposible deplorarla y oponerle una altiva condena, inspirada en criterios morales al parecer muy estrictos, aunque nunca muy explícitamente definidos. Pero es también posible ubicarse en esa perspectiva nueva para proponer una política que –como toda política– se dirige a ganar la adhesión e inspirar la acción de un público, pero que es algo más que un instrumento de captación de la benevolencia de ese público. Ese esfuerzo de definición de una política (que lleva implícita una imagen de la actividad política distinta de la elaborada antes de 1852) inspira los artículos con que Mitre llena no escasas columnas de su primer diario porteño, *Los Debates*. En ellos encontramos en el lugar de honor al personaje que Alberdi habría querido desterrar para siempre de la vida argentina: el partido.

El surgimiento de un interés por el partido como colectividad que –sin tener necesariamente una estructura organizativa precisa– es algo más que la mera agregación de personas que tienen puntos de vista coincidentes en torno a ciertos problemas, no es en ese momento exclusivo del Río de la Plata, y allí donde se da parece vincularse con una incorporación de sectores sociales urbanos más amplios a la vida política: en Nueva Granada, entre 1848 y 1854, la conexión es particularmente evidente, pero no es imposible rastrearla también en el renacer liberal de Chile (en el que, como se recordará, Mitre tuvo participación) o en la transición a la república liberal en Venezuela.

Ella impone una conexión nueva entre dirigentes y séquito político, un estilo nuevo también en el que antes de Mitre y sus amigos se han mostrado maestros los jóvenes liberales bogotanos o ese veterano de todas las políticas posrevolucionarias, Antonio Leocadio Guzmán, que comienza una nueva carrera como tribuno de la plebe caraqueña.

La empresa política que Mitre se esfuerza por definir presenta elementos y problemas comunes con las que han comenzado a fines de la década anterior en tantos rincones de Hispanoamérica. El énfasis en el partido, antes que el Estado o el jefe, como depositario de la lealtad política de una entera colectividad, es sólo uno de ellos. Otro es el esfuerzo por buscar un pasado para ese partido: desde México a Nueva Granada y Chile, el liberalismo que nace busca imaginar que renace pero la continuidad con la breve primavera liberal de la década de 1820 es más postulada que real (así el nuevo liberalismo chileno es en rigor el resultado de

disensiones dentro del partido conservador). La búsqueda de un pasado no es sólo juzgada necesaria por los liberales; los conservadores neogranadinos terminan por hacer suya esa franja de historia que los liberales no han mostrado interés por reivindicar, e improvisan un fervoroso culto a Bolívar, pese a que entre sus dirigentes más venerados se encuentra ese Mariano Ospina, aún ufano de haber participado en su juventud en el atentado de 1828 contra la vida del Libertador.

Esa reivindicación –tan parecida a invención– de una historia para el partido que nace, cumple una función aún más importante en esa Buenos Aires que necesita urgentemente ella misma inventarse un pasado menos objetable que el cuarto de siglo de identificación con la empresa política de Rosas. Desde que surge a la vida pública, Mitre ha sabido utilizar admirablemente la presencia de tales necesidades complementarias (un pasado para su partido, un pasado depurado de manchas para su provincia); si la provincia ha sido en efecto (como está cada vez más dispuesta a creerlo) un inexpugnable aunque secreto bastión del combate antirrosista, sus jefes naturales son quienes han expresado en lucha abierta los secretos anhelos de una mayoría silenciosa porque oprimida. Cualquier tentativa de oponer hechos a esa *fable convenue* sólo redundará en la impopularidad de aquellos que se entreguen a tan inoportunos ejercicios de memoria.

En este marco, el retorno de los restos de Rivadavia –sobre cuya acción política la generación de 1937 había pasado un juicio muy duro– lejos de marcar una vuelta al conflicto interno, viene a coronar un largo esfuerzo integrador: al recibir triunfalmente al padre de la provincia, que es a la vez el precursor de la unión nacional, Buenos Aires concluye su reconciliación consigo misma. La resurrección de una tradición política que a partir de 1837 había sido unánimemente declarada muerta, no se debe desde luego al descubrimiento en ella de ningún válido elemento de orientación política: nace de la identificación –finalmente total y sin residuos– entre la tradición unitaria y la causa de la provincia. Esa tradición se adecua en efecto muy bien a las necesidades de una Buenos Aires que, juego de su derrota de Caseros, debe reivindicar más explícitamente que nunca, su condición de escuela y guía política de la entera nación. La identificación pasada, presente y futura entre partido y provincia da al primero una fuerza adicional considerable; a riesgo de convertirse en el de los prejuicios, el de los principios echa ahora en Buenos Aires raíces más vigorosas que en su supuesta época de oro de 1821-27.

Comienza a advertirse aquí el elemento de originalidad de la experiencia de Buenos Aires en el marco hispanoamericano. El liberalismo que nacía (o renacía) se fijaba por tarea introducir innovaciones muy hondas en la vida colectiva; por eso mismo no aspiraba a presentarse como representación política de la entera sociedad, tal como estaba conformada antes de esas renovaciones radicales que el partido postulaba. Sin duda, ese liberalismo no admitía a su lado otras fuerzas políticas dotadas de legitimidad comparable a la que se asignaba a sí mismo, pero su superioridad en este aspecto no derivaba de ninguna pretensión de reflejar fielmente en el campo político una realidad que juzgaba deplorable sino, por el contrario, de la pretensión de identificarse con un sistema de ideas válidas, frente a las caducas de rivales a los que reconocía de buen grado carácter representativo de una realidad igualmente caduca.

Sin duda, en parte la diferencia se justificará por una divergencia en la apreciación de la realidad que ante sí tiene el partido: al mantener su identificación intransigente con la causa del progreso –viene a asegurarnos Mitre– el Partido de la Libertad no hará sino reflejar la que la sociedad porteña mantiene, desde su origen mismo, con esa causa. Aun así, ella se ha de continuar en una definición de la tarea renovadora del partido cuya distancia con la de ese renaciente liberalismo hispanoamericano, gustoso de presentarla como un desafío radical a las realidades heredadas, Mitre se encarga de subrayar con insistencia.

En este aspecto influye sin duda la situación especialísima creada por la identificación entre la causa de un partido que se define como renovador y la de una provincia ansiosa de preservar, a la vez que su hegemonía, un acervo de tradiciones políticas de signo más complejo de lo que Mitre está dispuesto a reconocer. Pero influye también con una fuerza que Mitre reconoce aún más explícitamente, el clima de opinión creado por el fracaso de las revoluciones de 1848. El hace urgente separar la causa del liberalismo de la de un radicalismo que se declara condenado de antemano al fracaso. A diferencia de los liberales neogranadinos, mexicanos o chilenos, Mitre quiere tener enemigos a su izquierda; su liberalismo es algo más que una nueva versión del *juste milieu*: no se limita a ofrecer una alternativa preferible a la conservadora o radical; recoge en sí mismo todos los motivos válidos en ambas posiciones extremas, y al hacerlo despoja a ambas de cualquier validez. La pretensión de representar a la sociedad entera se continúa entonces en la de expresar todas las aspiraciones políticas legítimas.

En largos párrafos de prosa elegantemente adornada e íntimamente fría, anticipo del “estilo Luis Felipe” que, según feliz caracterización de Alejandro Korn, iba a ser el de sus grandes obras históricas, Mitre defiende persuasivamente esa concepción de un partido a la vez conservador y renovador, cuya audacia innovadora es reflejo de la de una entera sociedad abierta hacia el futuro. Le es con todo menos fácil dotar a esa orientación renovadora de un contenido preciso. ¿Qué debe ser conservado, qué debe en cambio ceder el

paso a la exigencia renovadora? Son preguntas que Mitre no tiene urgencia por responder, y no es sorprendente que reaccione con mal humor frente a quienes proclaman la necesidad de partidos agrupados en torno a programas.

A primera vista ese mal humor parece sin embargo injustificado; al presentarse al público porteño como periodista, Mitre definió sus posiciones programáticas sobre puntos tan variados y precisos como el impuesto sobre el capital, la convertibilidad del papel moneda y la creación de un sistema de asistencia pública desde la cuna hasta la tumba.

Pero no hay duda de que esas definiciones programáticas no podrían ser las de un partido que pretendiese representar armoniosamente todas las aspiraciones legítimas que se agitan en el seno de la sociedad; su misma precisión las hace inadecuadas para cumplir ese papel. Una cierta indefinición de objetivos parece entonces ineludible en el partido que Mitre ayuda a nacer en el Buenos Aires posrosista.

En un conjunto de artículos de ocasión, vemos entonces dibujarse una imagen del partido y de la política destinada a un extenso futuro: la deuda que con esa definición de su lugar y su tarea tienen tantos movimientos políticos argentinos es muy grande, y lo es particularmente en algunos que guardan muy escasa devoción por el recuerdo de Mitre; esas definiciones de 1852 quedarán hasta tal punto incorporadas a la tradición política argentina que seguirán gravitando aun en quienes sin duda ignoran su existencia misma. Así se encuentra muy claramente un eco de ellas en la tenaz resistencia de Hipólito Yrigoyen a la definición de un contenido programático para la reparación que había señalado como tarea histórica a su partido y de modo menos directo, aunque todavía inequívoco, se lo puede aún encontrar, pese a la mayor volubilidad de inspiración ideológica, en las autodefiniciones que para el peronismo propuso su inventor y jefe.

Hay un área en que ese consenso que el partido aspira a representar puede expresarse con menos dificultades: es la del Estado como institución, cuya estructura debe ser perfeccionada para adecuarla al nivel alcanzado ya por la civilización. Pero si Mitre gusta de detenerse en ella no es tan sólo porque, en efecto, puede consagrarle sostenida atención sin verse obligado a revisar esa imagen de una sociedad concorde que le interesa conservar. Al considerar el progreso sobre todo como avance hacia la creciente perfección de la institución-Estado, viene a expresar una de sus convicciones básicas, sumergida sólo un instante por la adopción de un impetuoso liberalismo en ruptura con el entero pasado.

Esa convicción no es sorprendente en quien, como Mitre, proviene de uno de los linajes familiares más antiguos de Buenos Aires, que en su trayectoria nunca conoció una marcada prosperidad, pero halló a menudo su lugar en la sociedad rioplatense en el servicio del Rey. Ella encuentra expresión extrema en el discurso pronunciado en el retorno de los restos de Rivadavia, en que, en nombre del ejército, reconoce en el primer presidente al fundador de la institución, en la exigente concepción de Mitre. mientras ésta no fue integrada en una definida estructura estatal no podía considerársela en rigor existente.

Si las definiciones políticas que Mitre avanza en 1852 contiene *in nuce* todo un futuro, el de la alineación política en cuyo nombre son formuladas es en extremo problemático. La movilización política urbana no tuvo en Buenos Aires efectos más duraderos que en Chile, Bogotá o Caracas; mientras en Chile o Nueva Granada esa experiencia iba a ser clausurada por la represión o la derrota, en Buenos Aires sería agotada por una desmesurada victoria: a partir de 1861 el Partido de la Libertad intenta la conquista del país, y no sólo fracasa sino —a través de esa empresa desafortunada— destruye las bases mismas desde las que ha podido y lanzar su ofensiva por un instante afortunada.

3) *El Partido de la Libertad a la conquista del país.* Buenos Aires va a mantener dos conflictos armados con la Confederación; derrotada en 1859 en el primero, admite integrarse a su rival, pero obtiene de éste el reconocimiento del papel director dentro de la provincia de quienes la han mantenido en la línea disidente; obtiene también una forma constitucional que, a más de disminuir el predominio del Estado federal sobre los provinciales, asegura una integración financiera sólo gradual de Buenos Aires en la nación. Vencedora en 1861 en el segundo, su victoria provoca el derrumbe del gobierno de la Confederación, presidido por Derqui y sólo tibiamente sostenido por Urquiza, que ha desarrollado una viva desconfianza hacia su sucesor en la presidencia. Mitre, gobernador de Buenos Aires, advierte muy bien los límites de su victoria, que pone a su cargo la reconstitución del Estado federal, pero no lo exime de reconocer a Urquiza un lugar en la constelación política que surge. En efecto, Mitre admite que los avances del Partido de la Libertad no podrían alcanzar a las provincias mesopotámicas, que han de quedar bajo la influencia del gobernador de Entre Ríos; parece por un momento dispuesto a admitir también que en algunas de las provincias interiores la base local para establecer el predominio liberal es tan exigua que esa aventura no debe siquiera ser intentada.

Son conclusiones recibidas con indignada sorpresa por la mayor parte de esa opinión pública urbana cuyo entusiasmo ha conocido sin duda desfallecimientos, pero que ha sido la base de poder más sólida de la disidencia y que no entiende ser despojada de los frutos de su inesperada victoria. Entre los compañeros

políticos de Mitre no pocos están dispuestos a dar voz a esa protesta, y el vencedor de Pavón –si no cree posible prever los términos de su acuerdo implícito con Urquiza– admite en cambio (con cada vez menores reservas desde que descubre hasta qué punto la empresa se presenta fácil) la remoción de los gobiernos provinciales de signo federal en el Interior, hecha posible por la presencia persuasiva de destacamentos militares de Buenos Aires (y en el Norte por los de Santiago del Estero, provincia cuyos caudillos, los hermanos Taboada –sobrinos del que la mantuvo en lealtad a Rosas durante todo su gobierno– la están transformando en base regional del predominio liberal). Esa empresa sólo afronta la resistencia activa de La Rioja, aparentemente doblegada cuando su máximo caudillo –el general Angel Vicente Peñaloza, el Chacho– es vencido y ejecutado.

Pero la escisión del liberalismo porteño (anticipada por la del cordobés, víctima de los conflictos internos tan característicos del laberíntico estilo político de esa provincia) no pudo al fin ser evitada. Mitre, sacudida ya su base provincial, busca consolidarla mediante la supresión de la autonomía de Buenos Aires, que una ley nacional dispone colocar bajo la administración directa del gobierno federal. La legislatura de la provincia rehúsa su asentimiento; Mitre se inclina ante la decisión, pero no logra evitar que la erosión de su base porteña quede institucionalizada en la formación de una facción liberal antimitrista –la autonomista– que en unos años se hará del control de la provincia.

En su origen, el autonomismo retorna y exagera los motivos antifederales y antiurquicistas que marcaron las primeras reticencias frente a la gestión de Mitre luego de Pavón. La división del liberalismo porteño va a gravitar entonces en la ampliación de la crisis política cuya intensidad Mitre había buscado paliar mediante su acercamiento a Urquiza. Pero lo que sobre todo va a agravarla es su internacionalización: la victoria liberal de 1861, como la rosista de veinte años antes, sólo puede consolidarse a través de conflictos externos. Es de nuevo, como entonces, el entrelazamiento entre las luchas facciosas argentinas y uruguayas el que conduce a ese desenlace. El predominio blanco, brutalmente asegurado en Quinteros, va a afrontar el desafío de esas espadas veteranas del coloradismo que han encontrado, lugar en el ejército de la disidente Buenos Aires, para la cual han organizado una caballería. La Cruzada Libertadora que el general Flores lanza sobre su país, cuenta con el apoyo no siempre suficientemente discreto del gobierno de Buenos Aires. Desde que se hace evidente que, si Flores no es capaz de una rápida victoria, el gobierno de Montevideo no es más capaz de eliminar su amenaza al orden estable de la campaña, el temible cruzado colorado contará con otro apoyo externo aún más abierto: el Brasil emprende en su nombre la conquista reglada de la campaña oriental, abandonando –pese a las melancólicas advertencias del barón de Mauá, el banquero que ha consolidado la presencia financiera del Imperio en tierras rioplatenses– la posición problanca que ha mantenido por más de una década. En Paysandú, sólo la superioridad abrumadora de las fuerzas brasileñas logra doblegar la resistencia de Leandro Gómez; por semanas el Entre Ríos de Urquiza asiste, Río Uruguay por medio, a la agonía de la ciudad mártir y de la causa política oriental con la que lo une más íntima afinidad. Si la pasividad de Urquiza despierta no siempre silenciosa reprobación entre los federales, los liberales autonomistas hallan posible acusar de pasividad a Mitre, porque la intervención argentina ha sido menos desembozada que la brasileña. Esos reproches se harán más vivos cuando el joven presidente del Paraguay, Francisco Solano López, juzgando oportuno el momento para desencadenar el choque que cree de todos modos inevitable con el Brasil, entre en la liza en defensa del equilibrio rioplatense que proclama amenazado por la intervención imperial en el Uruguay.

López espera contar con el apoyo de Urquiza y el federalismo argentino, a más del que obviamente tiene derecho a esperar del moribundo gobierno blanco de Montevideo. Los autonomistas quisieran ver realizadas las esperanzas de López: urgen a Mitre a que lleve a la Argentina a la guerra al lado del Brasil, confiando en que, al lanzar a la nación a una empresa inequívocamente facciosa, obligarán finalmente a Urquiza a salir de esa pasiva lealtad que lo ha caracterizado luego de Pavón. Precisamente por eso, Mitre busca evitar que la entrada en guerra parezca resultado de una decisión libre de su gobierno. Cuando López decide atacar a Corrientes luego de que le ha sido denegado el paso de sus fuerzas por territorio argentino en Misiones, logra hacer de la entrada de la Argentina en el conflicto la respuesta a una agresión externa; sin perder su origen y motivación facciosos, la participación argentina adquiere una dimensión nacional. Urquiza se apresura a proclamar (más explícitamente que nunca en el pasado) su solidaridad con la nación y su gobierno; jactanciosa, pero no infundadamente, Mitre podrá por su parte proclamar que está recogiendo los frutos de una gran política. Pero, en la medida en que la guerra no ha de servir de punto de partida para la definitiva operación de limpieza contra los últimos reductos federales, ella pierde buena parte de su interés para el autonomismo, que se había propuesto destruirlos aun a riesgo de lanzar al país al conflicto más terrible de su nada pacífica historia.

Si el proceso que conduce a la guerra marca el triunfo más alto del estilo político de Mitre como jefe de la nación, la guerra misma va a poner fin a su eficacia. Las pruebas que impone son demasiado duras, las

tensiones que introduce en el cuerpo social demasiado poderosas para que un proceder político marcado por constantes equilibrios y tergiversaciones –inspirado como está en la viva conciencia de las limitaciones extremadamente severas que afectan el ejercicio de un poder nominalmente supremo– pueda aún afrontarlas con éxito. A medida que el conflicto revela su verdadera estatura, y el país advierte que tiene que afrontar su primera guerra moderna, el aislamiento político del presidente se acentúa. A él contribuye la creciente resistencia federal a la participación en un conflicto cuya dimensión facciosa, si puede ser a ratos ignorada, no es por eso menos real. Pero contribuye también, de modo cada vez más decisivo, la toma de distancia frente a la empresa de un autonomismo que, antes que nadie, la había proclamado necesaria. Ahora cree posible utilizar el creciente despegue por ella para comenzar un progresivo acercamiento hacia su archienemigo federal.

La movilización política urbana, que ha sobrevivido mal a la escisión liberal, se hace presente por última vez en el momento de declaración de guerra. Desde entonces en ciudad y campaña, la vida política de Buenos Aires será cada vez más protagonizada por dos máquinas electorales, a ratos parecidas a máquinas de guerra, cuyas razones de rivalidad interesan sobre todo a ellas mismas y a quienes las dirigen y usufructúan sus victorias. Si los motivos que originaron la escisión liberal han perdido vigencia desde que el gobierno nacional parece haberse resignado a su condición de huésped en la capital de la primera provincia, y el autonomismo, que ha reprochado a Mitre sus tolerancias con Urquiza, se acerca a hacer de éste un aliado, la unidad de principios e ideales que aún mantendría un lazo entre las facciones escindidas sobrevive también mal a la prueba que es la guerra paraguaya; luego de 1865 quedan trazas de ella sobre todo en las apelaciones inefectivas de Mitre a esa comunidad fantasma que es el Gran Partido Liberal, cuya presencia en la escena política sólo se manifiesta a través de la de sus *dissecta membra*.

Es el esfuerzo exorbitante que la guerra impone el que acelera la agonía del Partido de la Libertad. Sin duda, la cautela con que Mitre se ha acercado a ella ha evitado la quiebra abierta de la unidad nacional en el momento mismo de emprender la lucha, al obtener para el gobierno de Mitre la expresa solidaridad de Urquiza. La cautela de éste no se explica tan sólo por la destreza con que el presidente encaró la crisis paraguaya, ni –como quería Sarmiento y luego tantos otros que hasta hoy reiteran la acusación– por su condición de gran empresario poco dispuesto a suscitar tormentas perturbadoras de la buena marcha de los negocios. Urquiza ha visto reconocida en el nuevo orden una influencia que espera poder ampliar apenas dejen de hacerse sentir los efectos inmediatos de la victoria de Buenos Aires en un Interior en que el federalismo sigue siendo la facción más fuerte y mejor arraigada. La ambigüedad insalvable de la acción política de Urquiza se vincula con su deseo de transformar en instrumento de reconquista pacífica del poder una lealtad política que –desde la perspectiva de una facción entregada al duro predominio de la adversaria– halla desemboque más natural en la protesta armada. Urquiza no puede seriamente apoyarla; tampoco podría ignorar del todo los sentimientos de aquellos cuya reconquistada influencia política deberá devolverle lo perdido desde 1860. Asistirá así, como espectador dispuesto a comentarios ambiguos o contradictorios, al gran alzamiento federal de 1866-67, que desde Mendoza a Salta convulsiona todo el interior andino.

La titubeante línea política que Urquiza adopta se revelará literalmente suicida. Aun así, ella se apoya en una percepción más justa que la que parece haber alcanzado Mitre sobre las consecuencias de la constitucionalización del poder nacional; las estipulaciones demasiado claramente definidas del texto constitucional (sobre todo en lo que hace al equilibrio de las representaciones provinciales en el Congreso y el Colegio Electoral presidencial) hacen más difícil que el sistema de pactos (al que Rosas conservó un amplio margen de indefinición) transformar la victoria militar de una provincia basada en la permanente hegemonía de la facción con la que esa provincia se identifica en el orden, nacional.

Como se ve, no es sólo la erosión de su base política porteña la que provoca la vertiginosa decadencia del mitrismo; es también el hecho de que –en el contexto institucional adoptado por la nación finalmente unificada– esa base no bastaría para asegurar un predominio nacional no disputado. Hay desde luego una alternativa a largo plazo insostenible, pero que a corto plazo se esperaría válida: la utilización del gobierno nacional como base alternativa. Que Mitre pensó en esa solución lo revela su infortunada propuesta de colocar a la entera provincia de Buenos Aires bajo administración nacional. Pero en este aspecto la guerra alcanzó consecuencias no menos graves, al imponer al Estado, y sobre todo a su aparato militar un ritmo de expansión tan rápido que hace difícil conservar el papel de instrumento pasivo de una facción. El ejército nacional necesita ampliar su cuerpo de oficiales con una urgencia que permite el retorno a posiciones de responsabilidad e influencia de figuras políticamente poco seguras. Al mismo tiempo, las poco afortunadas vicisitudes de la guerra debilitan el vínculo entre ese cuerpo de oficiales y quien es jefe de su facción y de la nación, pero también general en jefe cuyas iniciativas sólo infrecuentemente son coronadas por el éxito. El sangriento desastre de Curupaytí no sólo revela a la nación que la guerra ha de ser mucho más larga, dura y cruenta de lo esperado; inspira entre los oficiales dudas sobre una conducción militar que impone sacrificios

aparentemente tan inútiles. Es ese cuerpo de oficiales el que es solicitado desde 1867 por el coronel Lucio Mansilla para apoyar la candidatura presidencial de Sarmiento. Mansilla es sobrino de Rosas y ha sido seguidor de Urquiza hasta las vísperas mismas de Pavón; todo ello no le impide ganar la adhesión de sus camaradas, y un año después Sarmiento será presidente... Aun los jefes de más vieja lealtad mitrista se sienten cada vez menos ligados por ella: el general Arredondo, feroz pacificador del Interior juego de Pavón, entrega los electores de varias provincias a Sarmiento.

Puede hacerlo porque gracias a la guerra civil de 1866-67, el ejército nacional ha alcanzado gravitación decisiva en el Interior; los Taboada, caudillos del mitrismo santiagueño, hacen ahora recluta de caudillos federales vencidos para unirlos en un solo bloque de resistencia a la nueva hegemonía militar. Esa alianza nostálgica de fuerzas en ocaso no podría ofrecer rivalidad seria al ejército reforzado por la prueba paraguaya, y por otra parte subraya cruelmente las contradicciones de un mitrismo que, perdido el poder, gusta más que nunca de autodefinirse como el partido de los principios.

Ese contexto de vertiginosa decadencia de la facción que por un instante pareció capaz de reiterar la hazaña de Rosas, y pintar a la Argentina toda de un color, explica las modalidades de la polémica cada vez más violenta y arremolinada, que debate en plena guerra las raíces y la justicia de la guerra misma... Retrospectivamente, uno de los aspectos más sorprendentes de ese debate es la considerable libertad con que se desarrolló, en medio del más terrible conflicto exterior afrontado por la nación; esa libertad hace posible una extrema violencia de tono, que ha ganado para más de una de estas páginas de ocasión un lugar en la memoria colectiva. Esa libertad y esa violencia no arguyen necesariamente la ausencia de reticencias y reservas entre los polemistas.

Estos buscan utilizar el hecho. brutal que es la guerra en una disputa entre facciones internas, y no vacilan en estilizar fuertemente la imagen que proponen del conflicto para mejor emplearla en esa disputa. Para ello pueden apoyarse en una larga tradición de polémica facciosa, que toma prestados los procedimientos de la querrela de tribunal y se pierde con delicia en el laberinto de argumentaciones leguleyas. En él se interna intrépidamente Carlos Guido y Spano en los pasajes más opacos de su vibrante *El gobierno y la alianza*. En ellos nuestro amable poeta –que es también un hombre de vehementes pasiones, ya que no de tenaces acciones políticas– improvisa una versación en derecho internacional para ofrecer argumentos que –sin negar la realidad de la agresión paraguaya– intentan demostrar que la responsabilidad legal por ella recae en primer término sobre el gobierno argentino. Esa argumentación torturada rehúsa tomar un curso menos artificioso, sin duda porque Guido prefiere no exhibir con total claridad su posición frente a la guerra: su simpatía por la causa paraguaya es menos limitada de lo que juzga oportuno manifestar. Es que –sí no tiene demasiado que temer de una represión incoherente y poco dispuesta a demorarse en análisis jurídicos de la diferencia entre la crítica al gobierno nacional y la traición frente al enemigo en guerra abierta– debe, en cambio temer la reacción de una opinión pública a la que sin duda los inesperados sufrimientos han fatigado de la guerra, pero no han preparado a ver con mayor simpatía al enemigo capaz de infligirlos. Del mismo modo, sí en su *Río de la Plata* José Hernández va a dar ancha hospitalidad a las necrologías favorables publicadas en el extranjero a la muerte de López, la que él mismo ofrece muestra muy escasa piedad frente al sacrificio supremo del paladín que bajó a la liza para defender la causa blanca y federal que era entonces la de Hernández.

La guerra, ese hecho monstruoso y enorme, es entonces sólo aparentemente el tema de la polémica, o más bien lo es tan sólo en la medida en que ofrece un arsenal de nuevos argumentos para la eterna disputa facciosa, un ítem más (aunque sin duda el más conspicuo) en la lista de agravios escrupulosamente contabilizados por el rencor de los bandos rivales.

En esa disputa, Guido y Spano habla en nombre del nacionalista “en que se ha refundido el federal”, y acusa a Mitre de haberse constituido en agente de la demorada venganza unitaria, frustrando así la ocasión que en 1861 se brindaba para una unificación nacional en la concordia. Los argumentos que sostiene con tanto brío polémico están en la línea de los que se hicieron frecuentes luego de Caseros; pese a su raigambre federal, el nacionalismo que Guido defiende ha borrado de la herencia del federalismo toda huella de la etapa rosista... Pero esa interpretación de los conflictos políticos argentinos sobre la clave del choque entre facciones tradicionales resulta aún más forzada que diez años antes: ese unitarismo descrito como un partido vivo y actuante en 1865 es sólo un ídolo polémico.

Aun así, las colectividades políticas a las que Guido y Spano alude son estilizaciones sin duda violentas de las efectivamente existentes. El partido cuya causa abraza Juan Carlos Gómez en su polémica con Mitre es, en cambio, declaradamente inexistente. El Partido de la Libertad no existe; Mitre lo ha destruido; el federalismo acorralado ha sobrevivido mejor a una política destinada a deshacer su influencia. Es el resultado paradójico pero justiciero de una acción más interesada en resultados que en principios. Mitre traicionó los de su partido cuando proclamó la “espectabilidad” del caudillo Urquiza, cuando aceptó

como sus aliados en el Interior a los caudillos Taboada, cuando favoreció en el Uruguay la causa de ese otro traidor a sus principios, el caudillo Flores. La traicionó aún más gravemente cuando, desencadenada la guerra paraguaya, pactó con el imperio brasileño una alianza contraria, a la vez que a la vocación republicana de su partido, al deber de todo caballero de lavar por sí mismo –sin buscar el auxilio de extraños– la afrenta que ha recibido. A esa bancarrota moral siguió la bancarrota política, cuyos efectos están sólo comenzando a sentirse; para Gómez no tiene duda que el futuro ha de traer la restauración del predominio federal.

Cuando contesta esa requisitoria, Mitre no es ya presidente; es sólo el jefe de una fracción política cuya influencia –ya muy menguada– parece condenada a seguir declinando. El que responde, no es entonces ni el orador rico en efectos, ni el definidor y organizador de una nueva fuerza política, ni el estadista que se envuelve en una coraza de imperturbabilidad. Es –quiere ser– un veterano de muchas y variadas luchas, dispuesto a llevar a la polémica la voz de un buen sentido sólido, aunque deliberadamente un poco corto. La política de Gómez es “romántica”; la guerra del Paraguay no ha sido una cruzada liberal, sino la respuesta de la nación a una peligrosa agresión externa, que ha buscado su instrumento más idóneo en una alianza de intereses con los otros enemigos que la política paraguaya ha suscitado; la noción de que la Argentina debía hacer la guerra al Paraguay, rechazando altivamente la alianza brasileña, juzga a quien la propone.

No más impresionado ha de mostrarse por otro argumento de Gómez, para quien la agresión paraguaya no ha quitado al conflicto el carácter de guerra de partido. ¿Cómo la juzgará el país cuando el federal, al que Mitre no ha sabido destruir, arrebató el poder al liberal, mortalmente debilitado por las claudicaciones que Mitre le impuso? Este afecta no ver en la perspectiva de una restauración federal nada de alarmante. Si el federalismo triunfa, será luego de aceptar el orden institucional que el liberalismo ha impuesto al país, y porque habrá sabido interpretar mejor sus fines que un liberalismo decididamente incapaz de realizar su misión histórica. Si ello ocurre “nuestra bandera quedará triunfante en otras manos”. No es la primera vez que Mitre trata de presentar el resultado probable de un proceso que no controla como uno de los frutos de su deliberada acción de estadista. Como los críticos de su política paraguaya, él también va por otra parte a devolver la discusión al contexto de la lucha de facciones internas del que surgió. Es sugestivo que –tras de entregar sobriamente a su partido a un destino que espera sombrío– no crea necesario examinar el punto que Gómez evoca: no se extiende en efecto a predecir qué juicio merecerá la guerra del Paraguay en una Argentina colocada bajo el signo de un federalismo regenerado en el culto y la práctica de las virtudes liberales.

¿Pero es verdad –como postula Gómez y no niega Mitre– que el fracaso del Partido de la Libertad en su demeurada tentativa de conquistar el país ha abierto el camino a un retorno de la hegemonía federal? Un texto⁶ que vuelve a examinar, por primera vez retrospectivamente, el conflicto paraguayo, sugiere más bien que ese fracaso hace posible el surgimiento de un consenso político menos ligado a la herencia de las facciones tradicionales. Ese texto es el que el joven Estanislao Zeballos dedica al ministro de Relaciones Exteriores del presidente Sarmiento; allí Zeballos propone una problemática nueva que quiere jurídica y no política; ella le permite ganar una considerable independencia frente a las posiciones enfrentadas en la guerra de pluma que acompañó al entero conflicto paraguayo. La que Zeballos adopta se apoya en un análisis ceñido del texto del tratado de alianza: ni la guerra misma, ni la decisión de afrontarla en alianza con el Brasil y el gobierno colorado de Montevideo, van a ser entonces puestas en tela de juicio. La prehistoria política del conflicto tampoco será examinada; es en efecto irrelevante para el análisis técnico-jurídico que Zeballos se propone emprender. Pero esa decisión de separar pulcramente la dimensión política de la jurídica esconde mal una opción política: el veredicto de Zeballos propone una versión de la guerra y su origen capaz de ganar el asentimiento de ese nuevo consenso que comienza a agrupar a autonomistas y federales. La decisión de no explorar las etapas anteriores a la declaración de guerra y concertación de la alianza permite, por ejemplo, echar un necesario velo sobre la etapa en que el autonomismo empujaba de modo vehemente a la guerra, esperando hacer de ella una cruzada antifederal. Si las culpas de la política argentina aparecen más circunscriptas que en la literatura antimitrista florecida durante la guerra, son por lo menos culpas exclusivas de Mitre y su ministro Elizalde, a quien Mitre hubiese querido ver elegido presidente en lugar de Sarmiento. La moderación del tono adoptado por Zeballos refleja, por otra parte, los avances ya realizados por ese nuevo consenso: no sólo el Partido de la Libertad, que debía ser el núcleo del nuevo Estado nacional, ha sido excluido de él; la amenaza implícita en su disidencia no es lo bastante fuerte para suscitar reacciones más alborotadas.

¿Puede el federalismo, sobrevivir a ese retorno de las tinieblas exteriores, debido más que a sus victorias, al agotamiento de la fracción antes dominante en el alineamiento adversario? Y aun antes de esa

⁶ Exposición hecha en la Universidad de Buenos Aires el 30 de agosto de 1872. Buenos Aires, Cook, 1872.

difícil transición requerida por el levantamiento del interdicto que sobre él pesaba, ¿qué sobrevivía de una tradición federal expuesta a partir de 1852 a tantas y tan contradictorias experiencias?

4) *De la reafirmación del federalismo a la definición de una alternativa a las tradiciones facciosas.* Ya la caída de Rosas había significado un punto de inflexión en la trayectoria del federalismo. Entonces debió reconstituirse a partir de la aceptación póstuma de la victoria alcanzada por un movimiento de disidencia regional contra quien había sido por dos décadas su jefe nacional. La solidaridad del partido encontraba a la vez una nueva base en la identificación apasionada con la Constitución Nacional de 1853 (el intento de adoptar para la facción el nombre de constitucionalista, aunque condenado por su artificiosidad misma, es sin embargo revelador). La secesión de Buenos Aires devolverá a primer plano motivos antiporteños ya anteriormente dominantes tanto en el federalismo litoral como en el del Interior, a los que había puesto sordina la larga hegemonía de Buenos Aires impuesta por Rosas bajo signo federal.

Ese federalismo constitucionalista y antiporteño es el que debe hallar modo de sobrevivir a la sorpresa de Pavón. Su primera reacción a ésta es –nada sorprendente– la de un partido que pese a ese contratiempo, sigue viéndose como la columna central del país y el eje de su historia como nación independiente. El jefe nacional del federalismo, Urquiza, no ha sido despojado por Pavón de un lugar legítimo en la vida política argentina; su vencedor abandona el estilo circunspecto que ha adoptado en esa etapa de su carrera, para ofrendarle los más desmesurados elogios; la constitución que ese vencedor ha jurado y da base jurídica al poder nacional, es la que se proclama dictada en cumplimiento de los pactos establecidos treinta años antes entre los grandes paladines históricos del federalismo. Esa seguridad de que el federalismo no ha perdido en la derrota su posición central en la vida política del país, esa seguridad demasiado sólida para que necesite expresarse con ninguna arrogancia está aún viva en la proclama con que el general Angel Vicente Peñaloza –el Chacho– anuncia su levantamiento contra el nuevo poder nacional.

Peñaloza no se alza tan sólo en nombre de ciertos principios, sino en defensa de un sistema institucional y legal cuya vigencia no ha sido recusada, aunque los “opresores y perjuros” prefieran ignorarlo. Pero la segura derrota de esos usurpadores devolverá al país al camino que nunca debió abandonar; la proclama no llama en efecto, a los riojanos a imponer una solución política nueva, sino el retorno a la línea de Mayo y Caseros, al camino real de la historia nacional.

La seguridad de que – pese a las apariencias – el federalismo sigue siendo el país, puede aquí estar inspirada sobre todo por el optimismo apriorístico que caracteriza a menudo al llamado a una acción que se sabe llena de riesgos. Pero, en pocos años, aun ese optimismo quizá forzado deberá abandonarse: van a hacerse ineludibles otras interpretaciones del pasado y del presente, que reconozcan en la derrota federal algo más que una aberración momentánea, sin raíces en el pasado ni perspectivas de futuro.

Sin duda, el obstinado infortunio invita a denuncias cada vez más apasionadas del adversario: es la cínica carencia de todo escrúpulo, la ausencia de aspiraciones que vayan más allá del goce sensual del poder (debida a la profunda inmoralidad de los dirigentes liberales, pero también a su irremediable frivolidad intelectual) la que da al llamado Partido de la Libertad su mortal eficacia en la conquista de sus sórdidos objetivos. Pero –por consoladora que ella sea– la noción de que el federalismo ha sido víctima de una conjura de meros asaltantes de caminos es demasiado inverosímil para que pueda ser utilizada sino en alivio momentáneo del inagotable mal humor de los vencidos. Otras deberán proponerse que –reservando al federalismo el papel de héroe positivo en el drama político argentino –habrán de reconocer alguna sustancia histórica a quienes le han infligido una derrota cuyas consecuencias son tan difíciles de borrar.

Una interpretación cada vez más popular del conflicto cuyo desenlace fue tan infortunado para la facción federal deriva –a través de Alberdi– de la última etapa de la polémica antirrosista, la que denunciaba, en la Buenos Aires a la que Rosas había devuelto a posición hegemónica dentro de la nación, a un poder votado al monopolio mercantil y la explotación fiscal del resto del país. El tema, que subtiende la entera campaña en favor de la libre navegación de los ríos, será retomado por Alberdi cuando –como representante de la confederación urquicista en Londres y París– le toque defender su causa ante la opinión europea. La que más le interesa ganar es la de las cancillerías, y para su edificación presenta al estado de Buenos Aires como identificado con el monopolio mercantil arraigado en la tradición colonial, y por lo tanto como el principal obstáculo a la expansión de la influencia comercial de Gran Bretaña y Francia. Sin duda parecería posible ampliar el alcance de la crítica y denunciar en esa postura un indicio del antiliberalismo, del radical pasatismo que los dirigentes de la secesión porteña esconden bajo su constante invocación a los principios liberales. Alberdi lo ha hecho en el pasado y volverá a hacerlo en el futuro; por el momento, sin embargo, prefiere adecuarse a las preferencias de sus influyentes interlocutores, presentando a esos dirigentes como un grupo de trasnochados demagogos aún afectados por el breve sarampión revolucionario que fue eco hispanoamericano de las tormentas europeas de 1848: así no dejará de reprochar a Mitre que, antes que seguir el ejemplo de sólida piedad que ofrece la emperatriz Eugenia atrayendo al Río de la Plata a las

hermanas de caridad, prefiera ofrecer la hospitalidad de Buenos Aires a los presidiarios de Cayena (esta despiadada referencia alude a los infortunados defensores de la Segunda República Francesa allí deportados luego del golpe del 2 de diciembre).

Tras la victoria de Mitre y Buenos Aires, en escritos que ahora dirige a sus compatriotas, Alberdi prefiere insistir en el elemento fiscal antes que en el mercantil del contencioso que separe a Buenos Aires de las provincias. En diez años se había hecho ya evidente lo que en 1852 había vaticinado ese sagaz observador de la realidad rioplatense que fue sir Woodbine Parish; a saber, que la libre navegación era incapaz de afectar sensiblemente la hegemonía mercantil de Buenos Aires. Más que de eliminarla, se trata entonces de hallar modo de que el país entero participe de manera menos desigual en sus beneficios.

Ello sólo podrá lograrse, según Alberdi, mediante la creación de un auténtico Estado nacional, dueño de las rentas nacionales. El punto será explotado en las páginas admirablemente argumentadas de *Las causas de la anarquía en la República Argentina*⁷, cuya ceñida lírica de razonamiento no condesciende ni por un instante a registrar la presencia en el país de tenaces rivalidades facciosas, que para observadores más apegados a los hechos –o inclinados a demorarse en la superficie de esos hechos –tienen bastante que ver con esa ineliminable anarquía.

He aquí en acción una tendencia constante en Alberdi: la de descorrer el velo de una vida política cuyo ruido y furia dominan la escena nacional, para descubrir en otras instancias una clave que, a la vez que explica la tenacidad de los conflictos políticos, desenmascara su radical insensatez. En 1863, esa tendencia siempre presente celebra su triunfo más extremo porque Alberdi ha cortado más radicalmente que en otras etapas de su carrera los lazos siempre tenues que lo ligan a facciones cuya legitimidad y existencia sustantiva recusa. Luego de más de diez años de deliberada abstención de toda crítica frente a Urquiza, condena ahora al infortunado jefe del federalismo con la misma desdeñosa dureza que en su juventud había reservado para quienes no habían mostrado suficiente docilidad o eficacia en el papel de ejecutores de sus planes políticos. Y aunque ni siquiera después de la victoria está dispuesto a reconocer en Mitre a un hombre de estado, considera con ánimo abierto la posibilidad de que asuma el papel ancilar de ejecutor del proyecto alberdiano en que Urquiza lo había decepcionado tan profundamente. Esa momentánea automarginación del conflicto político argentino (así esté basada tan sólo en las ilusiones a las que no quiere renunciar quien se ha visto siempre a sí mismo como el guía político de la nación, y comienza a columbrar el peligro de transformarse en paria dentro de ella) explica la ausencia de esos rebuscados ataques *ad hominem*, que en páginas menos felices suelen empujar al pensamiento de Alberdi por caminos extravagantes, y aun la reiterada –ya que no necesariamente bien intencionada– utilización de los escritos de Sarmiento para corroborar sus propios puntos de vista.

Pero precisamente por todo ello, el motivo alberdiano de la rivalidad fiscal entre Buenos Aires y la nación sólo podrá incorporarse el acervo común del federalismo posterior a Pavón una vez traspuesta esa clave facciosa que, por una vez, Alberdi había eludido por completo. Esa trasposición no es difícil para un federalismo que ha expurgado de su pasado la larga etapa rosista y sufre en el presente los golpes de un enemigo cuya fuerza es la de la provincia de Buenos Aires. La identificación del federalismo con la oposición a la hegemonía porteña es, en efecto parte capital del acervo tradicional que el federalismo reconoce como suyo. Desde Artigas, Ramírez y López hasta Urquiza –pasando por Quiroga, Ferré, Brizuela, Peñalosa– los héroes federales son irreprochablemente provincianos (si bien el antiporteñismo de varios de ellos ha conocido desfallecimientos que la nueva mitología federal caritativamente ignora). De los hombres de Buenos Aires sólo Dorrego alcanza un lugar en ese panteón, y lo conquista sobre todo debido a su muerte trágica como víctima de la facción unitaria (hay demasiado en su carrera previa que, en efecto, lo inhabilita para una inclusión menos reticente en la constelación de héroes fundadores del federalismo).

Esa integración del motivo alberdiano y una tradición federal depurada de cualquier memoria de la etapa rosista, encuentra concisa expresión en la proclama con que el coronel Felipe Varela se pone al frente del gran alzamiento del Interior andino, en diciembre de 1866. Si la causa que invoca es la misma que en 1863 (se trata en efecto de “concluir la grande obra que principiasteis en Caseros”) el enemigo no es tan sólo el “caudillo Mitre” de “neptas y febrinas manos” o su “círculo de esbirros”. Uno y otros son agentes de la provincia de Buenos Aires, en cuyo beneficio Mitre ha transformado a los hijos de las restantes en “mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos”, sacrificados de modo, sistemático a “un pueblo vano, déspota e indolente”. Paralelamente con el infortunado alzamiento federal, se desenvuelven los esfuerzos por hacer de Urquiza un candidato a la sucesión constitucional de Mitre. Con vistas a ello, Olegario V. Andrade escribe un breve panfleto *Las dos políticas*⁸ que gracias a una subvención de Urquiza es ampliamente distribuido en

⁷ En Juan B. Alberdi, *Obras selectas*, Buenos Aires, Ed. Joaquín V. González, La Facultad, 1920.

⁸ Paraná, 1866.

1867 Andrade reivindica también esa tradición de un federalismo renovado en sentido constitucionalista y antiporteño, que Varela había invocado en su convocatoria a la lucha armada. Pero la continuidad facciosa de la corriente en que se inscribe y de la opuesta— son subrayadas aún más vigorosamente que en las proclamas guerreras de 1863 y 1866. Su federalismo se ubica en una línea más precisa que la de Mayo y Caseros, y el centralismo opresor de Mitre es explicado también él como el fruto de algo más que la coincidencia de intereses entre un aventurero afortunado y una provincia rapaz: Mitre es el representante más reciente de una tradición juzgada con extrema dureza por Andrade, pero reconocida como uno de los polos permanentes entre los cuales se ha desenvuelto el proceso histórico argentino. El poeta de verso vehemente, que gusta de ver en la historia el teatro de vastas luchas entre ideales incompatibles, no condesciende hasta examinar los procedimientos usados por Buenos Aires en las expoliaciones de las que la acusa; ese despojo prefiere verlo sobre todo desde una perspectiva ético-política, que le brinda oportunidad para su elocuente condena.

Constitucionalismo y sobre todo antiporteñismo ofrecen entonces una renovada base al federalismo, en la etapa en que su supervivencia aparece amenazada por la ofensiva momentáneamente exitosa lanzada por el Partido de la Libertad desde su fortaleza porteña. Es menos evidente que ofrezcan base igualmente adecuada para un federalismo que, si comienza a ser mejor aceptado como interlocutor legítimo en el diálogo político argentino, no es porque haya sabido resistir victoriosamente a esa ofensiva, sino porque la polarización facciosa, pese a su inesperada revitalización luego de Caseros y de nuevo como consecuencia de Pavón, parece finalmente acercarse a su agotamiento definitivo.

Nadie advierte mejor que José Hernández, en los años finales de la década del sesenta, las oportunidades abiertas para quienes se han identificado con la causa federal, veteranos de tantas derrotas, por ése al parecer espontáneo aflojamiento de la tensión política. Nadie advierte también con mayor claridad que, para utilizar esa oportunidad quizá irrepetible los voceros del federalismo deben emprender una radical redefinición de su fe política, despojándola de los motivos facciosos acumulados en la larga etapa de discordia civil cuyo fin adivina, y resolviéndola de este modo en una adhesión sin reticencias al nuevo consenso político en formación, cuya serena expresión habíamos ya encontrado en el texto más tardío de Zeballos. Quienes llegan a identificarse con ese consenso a partir de una militancia federal, no necesitan incorporarse a él como enemigos vencidos: Hernández percibe también con igual lucidez, y está dispuesto a utilizar en pleno, las oportunidades quizá irrepetibles abiertas por ese momento fugaz que marca el derrumbe pacífico pero vertiginoso de la influencia mitrista en el país. Sarmiento, presidente desde 1868 contra los deseos de Mitre (que si no llegó a lanzar contra él la excomunión, mayor que fulminó sobre Urquiza y Alsina, no ocultó sus preferencias por Elizalde) no se limita a afrontar en estilo desgarradamente polémico el hostigamiento de un mitrismo enconado por la pérdida del poder nacional; falto de apoyo partidario propio, se acerca a Urquiza, a quien unos años antes había propuesto la alternativa del destierro o la horca.

Se da así la posibilidad de una nueva alineación en que el federalismo (agrupado aún en torno a su jefe histórico, pese a las reservas que había venido despertando su cautelosa política) puede aspirar a ganar gravitación decisiva. La nueva coyuntura está admirablemente reflejada en la crónica que ofrece *El Río de la Plata* de la visita que el nuevo presidente efectúa a Urquiza⁹. Cerca del Arroyo de la China, sobre el río Uruguay, a la vera del palacio recientemente concluido cuya vajilla y menaje importados de Europa simbolizan la adopción, por parte del maduro caudillo, de las pautas de vida y conducta tan vivamente recomendadas por su visitante, éste asiste de nuevo al inevitable desfile de la caballería entrerriana. Si el espectáculo le recuerda una vez más una *fantasía* berberisca, ahora no ofrece esa analogía con ninguna intención de condena: Sarmiento proclama en cambio haber descubierto lecciones dignas de ser atesoradas en el ejemplo político de Urquiza, y declara su intención de buscar un justo medio entre el gobierno fuerte de éste y el excesivamente liberal y contemporizador de Mitre. Aunque la caracterización de ambos estilos de gobierno es obviamente inexacta, la decisión de tomar distancia con la pasada trayectoria del partido liberal, y acortarla con el jefe del federalismo, es en cambio evidente.

Junto con Sarmiento acude al Palacio San José Héctor Varela; el hijo del periodista-mártir de la ,causa unitaria, que ha contribuido a hacer de *La Tribuna* no sólo el diario más popular de Buenos Aires, sino un constante acicate de los sentimientos antifederales y antiprovincianos, es recibido en triunfo en Entre Ríos; los granjeros suizos de la colonia agrícola que Urquiza ha fundado en las cercanías de su palacio son, al parecer, lectores empedernidos de sus *Orionadas*, ejercicios entonces inusuales de crónica y comentario frívolo, y acuden a aclamarlo en sus carros, elemento nuevo pero ya característico del nuevo paisaje litoral. Es Hernández, que en 1862 profetizaba a Urquiza la muerte bajo el puñal unitario y presentaba a Sarmiento como el más feroz representante de esa facción asesina, quien ofrece ahora ancha hospitalidad a la

⁹ Correspondencia para *El Río de la Plata*, 17 de febrero de 1870.

descripción de ese idilio rústico, que parece realizar por fin los vaticinios formulados por Ascasubi antes de Caseros.

En esta nueva hora argentina, Hernández quiere presentarse a la vez como el más fiel de los secuaces de Urquiza y como observador imparcial, pero no por eso hostil, de la gestión presidencial de Sarmiento (tan poco hostil que deberá rechazar la caracterización de oficialistas que otros diarios esgrimen contra el suyo). Cuando toma para sí ese doble papel, ha dejado atrás una agitada y poco afortunada carrera política. Se ha lanzado por primera vez a las armas en defensa de la causa de Buenos Aires, contra Urquiza y los oficiales de frontera que han hecho defección en diciembre de 1852, pero ya en 1857 lo hallaremos en Paraná, al servicio de la Confederación. Cada uno de los pasos de su carrera posterior lo aleja más de los vencedores de Pavón; luego de señalar, a un Urquiza al que juzga excesivamente contemporalizador, el ejemplo terrible del Chacho, contribuye con prosas cada vez más encendidas a atizar los fuegos de la guerra civil oriental, y sus tomas de posición frente a la paraguaya se aproximan a ratos peligrosamente a la adhesión a la causa enemiga

Al cabo de ese agitado itinerario a través de la lucha facciosa y la guerra civil. Hernández no ha sabido aún arribar a puerto seguro; ello hace todavía más comprensible la urgencia que al final de la década parece sentir por evadirse de ese sangriento laberinto. Porque a diferencia de Guido y Spano, patricio que juzga haber ganado un lugar en la vida pública por derecho de herencia, a Andrade, poeta y periodista sin duda apasionadamente identificado con la tradición federal, pero al parecer satisfecho de servirla con riadas de versos y no menos abundante prosa de ocasión, Hernández es de veras un político: las relaciones súbitas –pero de ningún modo caprichosas– que mantiene con su facción federal lo muestran muy bien.

Ese político va a ofrecer en su diario *El Río de la Plata*, un breviario de ideas que aspira a dotar de un contenido al consenso naciente. En él sabe combinar admirablemente la lealtad a sus orientaciones ideológicas fundamentales, con la destreza para formularlas del modo más adecuado para utilizar en favor de ellas (y de quien sigue siendo su vocero) la coyuntura prometedor pero frágil que se abre con la reconciliación del presidente Sarmiento, hijo pródigo del Partido de la Libertad, y el jefe histórico del federalismo.

Un motivo nada inesperado en esa prédica, que sabe unir la sinceridad a la oportunidad, es un exasperado antimitrista. Hace ya años que el liberalismo mitrista, en la definición puntillosamente moderada que adoptó desde 1852, se ha hecho vulnerable a ataques que toman por blanco esa moderación misma. En 1852, en pleno reflujo contrarrevolucionario, había sido quizá hábil denunciar en el federalismo el representante rioplatense de esas corrientes radicales, cuyo ascendiente en Paraná Mitre afectaba contemplar con alarma. A partir de entonces, una lenta evolución está devolviendo respetabilidad política a versiones del credo liberal menos dispuestas a moderar sus exigencias renovadoras. En Francia (que pese a los perentorios consejos de Sarmiento sigue siendo vista desde el Río de la Plata como la escuela política por excelencia) la trayectoria del Segundo Imperio subraya el agotamiento de la solución autoritaria en la que Alberdi había creído ver el desenlace definitivo de la etapa abierta en 1789. Los éxitos del régimen imperial, lo mismo que sus fracasos, parecen reflejar por lo contrario la perduración –pese al desenlace catastrófico de las revoluciones de 1848– de esas fuerzas revolucionarias que son el nacionalismo y la democracia. Ello es así tanto en política exterior (donde el éxito italiano y el fracaso mexicano confirman ambos la imposibilidad de poner dique a la marca ascendente de un nacionalismo de signo democrático) como en el interior donde el éxito de la política económica liberalizadora y gradualmente abierta a motivos sociales, contrasta con el agotamiento de un autoritarismo político basado en una alianza con las fuerzas católicas, que desde luego no podía sobrevivir a la reorientación de la política italiana de Napoleón III); para no morir el Imperio debe hacerse liberal, pero ni aun esa mutación tardía logra detener la erosión constante del apoyo que encuentra en el país.

Al lado de esa Europa de nuevo en movimiento, Hispanoamérica conoce un resurgir liberal cuyas modalidades no siempre ganan con ser examinadas de cerca, pero que desde México, Colombia y Venezuela hasta Chile, descubre un panorama bien distinto de aquél en que la república de Portales parecía ofrecer el único modelo político válido.

Las lecciones de prudencia que el espectáculo europeo y el hispanoamericano parecían sugerir en 1852 han perdido entonces buena parte de su fuerza persuasiva. La moderación, que para Mitre había sido el mérito principal de su versión del credo liberal, puede ya ser utilizada para poner en entredicho sus credenciales de vocero legítimo de ese credo. Pero –desde la perspectiva de un liberalismo menos temeroso de su, propia audacia– las culpas que pueden achacarse a Mitre no se reducen a una definición ideológica excesivamente tímida. Mitre ha mantenido lealtad quizá demasiado consecuente con las líneas de acción política definidas en 1852; bajo su presidencia, la Argentina contempló con la más fría indiferencia las luchas que desde México hasta Perú y Chile libraron las repúblicas hispanoamericanas contra la agresión de

las monarquías europeas; ha eludido también tomar explícita distancia frente a una Iglesia cada vez más decidida a transformarse en baluarte de la causa reaccionaria; el liberalismo mitrista aparece así cada vez más como contrario a las tendencias de nuevo dominantes en Europa e Hispanoamérica.

No sólo los voceros del federalismo comienzan a golpear bien pronto ese flanco débil del mitrismo (Guido y Spano denuncia la perfecta coherencia de la política interna y la exterior de Mitre, marcadas ambas por una clara orientación antidemocrática; el coronel Felipe Varela extrema la indignación frente a esa línea política; de ella es vocero vehemente Juan Carlos Gómez, pero la vemos expresarse igualmente, en tono más reflexivo, en los editoriales de *El Pueblo*, que ve en el apoyo a las resistencias nacionales y republicanas la única política exterior posible para el liberalismo, y advierte con creciente sorpresa que no es ésa la adoptada por el gobierno –que se proclama tan intransigentemente liberal– que el desenlace de Pavón ha deparado a la Argentina. Esa sorpresa es compartida por Sarmiento; en 1864, de paso a los Estados Unidos, donde va a representar a la Argentina por fin reunida, declara en Santiago y Lima la solidaridad argentina con el Perú y Chile agredidos, pero si sus fogosas expresiones son recibidas con entusiasmo por sus huéspedes, dan lugar a una fría amonestación del presidente Mitre...

En todos esos episodios se refleja el creciente aislamiento de la versión mitrista del liberalismo moderado frente a una menos tímida reformulación del credo liberal, en avance a escala mundial. Pero no es sólo el ejemplo de fuera el que denuncia el creciente anacronismo de la fe política de Mitre y su facción: existe en el país una masa de opinión de antemano favorable a esa redefinición liberal. La colectividad italiana, por ejemplo, cada vez más numerosa en Buenos Aires, y más identificada con la versión democrática del movimiento nacional (una colectividad a la que *El Río de la Plata* cultiva asiduamente) ofrece un público ávido para cualquier prédica basada en la nueva versión liberal.

Existe también una institución que agrupa a lo más influyente de la clase política argentina, y que se identifica cada vez más decididamente con un liberalismo menos circunspecto que el mitrista: es desde luego la Masonería.

Sin duda cualquier consideración sobre su papel en esa hora argentina es dificultada por la falta de estudios suficientemente precisos, tanto más necesarios porque las adhesiones que supo ganar entre los hombres públicos rioplatenses son tan numerosas y heterogéneas que cualquier tentativa de asignar a la incorporación a las logias un sentido unívoco es demasiado fácilmente refutable. Es indudable, sin embargo, que ya a fines de la década del sesenta la Masonería acepta sin vacilaciones como su tarea el combate ideológico en favor del espíritu nuevo, atacado aún en Hispanoamérica por la acción de monarquías agresoras, votadas a la defensa del eterno ayer, y a escala mundial por la creciente combatividad de una Iglesia católica que, por su parte, ha redefinido simétricamente su papel en el combate entre el pasado y el futuro. La Masonería es ahora la institución que atesora la memoria de Francisco Bilbao, ese inquieto chileno cuyo primer escrito fue quemado en su patria por mano de verdugo como impío y subversivo, y que, establecido en Buenos Aires luego de un largo periplo europeo, denunció a la vez que la agresión ideológica y militar de la Europa católica y monárquica, a la versión mitrista del liberalismo, a la que reprochó tanto su moderación como su espíritu faccioso. La Masonería toma a su cargo la edición póstuma de las obras del chileno; uno de los editores es Carlos Paz, que también publica en 1870, con Alvaro Barros, una áspera denuncia de la política exterior de Mitre, la alianza brasileña y la guerra paraguaya.

Más allá de esa ampliada caja de resonancia que la acrecida colectividad italiana ofrece a un liberalismo redefinido (cuya significación no convendría exagerar, ya que se trata de un grupo marginal, aunque cada vez más numeroso), más allá de la adhesión sin reticencias de la Masonería, hay otro motivo para la creciente popularidad de esa nueva versión liberal. Como en los años medianos del siglo la oposición entre el conservadorismo y un renaciente liberalismo, la que ahora se da entre dos opuestas versiones liberales se entiende mejor como un aspecto de un relevo generacional siempre difícil. En *La Gran Aldea* Lucio Vicente López ofrece, veinte años más tarde, bajo la faz de un cuadro de costumbres, una cumplida requisitoria contra Mitre y su fidelísima hueste política. Habla allí, sin duda, quien es hijo de una víctima de la mortal eficacia política de un Mitre en sus primeras armas, y ese aspecto de sus motivaciones no nos interesa aquí. Pero habla también quien tuvo veinte años en 1868, y reprocha duramente a la secta mitrista haberse cerrado entonces sistemáticamente a las nuevas generaciones, absorbida como estaba en una árida idolatría de sus dirigentes veteranos. No examinemos si esa evocación rencorosa no deja de lado algunos aspectos esenciales de la situación (aunque hubiese mantenido un ánimo más acogedor ¿qué podía ofrecer un partido en vertiginosa retirada que resultase atractivo a jóvenes ambiciosos de carrera política?). Pero ella capta muy bien la disposición de una generación nueva a escapar de la vacía ortodoxia moderada en favor de una más libre inspiración ideológica, capaz de satisfacer el apetito juvenil por las audacias programáticas, que a la vez –por una circunstancia afortunada– lejos de comprometer el éxito de su futura carrera política, viene a facilitarlos.

Ahora bien, no hay duda de que Hernández se identifica sin reservas con ese redefinido liberalismo. A la Masonería ofrece una adhesión militante cuya ausencia de toda reticencia contrasta notablemente con la actitud de un más antiguo hermano masón, Mitre, que en su discurso masónico de 1868 no sólo logró ignorar por entero el contencioso entre la Masonería y la Iglesia, sino halló modo de incluir una expresión de conmovido reconocimiento por la “caridad cristiana” del Arzobispo de Buenos Aires, quien sí se ha negado –con todo derecho– a conceder sepultura eclesiástica al que en vida había sido a la vez miembro del clero y de la logia, no objetó que la recibiese en el cementerio público, aún no secularizado (y que por añadidura parecía ver en la Masonería sobre todo una asociación de socorros mutuos, como lo muestra la algo pedestre peroración en que, tras de evocar lo que el influjo presidencial ha podido así obtener del arzobispo por un masón ya desaparecido, invita a sus oyentes a considerar qué pueden esperar del favor presidencial los que afortunadamente conservan la vida).

Todo ello hace más notable que, al marcar sus diferencias con el mitrismo, Hernández aluda apenas a las divergencias ya evidentes entre el liberalismo moderado que es el de Mitre y esa nueva versión del credo liberal, más dispuesta a subrayar sus motivos democráticos, que subtiende el nuevo consenso del que quiere hacerse vocero.

No por ello está más dispuesto a revivir, con finalidades de polémica antimitrista, la querrela facciosa que ha sobrevivido casi dos décadas al que debía ser el desenlace de Caseros. Por el contrario, la más grave, la más insistente de las acusaciones que lanza contra Mitre le imputa la intención de dar un nuevo soplo de vida a esa tradición de conflictos facciosos afortunadamente moribunda. Las facciones están en efecto en agonía, y es bueno que así sea; su reinado sólo ha dejado en herencia lutos y vergüenzas. Esa condena cerrada de todas las tradiciones políticas que se afrontaron en la breve historia de la Argentina independiente no podría extenderse a quienes siguieron sus orientaciones; uno de los reproches que Hernández formula a la solidaridad facciosa es haber sido capaz de inspirar acciones bárbaras y criminales a ciudadanos perfectamente honorables; estos últimos, una vez sacudido el siniestro prestigio de las facciones, pueden y deben incorporarse con la frente alta a la empresa de “unificación nacional” que exige esa hora argentina.

Hernández capta aquí –de nuevo con admirable precisión– lo que es ya una actitud colectiva: el deseo de dejar atrás una demasiado larga etapa de discordias se refleja a menudo en modificaciones en el estilo de convivencia pública que unos años antes hubiesen sido impensables. Sin duda, ellas no suponen un reconocimiento de total legitimidad a la facción vencida en Pavón (por lo menos no lo suponen en Buenos Aires, donde la única tradición federal vernácula era la rosista, condenada con igual energía luego de 1852 por federales y liberales). El punto preciso en que se alcanza ese acuerdo entre tradiciones se refleja muy bien en unas cuantas necrologías de 1869 y 1870. El doctor Baldomero García, que fue una de las ilustraciones de la legislatura rosista, y enviado por Rosas en misión a Chile (en cuya ocasión se constituyó en blanco perpetuo de los más violentos ataques periodísticos de Sarmiento), muere en ese último año. *El Nacional*, diario muy cercano al gobierno, publica una noticia marcada por la más extrema reticencia: “el único, el mejor elogio que podía hacer de él, era decir que moría pobre”; al parecer (y en esto el juicio del diario oficialista coincide con el del hijo del desaparecido hombre público) ante carrera política tan deplorable sólo cabe alegar como descargo que no fue utilizada para lucrar. *El Río de la Plata*, que si propugna la muerte de las facciones no oculta su raigambre federal, es menos circunspecto pero no menos ambiguo. Por la pluma de José Tomás Guido, medio hermano de Carlos Guido y Spano, intenta una limitada reivindicación de la legislatura rosista, que “contribuyó a levantar a un temple heroico el espíritu nacional para contrastar las amenazas de las primeras potencias de Europa”, pero abandona bien pronto el argumento para recordar que los desdichados legisladores, “ciudadanos expuestos más que los otros a los sombríos furores de la tiranía”, no podrían ser considerados responsables de decisiones inspiradas por un temor perfectamente razonable (es, por otra parte, la explicación que para su conducta adelantó el propio doctor García luego de la caída de Rosas, que saludó con alborozo). Compárese esa evocación inspirada por sincero afecto y respeto, pero dominada a la vez por la conciencia muy viva de que el destinatario de esos sentimientos no podría ser ofrecido a la veneración pública sin antes lavar su memoria de la mancha que implicaba una militancia rosista demasiado vehemente, con la que el mismo José Tomás Guido había ofrecido de Valentín Alsina, cuya entera trayectoria se desarrolló bajo el signo de una lealtad austera e inquebrantable a la tradición unitaria. Si el pasado de García presenta flaquezas necesitadas de la comprensión que para él solicita Guido, Alsina es –para ese orgulloso heredero de la tradición federal– el héroe sin mancha; la memoria de ese “tipo puro de patriota, de legislador, de hombre de bien” bastará para que “nuestros descendientes sean más indulgentes en sus fallos sobre los errores que anublan nuestro tiempo”.

Pero si no todos han de encontrar igualmente cómodo el acceso a esa nueva “unanidad nacional”, por lo menos éste comienza en efecto a abrirse para todos. Lo que alarma a Hernández es que el aborrecido

mitrismo haya advertido también ese cambio en el clima de opinión, y se muestre dispuesto a adaptarse a él. A la muerte del general Pacheco –tan eficaz represor de la disidencia antirrosista en el Interior en el año sangriento de 1840– Mitre pronuncia una conmovida oración fúnebre, y lo sucede en la tribuna el doctor Eduardo Lahitte, otra de las notabilidades de la legislatura rosista, que no encontró luego de 1852 demasiadas oportunidades de hacer oír su voz en público. Sin duda Mitre sólo alude en términos de la más elevada imprecisión a esa etapa de la carrera de Pacheco, y Lahitte, consciente de que su paso le obliga a una mayor circunspección, no la menciona en absoluto. Incluso así, el espectáculo del inventor del Partido de la Libertad, fraternizando con una luminaria de la legislatura rosista en el duelo por un antiguo azote de unitarios, es bastante para alarmar al *Río de la Plata*; de inmediato acusará a Mitre de lanzarse a la recluta de antiguos rosistas, y sugerirá a éstos que acaso aun viejo adversario está menos dispuesto a deponer sus reservas frente a los sobrevivientes que ante los grandes muertos de la facción.

Pero Hernández se preocupa además de marcar diferencias menos anecdóticas con la interpretación que el mitrismo ofrece de la reconciliación en marcha. Para éste, en efecto, esa reconciliación ha de expresarse en la adopción de un nuevo estilo de lucha partidaria, en que la vocación por el choque armado, justificada en la recusación de toda legitimidad para adversario, ha de ser reemplazada por una lucha circunscripta al terreno institucional, que supone en cambio el reconocimiento de la legitimidad de ese adversario. Para Hernández esa metamorfosis de las viejas facciones en partidos de tipo nuevo es imposible: las facciones han nacido y vivido como máquinas de guerra, y su solidaridad es también ella cuasi militar, ya que se cimenta en la lealtad a un jefe o a un grupo de hombres, no en la identificación con ciertas ideas. El abandono de la insurrección como instrumento de conquista del poder será, para facciones así definidas, un cambio excesivamente superficial, y se traducirá en el mejor de los casos en un reemplazo de la violencia por la corrupción; por añadidura, será necesariamente una decisión táctica, destinada a ser revisada apenas se presente una ocasión que prometa éxito favorable para una empresa insurreccional.

Lo que está ocurriendo no anuncia una metamorfosis regeneradora, sino el fin de las facciones históricas. Sin duda Hernández declara que su muerte deja despejado el campo para el surgimiento de auténticos partidos de ideas; no cree sin embargo que éste sea inminente y no parece por otra parte lamentarlo. La facción que usurpaba el nombre de partido, esa protagonista de una etapa deplorable del pasado nacional, muere sin dejar herederos inmediatos. En el vacío creado por esa gran culpable finalmente desaparecida, lo que comienza es un diálogo entre el Estado y los “buenos ciudadanos”.

En ese diálogo quiere insertarse Hernández; si no habla en nombre de una facción, tampoco se declara vocero de ningún sector social cuya representación pretenda asumir; prefiere invocar la fuerza persuasiva de la razón y las buenas ideas para sugerir tan respetuosa como firmemente un rumbo. Ese diálogo por él emprendido recuerda inesperadamente el abierto por los periódicos de la Ilustración colonial, tan dispuestos a acicatear con el elogio a los sucesivos virreyes, y parece vehículo particularmente inadecuado para una prédica inspirada en una voluntad de reforma radical bajo el signo de una ideología democrática. Reaparece aquí, exasperada, la misma contradicción que habíamos visto aflorar en Sarmiento: es la que no puede esquivar una voluntad de reforma que une a esa sincera inspiración democrática el reconocimiento de que el contexto sobre el cual pretende influir está destinado a conservar aún por largo tiempo su signo oligárquico.

Las razones por las cuales Hernández percibe aún más claramente que Sarmiento los límites que esa situación impone a su vocación reformadora son variadas. Está, en primer lugar, la conciencia de que su pasada trayectoria lo hace aún particularmente vulnerable a cualquier tentativa de negarle respetabilidad política. Quizá esta consideración inspira decisivamente la actitud de Hernández frente a la guerra paraguaya, ese elemento en la herencia negra del mitrismo que sin duda utiliza para enriquecer el inventario de culpas de éste, pero frente a la cual su rechazo es menos global e incondicionado de lo que parece a primera vista; un artículo como *Política Internacional. Falsas Teorías*¹⁰ muestra muy bien cómo puede combinarse diestramente la condena de la gestión de Mitre con la postulación de un estilo de política internacional específico de las repúblicas democráticas, para defender la seguida por gobierno de Sarmiento, decidido a continuar la guerra hasta la aniquilación del adversario y al parecer resignado de antemano a limitar el botín de la victoria para eludir un conflicto con el Brasil.

Pero, más aún que su difícil inserción en la clase política argentina, es la transformación de ésta la que incita a Hernández a colocar al Estado, más bien que a los partidos, en el centro del escenario. Las consecuencias del vacío de poder creado en Buenos Aires por el derrumbe del rosismo se han agotado ya hace mucho; la creación de una base política por una mezcla de oratoria encendida y acciones insurreccionales, es hazaña ya imposible. Para quienes comienzan una carrera política, incluso la conquista

¹⁰ *El Río de la Plata*, 13 de noviembre de 1869.

de ascendiente sobre un sector organizado de opinión es extremadamente difícil: la gravitación de corrientes movilizadas a partir de discutibles solidaridades facciosas ha sido reemplazada por la de máquinas electorales tan reducidas como belicosas, y la identificación con las sórdidas hazañas de éstas, si puede facilitar el comienzo de una carrera política, no favorecerá su exitosa prosecución (jefe de un partido nacional, Leandro N. Alem nunca iba a lograr, luego de 1890, que se olvidase del todo su pasado de gran elector autonomista en la parroquia de Balvanera).

Las consecuencias de esa nueva situación pueden ser particularmente serias para quien, como Hernández, intenta sacudir el lastre de un pasado demasiado largo para alcanzar plena respetabilidad política; aunque más atenuadas, se dan también para los miembros de nuevas promociones, dispuestos a emprender una carrera pública. Su éxito depende del favor del Estado y quienes lo controlan: de la benevolencia de éstos depende en efecto tanto el acceso a posiciones en el parlamento que pueden asegurar a sus jóvenes talentos un comienzo de celebridad, como a los modestos puestos burocráticos que permiten aguardar con más paciencia el desahogo traído por el éxito político.

Ello confiere a la actitud de Hernández, que se quiere intermediario entre el Estado y una masa de ciudadanos que rehúsan por el momento organizarse en colectividades políticas, un carácter más representativo de lo que su excepcional trayectoria previa haría esperable. La peculiar relación con el Estado, frente al cual, aun para modificar su rumbo, es preciso mantener un prejuicio favorable y reducir en lo posible las áreas de confrontación, se traduce necesariamente en una progresiva limitación del ímpetu reformador que lo anima; también en esto, el veterano de la política facciosa anticipa las actitudes de los protagonistas de la etapa que sucederá a la muerte de las facciones históricas.

Así y todo, la nueva formulación del credo liberal, que Hernández propone como correlato del consenso político cuyo surgimiento percibe, modifica en dos aspectos esenciales el canon del liberalismo moderado vigente a partir de Caseros. En primer lugar, recusa la identificación entre el credo liberal y los reducidos grupos políticos que en 1852 o en 1861 eligieron ciertas opciones al enfrentar alternativas que retrospectivamente no parecen ya haber sido la de la libertad y el despotismo; postula además una apertura a inspiraciones ideológicas más abiertamente democráticas e innovadoras que las que el clima contrarrevolucionario de la década del 50 había hecho aconsejable exhibir. Hernández no quiere ubicarse en ningún justo medio, no vacila por el contrario en subrayar los elementos utópicos de su orientación (“la utopía del Bien”) y en proclamarse combatiente, en nombre del progreso indefinido, contra los restos aún demasiado vigorosos de los prejuicios y rutinas de un pasado por definición deplorable. Pero su liberalismo democrático y radicalmente reformista tiene en común con el liberalismo moderado de Mitre la reticencia para definir con precisión sus objetivos últimos. En Mitre esa reticencia se inspiraba en el deseo de hacer del Partido de la Libertad el único representante legítimo de una sociedad compleja, cuya esencial armonía no podría eliminar del todo el surgimiento de internos conflictos de intereses; si Hernández denuncia esa pretensión como abusiva, y ve en ella una tentativa de justificar la tiranía de la facción sobre la sociedad que pretende representar la eliminación de esa intermediaria espuria será justificada postulando la necesaria armonía entre la sociedad, de nuevo esencialmente concorde, y el Estado que debe ponerse al servicio de ese acorde de voluntades e intereses.

Hernández, al dejar atrás el sangriento laberinto de un pasado faccioso, busca entonces para sí y para su país un nuevo estilo político marcado por el predominio de ese heredero inesperadamente vigoroso del choque supremo entre las facciones: el Estado nacional, fortificado en el crisol de la guerra paraguaya progresivamente liberado de los vínculos con la facción que desde 1861 pensó transformarlo en instrumento para consolidar su predominio. Esa nueva definición política está ya presente y madura en sus escritos de *El Río de la Plata*: la interpretación de la trayectoria de Hernández que intenta contraponer, al reformador radical de 1869 y 70, el resignado conformismo de la etapa de plena integración al oficialismo que sigue a 1880 (primero propuesta por Ezequiel Martínez Estrada y luego aceptada con inesperado entusiasmo por muchos de los que recusan la imagen en ella implícita de la Argentina rosista y posrosista) parece desplegar temporalmente una contradicción que está presente desde el comienzo en los escritos políticos de Hernández.

Esa interpretación encuentra estímulo en la presencia de altibajos brutales en su carrera política. Estos no han concluido en 1870 cuando cree haber finalmente arribado a puerto seguro, a la sombra de un Estado nacional que abandona rápidamente su orientación facciosa. Pocos meses después de recibir la visita de Sarmiento, Urquiza es asesinado por participantes en la revolución provincial que coloca en el poder al más importante de sus segundones, Ricardo López Jordán. Hernández quiere por un momento creer que aún es posible salvar el frágil entendimiento entre el gobierno nacional y el federalismo entrerriano; se declara seguro de que López Jordán sabrá condenar el crimen que lo beneficia y facilitar el castigo ejemplar de los responsables.

López Jordán no quiere y no puede hacerlo; Sarmiento se dispone a lanzar todo el peso del ejército nacional sobre la provincia así acorralada a una desesperada rebelión, que no logra siquiera disminuir el ritmo de avance de ese nuevo consenso político que Hernández se ha anticipado a definir, y del que ahora sólo queda totalmente marginado el jordanismo. En la alternativa que finalmente se ha mostrado ineludible, Hernández pasa a apoyar la causa de la rebelión entrerriana, pero advierte mejor que el jefe de ésta hasta qué punto el nuevo contexto político nacional condena de antemano cualquier movimiento que no supere el ámbito provincial. Las alternativas que quedan abiertas son: transformar el alzamiento entrerriano en punto de partida de uno nacional capaz de abatir al gobierno federal, o ganar para él el apoyo armado del imperio brasileño, que le permita reconstruir en su provecho la Confederación urquicista o por lo menos asegurar la independencia de un estado mesopotámico colocado de hecho bajo la protección imperial. Ninguna de esas alternativas se presenta fácil. Queda una tercera: lograr un avenimiento con el gobierno nacional que no suponga la derrota total de la causa rebelde. Ese avenimiento sólo será posible si el gobierno debe afrontar crisis aún más urgentes que la ocasionada por la disidencia entrerriana. Se comprende con qué alborozo Hernández –desterrado en Montevideo de la derrota del primer alzamiento jordanista– asiste a la crisis abierta con la candidatura de Avellaneda para suceder a Sarmiento, y su culminación en la infortunada rebelión militar que encabeza Mitre en 1874. La ocasión es ahora oportuna para el retorno a una prédica periodística que continúa la de *El Río de la Plata*: Hernández intenta de nuevo hacerse vocero de un consenso destinado a abarcar fuerzas más vastas que esa fracción del federalismo que ha venido sobreviviendo obstinadamente a las partidas de defunción prodigadas a lo largo de los años por su fatigado militante.

Los textos de 1874 marcan un distanciamiento aún más completo frente a la tradición facciosa; ésta no gravita ni siquiera como elemento negativo en el desarrollo histórico argentino; en ese papel ha sido reemplazada por los hombres supuestamente providenciales, que durante casi medio siglo han tenido al país encerrado en un laberinto de sangre en el vano intento de perpetuar su dominio. Esos hombres funestos son Rosas, Urquiza y Mitre; el destierro y la vejez han anulado al primero, una muerte con cuyas modalidades Hernández parece haberse reconciliado ya por completo hizo desaparecer al segundo; sólo Mitre se obstina en aventuras que no por rematar en fracasos cada vez más clamorosos son menos funestas: ellas logran distraer a la nación de su más urgente tarea, que es la consolidación institucional y la conquista del progreso económico.

La nación y el agente por excelencia con que ella cuenta: el Estado. La identificación con éste es aún más vehemente que en 1869 y 1870; si a primera vista la altiva condena en la última empresa subversiva por un vocero de la penúltima tiene algo de sorprendente, refleja en todo caso muy bien la confianza en la progresiva afirmación de ese Estado nacional que Mitre organizó como agente de una facción, Sarmiento quiso independiente de las facciones y Avellaneda se apresta a redefinir como árbitro entre ellas. No es sorprendente que el desenlace del proceso, alcanzado cuando Rosas haga del Estado el protagonista privilegiado de una acción política que quisiera ver reducida a actividad administrativa, cuente también con el asentimiento fervoroso de un José Hernández que verá en él, a la vez que la tan anunciada clausura de la etapa de estériles conflictos facciosos, la realización de su modesto sueño de integración plena en una clase política en la cual su agudo talento le daba derecho a ocupar posición mucho más importante que la ofrecida tan tardíamente por su complicado destino.

¿Pero qué eficacia puede conservar la inspiración democrática y la audaz apertura al futuro –con las que Hernández se identificaba sin duda sinceramente– en un contexto como ese que el mismo Hernández define y acata, y que está marcado por la creciente consolidación de un Estado que, por cierto, no ha ampliado sus bases sociales al abandonar su originaria definición estrechamente facciosa? Esa inspiración, esa apertura, suponen un enriquecimiento y una actualización de la cultura política frente a la del anquilosado mitrismo: es muy comprensible que, junto con Hernández, hayan percibido sus atractivos esas nuevas generaciones de la clase política que no quisieran ser dejadas atrás por la marcha de las ideas en Francia y Europa. Pero, al servir de apoyo para una identificación sin reservas con el ascenso de un Estado así definido, renuncian de antemano a inspirar un sistema preciso de propuestas alternativas a las formuladas a mediados del siglo, en el clima ideológico de reflujo posrevolucionario que había dejado su marca indeleble en el liberalismo mitrista. Esto hace entonces comprensible que para marcar sus distancias con el mitrismo, Hernández no haya acudido a una diferencia de inspiración ideológica, cuya irrelevancia, práctica no podría escapársele, y haya preferido fulminar en Mitre el eterno subversivo, enemigo inveterado de cualquier orden estable.

He aquí cómo –incluso para quienes intentan tomar máxima distancia frente al consenso alcanzado a mediados del siglo– los elementos de continuidad predominan sobre los que impondrían una ruptura. Aun así, la vigencia de esas propuestas ya viejas de casi un cuarto de siglo difícilmente podría dejar de ser

afectada por el hecho de que –en la larga etapa en que la atención primero concedida a ellas fue postergada ante el renacimiento inesperadamente vigoroso de las luchas facciosas– el país ha comenzado ya a cambiar de modo irreversible. (Así, ese José Hernández que comenzó su vida pública en medio de la guerra de montonera, en las agrestes soledades del sur de Buenos Aires, cuando la retoma en su provincia nativa en estilo más pacífico va a sorprenderse celebrando el aniversario de la República Romana en medio de esa muchedumbre italiana que la inmigración masiva había traído ya al Plata.)

Aun en ausencia de todo propósito deliberado de revisar los términos del consenso definido a mediados de siglo, ¿ese trasfondo ya irremediablemente cambiado no induce a redefinirlo así sea inadvertidamente? La respuesta afirmativa que esta pregunta tendenciosa solicita sólo puede alcanzarse a través de un balance preciso de lo que ha muerto y lo que sobrevive de un legado de ideas nunca recusado explícitamente. Para ello se requiere explorar qué motivos dentro de ese legado son no sólo evocados con mayor frecuencia, sino sobre todo utilizados para deducir de ellos soluciones relevantes a los problemas del día; cuáles, en cambio, son pasados en silencio o mencionados tan sólo para alegar artificiosamente que ciertas soluciones que los contradicen no son incompatibles con su permanente vigencia.

El consenso después de la discordia

1) *Los instrumentos del cambio.* Una exploración así encarada está condicionada, en un aspecto muy importante, por la naturaleza misma de los testimonios. Estos no reflejan ningún deseo de revisar de modo sistemático los distintos proyectos de creación de una nación nueva formulados a mediados del siglo. Ello significa que van a dejar necesariamente de lado el hecho –sin embargo capital– de que en esos proyectos cada uno de los instrumentos de cambio va integrado en un plan de construcción nacional, cuya nota distintiva no se hallaba en que se recurriese a ellos sino en el modo de su articulación y en los fines a cuyo servicio se trataba de poner su influencia.

Junto con ello corre riesgo de perderse de vista que ese legado renovador al que se rinde constante homenaje no propone un rumbo único, sino varias opciones alternativas. Lo que había separado a Alberdi de Sarmiento o de Frías no era, en efecto, una diferencia de opinión sobre la necesidad de acudir a la inmigración o a la inversión extranjera, o la de fomentar los avances del transporte y los de la educación, sino precisamente sobre el modo en que esos factores debían ser integrados en proyectos de transformación global, cada vez más perdidos de vista a medida que esa transformación avanza.

De esos elementos vistos de modo cada vez más aislados, la educación popular –a pesar de las reservas que en su momento había formulado Alberdi– no será nunca uno en torno al cual la controversia arrecie; tampoco recibirá mucho más que el homenaje de una adhesión tan total como distraída. Aun Sarmiento, que se ha identificado más que nadie con él, no le ha de conceder en los años de 1862 a 1880 la atención que le otorgó en etapas anteriores y volverá a consagrarle en sus años finales. Su gobierno impone sin duda una reorientación seria del esfuerzo del Estado hacia la educación primaria y popular (mientras su predecesor había buscado sobre todo expandir la secundaria); el hecho de que, gracias a ello, la presencia de la meta educativa se traduce en actos no carentes de objetivos políticos más inmediatos (como la formación de una burocracia que se sabe ligada al gobierno que la creó) invita a que arrecie el debate en torno a esos aspectos laterales. Pero ni quienes evocaban burlescamente a un Avellaneda conducido a la presidencia por un séquito de canónigos gordos y maestros flacos, ni José Hernández, cuando perseguía con ataques destemplados a Juana Manso, la docente y periodista cuya influencia sobre la política educativa de Sarmiento hallaba insoportable, ponían en tela de juicio la decisión de hacer de la educación popular uno de los objetivos centrales de cualquier acción de gobierno.

La inmigración despierta reacciones más matizadas, que sin embargo tampoco alcanzan a poner en duda la validez de esa meta, ni aun a someter el proceso inmigratorio, tal como se desenvuelve, al juicio severo que Sarmiento sólo emprenderá a partir de 1882. Típica es en este aspecto la actitud de Hernández: sin duda en 1869 se eleva contra la posición de *El Nacional* (el diario más cercano al presidente Sarmiento) que parece hacer de la inmigración una panacea para los problemas nacionales, y llega entonces a afirmar que la inmigración excesivamente numerosa está agravando el impacto de la crisis económica en curso. Pero se apresura a agregar que la responsabilidad por ello no es ni de los inmigrantes ni de la política inmigratoria; si tantos de los primeros deben “buscar su subsistencia lustrando zapatos, o vendiendo números de lotería”, ello se debe a la total bancarrota de la política de colonización, que debiera ofrecerles la alternativa de constituirse en productores agrícolas independientes. Y sus reservas frente a la ideología inmigratoria no son lo bastante fuertes para impedirle publicar las conclusiones de Manuel Sáez, quien, tras de ofrecer un cuadro sombrío de las prácticas políticas argentinas y concluir que ellas son consecuencias no sólo del escaso número, sino de las perversas inclinaciones de la población nativa, que ni las transformaciones sociales son

capaces de desarraigar, propone oponer a ésta una masa por lo menos equivalente de inmigrantes del norte de Europa¹¹.

La confrontación entre las propuestas renovadoras y los resultados de su aplicación a menudo sólo parcial, es menos fácil de esquivar en el área económica. Ella se da sobre todo al estímulo de intereses precisos, que se ven afectados por las soluciones adoptadas por el Estado. Nada sorprendente encontraremos de nuevo en este campo, antes que una revisión sistemática de las premisas en que se apoyan los proyectos coetáneos de Caseros, una discusión pormenorizada de aquellos de sus corolarios cuya aplicación es vista, por sectores dotados de alguna influencia, como perjudicial para su prosperidad.

Sólo ocasional y tardíamente se discutirá entonces la apertura sistemática al capital y la iniciativa económica extranjeros; con mayor frecuencia se oirán protestas frente a la supuesta timidez con que se la implementa. En Buenos Aires, el hecho de que el primer ferrocarril, creado por la iniciativa de capitalistas locales, pasa luego a ser de propiedad de la provincia, es visto por muchos como una anomalía. Ya en 1857 Sarmiento ha subrayado que el único modo de acelerar la creación de la red ferroviaria es dejarla a cargo de la iniciativa extranjera, que debe ser atraída mediante generosas concesiones de esa riqueza que el país posee en abundancia y no puede por el momento utilizar: la tierra, condenada a permanecer insuficientemente explotada mientras falten medios de comunicación. En la década siguiente, *El Nacional* propondrá más directamente la transferencia del Ferrocarril Oeste a manos privadas y británicas; es ésta una de las propuestas, oficiosas del gobierno de Sarmiento que encuentra más entusiasta aprobación de José Hernández.

El papel central del capital extranjero en la expansión económica argentina no es entonces objeto de seria controversia; cuando Mitre, en 1861, dedica su oratoria entusiasta a cantar las glorias del capital británico, no hace sino dar voz a una convicción que comparte con sus enemigos políticos. Aun menor controversia comenzará por despertar la apelación ilimitada al crédito extranjero, si bien no faltan quejas sobre el uso poco productivo que el Estado hace de él (de nuevo no es sorprendente que estas quejas provengan a menudo de quienes se identifican con alzamientos reprimidos gracias a la superioridad militar que el uso del crédito está conquistando para el gobierno nacional). Hernández es uno de los más entusiastas partidarios del endeudamiento externo, medio a su juicio indoloro de allegar los recursos necesarios para un rápido progreso.

El consenso se hará mucho más reticente en torno a la liberalización del comercio externo. Por una larga etapa el librecambismo va a ser reconocido como un principio doctrinario irrecusable; aun durante ella, sin embargo, la necesidad de proteger, mediante sólo aparentes derogaciones a esa doctrina, ciertos sectores de la economía local, va a ser vigorosamente subrayada. Así, Nicolás Calvo va a comenzar expresando su sólida fe librecambista, para concluir que no es posible sacrificar a principios sin duda válidos los concretos intereses de los artesanos de Buenos Aires, mientras Bartolomé Mitre, aplicando una línea de razonamiento que no deja de ser ingeniosa, sostiene que la protección tarifaria de los trigos producidos en Buenos Aires sólo aparentemente se aparta de esos principios: si idealmente los productores locales debieran estar dispuestos a afrontar la concurrencia del trigo importado, por el momento les es imposible hacerlo porque el Estado no ha creado para ellos un adecuado sistema de comunicación; mientras la desidia de éste haga más caro el transporte de trigo a Buenos Aires desde los centros de la campaña que desde ultramar, es deber elemental del gobernante no descargar sobre los pobres labradores las consecuencias de sus propias culpas.

Un sólido consenso va a afirmarse entonces en torno a los principios básicos de la renovación económica postulada para la Argentina; aun allí donde éste se hace menos entusiasta, esa relativa tibieza será

¹¹ Así, escribe en “La gran cuestión de la República Argentina (*El Río de la Plata*, 13 de abril de 1870) que “Un medio nos queda de curar todos nuestros males”: “doblar nuestra población con inmigración norteamericana”, la que ofrece las siguientes ventajas:

“La primera es su *costumbre del trabajo*. Poco favorecidos por la naturaleza los países septentrionales de Europa, sólo por medio del trabajo del hombre han podido crearse elementos para suplir la falta del favor natural y alcanzar la alta civilización que los distingue. El trabajo es una condición indispensable y por lo mismo es una costumbre en sus habitantes.

La segunda es su *moralidad*. El trabajo continuo y la acción poderosa de un clima rígido, son dos causas naturales del arreglo de vida en los hombres, fuera de otras causas morales que por la notoriedad del hecho se hace innecesario consignar.

La tercera es su *robustez física*. Por la influencia climatérica en el organismo animal, el trabajo personal y el género de vida, el desarrollo físico del hombre se efectúa de un modo perfecto, conservándose una raza joven, sana y robusta que es la más a propósito para regenerar la nuestra decayente.

La cuarta es su *amor a la libertad*. Las condiciones físicas especiales a que están sometidas las poblaciones norteamericanas, han formado en ellas un carácter y una índole que han hecho posible y prolongada la existencia de gobiernos regulares, bajo los cuales la libertad en el orden ha tenido un extenso campo de desarrollo, aun cuando esos gobiernos no lleven el nombre de democráticos”.

también ella vastamente compartida y se transformará en un elemento más de ese implícito acuerdo que une a los más fieros enemigos políticos.

No por ello van a dejar de incorporarse temas de debate económico a la controversia política; esto se debe sin embargo, sobre todo a la utilización ocasional por un grupo político de un conflicto del que espera obtener, gracias a sus tomas de posición, nuevos apoyos. Esa adhesión a la vez efímera y violenta a ciertas soluciones económicas es, a menudo, tachada de poco sincera; sin entrar a analizar el mérito de la acusación, es preciso convenir que su estímulo principal no deriva de una convicción permanente en la validez de ciertas soluciones económicas. Es ejemplar en este sentido la campaña lanzada por Mitre para reservar a la provincia de Buenos Aires la construcción y administración del puerto de la capital. En el curso de ella va a afirmar que la noción de que el Estado es mal administrador es sólo un prejuicio nacido de la ignorancia, y también en este punto va a encontrar la intransigente oposición de José Hernández, que la declara sacrosanta verdad. Acaso Hernández esté en terreno más sólido cuando sugiere que Mitre no está tan vivamente interesado en el tema en debate como en la posibilidad de que su campaña le permita volver a ser visto por la opinión pública porteña como el defensor por excelencia de los intereses de la provincia, un papel que ha debido descuidar mientras ocupó la presidencia de la nación. Pero no es excesiva malicia preguntarse si el súbito interés de Hernández por el Estado empresario, y sus conclusiones sobre el problema, aunque expresión de convicciones no improvisadas, no deben algo de la desdeñosa firmeza con que los expresa a una motivación tan extrínseca como la que –probablemente con justicia– achaca a su eterno adversario.

Sólo en la década del setenta, algo parecido a un debate sobre principios económicos comienza a desarrollarse en torno al punto del programa renovador que desde el comienzo goza de apoyo más reticente: el proteccionismo adquiere ahora nueva respetabilidad al ser presentado como alternativa válida a un librecambismo antes recusado a veces en los hechos, pero no discutido en su validez teórica. Es de nuevo –como en Sarmiento– el ejemplo de los Estados Unidos el que invita a poner en duda la sabiduría de un programa de acción que se reduzca a abrir las compuertas a la tumultuosa invasión de fuerzas económicas externas. Pero las tomas de posición en favor del proteccionismo –aunque sintomáticas de un primer resquebrajamiento en el consenso que ha rodeado las líneas mayores del programa de cambio económico– alcanzan eco relativamente reducido y están lejos de suponer una recusación global de los supuestos a partir de los cuales fue emprendida la construcción de un nuevo país.

La razón para ello puede buscarse en el hecho de que las formulaciones proteccionistas sólo pueden ganar favor en la medida en que se hacen expresión de las reservas de sectores ya influyentes de la economía argentina frente al desempeño de ésta; es sugestivo que las corrientes proteccionistas se afirmen en momentos que el sector terrateniente exportador halla difíciles, y se proclamen capaces de ofrecer alivio a esas dificultades, ya sea de modo directo –es así cómo el proteccionismo textil debía crear un mercado interno para la lana, que resultaba cada vez más difícil instalar en ultramar– o indirectamente los impuestos a la importación, no deja de sugerirse, pueden sustituir con ventaja a los que gravan las exportaciones. Ahora bien, no hay duda de que esos sectores económicamente dominantes deben en buena parte su posición privilegiada a una línea de desarrollo a la que –pese a las lamentaciones de las que no son avaros– permanecen apegados en lo sustancial, aunque quisieran introducirle algunas correcciones.

Pero hay otra razón sin duda aún más esencial para que la disidencia que el proteccionismo implica permanezca encerrada dentro de límites relativamente estrechos. En su versión más extrema, el proteccionismo recusa la teoría de la división internacional del trabajo (en las más moderadas, se limita a sugerir que ella no debe ser aplicada demasiado literalmente). Lo que en cambio no entra a examinar es si, al margen de la política económica más o menos bien inspirada del gobierno argentino, la nueva intimidad con la economía mundial no está consolidando un lazo tan desigual como difícil de modificar con las áreas metropolitanas de esa economía. El proteccionismo se presenta como una de las posibles formulaciones de la concepción sarmientina del cambio deseable, más desconfiada que la alberdiana de las consecuencias de la acción espontánea de las fuerzas económicas; con ella comparte la fe en que el frágil Estado, que comienza a consolidarse en un área marginal y devastada por demasiado largas tormentas políticas, tendrá poder y recursos suficientes para imponer decisiones capaces de torcer el rumbo de esas fuerzas tan prometedoras como temibles.

Es esta última fe la que en efecto subtiende la prédica proteccionista, cuando no es sustituida por otra mucho más candorosa, que supone que algunos cambios secundarios en la legislación e inversiones públicas igualmente modestas, serán suficientes para corregir los males denunciados. Una y otra se apoyan en la fe implícita en que está abierto a la Argentina el camino que la colocará en un nivel no sólo de civilización sino también de poderío económico y político comparable al alcanzado por las potencias europeas; el ejemplo de Europa invocado por Alberdi, el de esos Estados Unidos que son el único país no europeo en vías de realizar

esa hazaña, que prefieren Sarmiento o los proteccionistas, señalan sin duda caminos diferentes pero apuntan en la misma dirección.

¿Significa esto que no es advertido el hecho, sin embargo obvio, de que la Argentina es un área marginal, y que su condición de tal no puede dejar de pesar duramente sobre su capacidad de fijar libremente su rumbo futuro? Sería excesivo concluirlo pero, aunque es evidente que existe una conciencia muy viva de los peligros que esa posición marginal supone, ella se da sobre todo en el plano político. He aquí otro aspecto de la herencia rosista, que Alberdi había desdeñado inventariar pero que los sucesores y enemigos de Rosas iban a atesorar: la soberanía política va a ser defendida por ellos con un celo que refleja su convicción de que las relaciones internacionales, y sobre todo las relaciones entre las grandes potencias y los frágiles estados en surgimiento en las áreas marginales, contienen un elemento peligroso de hostilidad actual o potencial, pero en todo caso ineliminable; un escrito como *Los desertores de marinas de guerra*¹², que Sarmiento publica en 1857, muestra hasta qué punto permanece viva la conciencia de ese antagonismo. El hace necesaria una constante vigilancia para asegurar que la personalidad internacional del nuevo Estado no sufra menoscabo, para que no sea tratado como un reino bárbaro de Guinea o del Asia. Esto sería inaceptable por la humillación que supone, pero sobre todo porque las nuevas naciones de la América española son algo radicalmente distinto. La ubicación frente al hecho colonial que esa imagen de la condición hispanoamericana inspira está admirablemente reflejada en un breve escrito de Mitre, también de 1857, en que comenta la rebelión cipaya. A la vez que declara que desear su triunfo sería “simpatizar con el crimen, con la barbarie y con la tiranía”, y augura la llegada del día en que “la India más civilizada, heredera de las instituciones del pueblo inglés, se emancipe de su metrópoli sin convulsiones, o por lo menos en una lucha regular” (un augurio al que no se le puede negar algún mérito profético), subraya que simpatizar con los alzados es equivalente a desear “el triunfo de Calfucurá sobre los defensores de la civilización y el cristianismo”: Hispanoamérica es hija de la Europa conquistadora, y no tiene afinidad alguna con las víctimas de esa conquista (aunque ello no le impida condenar el hecho colonial, a partir de principios compartidos ya por las mentes más esclarecidas de los países colonizadores) ...

¿Es ésta una triste consecuencia del apego a una definición puramente formal de la independencia política, que se traduce en la defensa de un estatuto jurídico ineficaz para impedir la dependencia real, y en la reivindicación de una pertenencia de pleno derecho a la comunidad civilizada que sólo es tomada en serio por las potencias hegemónicas cuando puede ser visada como argumento en su beneficio? He aquí un resumen abusivamente simple de una actitud mucho más compleja. Es preciso recordar, en primer término, que lo que a fines de siglo se llamarán las naciones civilizadas se llaman todavía, cuando Hispanoamérica intenta primero definir su relación con ellas, las naciones cristianas. Que Hispanoamérica integra una comunidad así definida parece difícil de rebatir. La experiencia prueba, sin embargo, que su posición dentro de ella es particularmente vulnerable; hacia 1850 se hace popular la noción de que existe un riesgo cierto de perderla si no se atenúa rápidamente el desnivel que separa a las nuevas naciones españolas de América de los países más desarrollados de Europa. Pero al sugerir remedios no se busca la causa principal del atraso en la condición marginal de Hispanoamérica, un área que sólo hace poco ha dejado de ser colonial; su situación no es, desde la perspectiva de 1850 o 1870, sustancialmente distinta de la de España; ahora bien, pretender explicar la sombría situación de un país que ha dominado Europa durante casi dos siglos, basándose en su originaria marginalidad, es sin duda abusivo. La explicación debe buscarse más bien en el rumbo tomado por España –y con ella por las colonias que creó a su imagen y semejanza– a partir de la gran crisis que abre los tiempos modernos; la Contrarreforma, más que las ventajas económicas luego ganadas por las zonas de la cristiandad no entregadas a su influencia, está en la raíz del estancamiento español e hispanoamericano; para curarlo es preciso atacar el mal en esa raíz misma, abriendo el mundo hispánico a los influjos de fuera; esa conclusión no ignora los riesgos implícitos en tal apertura, pero los justifica recordando que la alternativa de mantener y acentuar el aislamiento había sido ya intentada sin éxito por la antigua metrópoli.

Y por otra parte, aun quienes tienen conciencia más viva de esos riesgos están sostenidos por la seguridad de que las naciones hispanoamericanas cuentan con los medios de superarlos, si se deciden a usar de ellos. Si Alberdi juzga que la inmigración de hombres y capitales, en un marco de autoritarismo político e inmovilismo social, hará de la Argentina una réplica y no un satélite de Europa, Sarmiento no duda de que una política diferente permitirá repetir el milagro norteamericano a orillas del Plata. Esa confianza es tan viva que, cuando intenta persuadir al representante británico en Buenos Aires de que no debe seguir apoyando a un Rosas al que presenta aún como el más serio obstáculo para el progreso económico de la región, Sarmiento cree preciso tranquilizarlo acerca del peligro que ese progreso puede significar para los intereses británicos; no es necesario temer –le asegura– que la expansión de la economía rioplatense deje de

¹² *El Nacional*, 17 de abril de 1857. En *Obras completas*, tomo 36, Buenos Aires, Luz del Día, 1953.

ofrecer complemento a la economía industrial británica¹³. Mitre será más optimista; en su ya mencionado discurso sobre *El capital inglés*¹⁴, en el que sin embargo intenta aventar los malos recuerdos de la etapa apenas dejada atrás, cuando el poder de Gran Bretaña apoyó obstinadamente a la confederación urquicista, y adopta para ello un tono pesadamente adulatorio, no deja de recordar que la Inglaterra de la Gloriosa Revolución estaba económicamente menos desarrollada que la Argentina de mediados del siglo XIX; en menos de doscientos años Argentina habrá alcanzado y quizá sobrepasado a Inglaterra...

Ni una disidencia política que prefiere por demasiadas razones definirse en un plano anecdótico, ni un preciso proyecto alternativo de cambio económico-social vienen entonces a debilitar la segura fe en que –como quería Alberdi– la edad de oro de la República Argentina estaba en el futuro, y que desde mediados del siglo había quedado abierto el camino para ese futuro. Pero esa seguridad, que no ha debido siquiera probarse contra las objeciones formuladas desde ninguna perspectiva ideológica de veras disidente, es más vulnerable al testimonio a menudo inquietante que la realidad inmediata ofrece: las vacilaciones, las crecientes ambigüedades que minan esa fe nunca recusada nacen casi siempre, sencillamente, de mirar a la Argentina. A la Argentina y dentro de ella a esa campana cuya miseria y barbarie habían parecido, antes de 1852, prueba irrefutable de la necesidad urgente de comenzar la construcción de un país nuevo hasta sus cimientos.

La campaña y sus problemas

En 1873 José Manuel Estrada ofrece, en un cuadro de fuertes relieves, la que ya ha llegado a ser la imagen dominante de la campaña y su lugar en una nación que desde hace veinte años ha venido proclamando la urgencia de cambiarlos radicalmente. Para Estrada, la posición de la campaña en la Argentina republicana repite la que la España conquistadora signó a las sociedades indígenas sobre cuya explotación afirmó su dominio. La campaña existe para la ciudad; ésta avanza en riqueza y civilización gracias a lo que aquélla produce, pero esos avances no han de trasponer los límites urbanos. En 1845, Sarmiento había contrapuesto una campaña sumida en la Edad Oscura, a ciudades que vivían la vida del siglo XIX; el esfuerzo consagrado a corregir esa anomalía ha terminado al parecer por agravarla.

Estrada ubica así el problema de la campaña en un contexto temporal y espacial muy vasto: la historia de la entera Hispanoamérica a partir de la conquista. Ello no impide que la realidad que intenta explicar no abarque ni aun a la entera Argentina: cuando habla de la campaña, Estrada se refiere a la de la provincia de Buenos Aires.

No es el único en hacerlo: es, en efecto, en la primera provincia donde el contraste entre progreso urbano y primitivismo de la vida campesina es más evidente, y ello no sólo porque su capital es la de la nación y a la vez el primer puerto de ultramar de ésta, y se moderniza con ritmo febril. Hay otra peculiaridad aún más decisiva: es en Buenos Aires donde la presencia amenazante de la frontera indígena toca de cerca a las zonas rurales dinamizadas por la expansión de la economía exportadora, y contribuye a dar allí un tono peculiar a las relaciones entre el Estado y sus pobladores. La arbitrariedad administrativa, que en todas partes conoce menos atenuaciones en la campaña que en la ciudad, se transforma aquí en instrumento de un sistema de defensa del territorio cuyas exigencias entran en vivo conflicto con las de la economía productiva: si paulatinamente ganados y caballadas pasan a estar mejor protegidos de las caprichosas exacciones del poder político, mientras dure la amenaza indígena los hombres permanecerán librados a sus crueles azares.

No es entonces sorprendente que Alvaro Barros coloque el tema de la frontera en el centro de su discusión de la economía ganadera porteña. Pero, para Barros, la frontera ofrece sólo el ejemplo más extremo de las consecuencias que puede alcanzar la falta de protección a los derechos privados, que es correlato de la arbitrariedad del poder administrativo. La supuesta defensa contra el indio ha sido organizada con una ineficacia calculada para aumentar los lucros de quienes controlan la frontera: proveedores necesariamente inescrupulosos (ya que, como prueba Barros, no hay manera horada de abastecer a las guarniciones sin perder dinero), comerciantes y oficiales que son cómplices de esas expoliaciones y también de las sabiamente dosadas que toleran de su supuesto enemigo indígena... Partiendo de esa realidad que conoce muy bien, Barros va a explorar intrépidamente otras que conoce menos, para ofrecer cálculos algo delirantes de los costos invisibles que ese sistema supone para los productores rurales.

No es sorprendente que un sistema de defensa que se basa en la arbitrariedad administrativa para movilizar los recursos humanos que requiere, acentúe el imperio de ésta sobre las zonas. en que recluta sus

¹³ “Al señor H. Southern”, *Crónica*, 20 de enero de 1850, en *Obras Completas*, t. VI. Buenos Aires, Luz del Día, 1949, pp. 276-295.

¹⁴ Bartolomé Mitre, *Arengas*, Buenos Aires, Casavalle, 1889.

víctimas. Hernández va a poner el acento sobre esta conexión necesaria en los numerosos artículos que dedica a la campaña en *El Río de La Plata*. Va a señalar también otra función esencial de esa arbitrariedad administrativa: ella se ha transformado en instrumento indispensable de las facciones provinciales en lucha. Hay ajuicio de Hernández un expediente sencillo para suprimir el mal: instituir el enganche, que hará posible defender la frontera con voluntarios a sueldo, y reemplazar a los jueces de paz de campaña por municipalidades electivas: como no deja de señalar –y por otra parte nadie ignora– el juez de paz es libre de administrar a su capricho el distrito que el gobierno provincial le ha confiado, mientras logre obtener de él (por procedimientos que no serán tampoco sometidos a ningún pedantesco escrutinio) los veredictos electorales que a ese gobierno convienen; de este modo el interés de la facción gobernante (cualquiera sea ella) se suma al del fisco –deseoso de gastar lo menos posible en la defensa contra el indígena– para mantener a la entera campaña a merced de administradores necesariamente arbitrarios y casi siempre corrompidos.

En sus artículos Hernández evoca ya esos “males que conocen todos”, que darán muy pronto tema a la primera parte de *Martín Fierro*. Esos males son esencialmente políticos; seguirán siéndolo en el poema, pese a la apasionada identificación de su autor con una víctima cuya culpa principal es su pobreza, que hace a los poderosos sordos a sus razones. La pobreza misma es considerada desde esa perspectiva al cabo limitada; en este poema supuestamente social, será preciso el paciente rastreo de algunas escasas y leves alusiones para descubrir el lugar del héroe en la sociedad ganadera (y comprobar que éste está lejos de ser ínfimo: si Fierro arrendaba tierras ajenas tenía ganado propio, es de suponer que comprado con recursos adquiridos durante su etapa de peón especializado en partidos del sur de la provincia, en la cual según se nos asegura hizo bastante dinero. Tal indiferencia a los clivajes sociales dentro de la campaña (de ninguna manera incompatible con una identificación sin duda sinceramente sentida con sus moradores más desfavorecidos) es perfectamente adecuada a una visión del problema rural que presenta a la entera sociedad ganadera como víctima del poder que la gobierna. La imagen que Barros y Hernández proponen –y que no es necesariamente falsa– coincide, nada sorprendentemente, con la que hacen suya los voceros de la clase terrateniente porteña, que quieren también ellos hablar en nombre de la entera población campesina. “A poco tiempo de la jornada de Caseros”, un grupo de “pobres pastores y trabajadores” de la campaña se deciden a someter a la legislatura de la provincia “una humilde exposición”; esperan que su voz, la “voz del paisano (que) nada tiene de florido”, sea capaz de evocar un eco en “el corazón puro del legislador piadoso”. .

El documento así presentado no podría sin embargo caracterizarse como humilde; tras de recordar que la campaña es el “núcleo y secreto del poder de la provincia”, señala que el gobierno que ha lanzado a esa provincia por el camino de la secesión debe aún ganar para sí la simpatía y el apoyo de las áreas rurales. Para lograrlo ha de probar que la secesión se ha hecho “a beneficio de las masas, a favor del pobre cuya condición se trata de mejorar; a favor de la clase trabajadora en cuyo seno descenderán al fin algunas garantías sociales”. He aquí un lenguaje tan claro como el de *Martín Fierro* y considerablemente más desafiante que las lamentaciones de esa víctima de interminables desgracias. Pero de nuevo, si la situación de la entera campaña es identificada con la de sus habitantes más desvalidos, la perspectiva de los autores del documento no es la que podría esperarse de aquéllos. Sin duda no dejan de mencionar que debiera ser reconocido a los arrendatarios el valor de las mejoras por ellos introducidas, pero se extienden mucho más abundantemente en problemas que tocan más de cerca a los propietarios (y no necesariamente a los menores). El interés en una clara definición de la propiedad de la tierra y del ganado es predominante; la preocupación por ese circuito comercial a disposición de los tenedores de ganado ajeno (una preocupación tan antigua en la clase terrateniente porteña) mantiene aquí, como conservará veinte años más tarde en el texto de Barros, toda su vigencia. Aun la denuncia del reclutamiento arbitrario, que declara defender a la entera población de la campaña, presenta un carácter selectivo que sigue revelando hasta qué punto esa campaña no es vista desde la perspectiva de los más desfavorecidos; lo peor del reclutamiento arbitrario es que su peso cae siempre sobre “el vecino honrado” y no sobre “el vagabundo que se ocultó en los pajonales”...

No ha de sorprendernos entonces que si los nombres de esos pobres pero elocuentes paisanos no nos son proporcionados por la *Revista del Plata* –que ofrece alborozada hospitalidad a un documento tan parecido en su tono y estilo a los artículos redactados por su director Carlos Pellegrini–, los de los extranjeros que interesados en el buen orden administrativo de la campaña ofrecen su apoyo al documento, y que la *Revista* sí publica, incluyan el del mayor ovejero irlandés de Buenos Aires, Enrique Harratt, y los de varios grandes hacendados y comerciantes en frutos del país.

Años más tarde Eduardo Olivera, sin abandonar la pretensión de hablar en nombre de la entera campaña, proclama con menores reticencias su identificación con la clase terrateniente (a la creación de cuyo organismo societario, la Sociedad Rural Argentina, ha consagrado tan intensos esfuerzos) para reiterar la

condena de la arbitrariedad administrativa y sus consecuencias. Los problemas del reclutamiento arbitrario se han agravado porque, como consecuencia de la guerra del Paraguay, la necesidad de tropas está creciendo rápidamente y sectores cada vez más altos de la sociedad ganadera son afectados por la presión reclutadora. La misma perspectiva reaparece en Hernández, pese a su capacidad de identificarse poéticamente con los parias de la campaña porteña. Un buen complemento al enganche –asegura en *La gran dificultada*¹⁵, el 4 de setiembre de 1869–es destinar al servicio de armas a “la clase vagabunda, que no tiene hogar, ni profesión, y que importa de otro modo una amenaza permanente contra el orden social y político”.

He aquí cómo la apelación a la sensibilidad de la privilegiada opinión pública urbana, a la que se invita a compadecer el desvalimiento de las masas rurales, se resuelve en un alegato contra un estilo de gobierno que frena la expansión de la economía rural y limita las perspectivas de ganancia de la clase terrateniente. Al expresarse de este modo, el sector hacendado no hace sino continuar una vieja costumbre, adquirida bajo la tutela regia, cuando la actitud que se esperaba aun de los más poderosos sectores de intereses frente a los emisarios de la corona era, en efecto, la de humildes peticionantes, y conservada todavía hasta hoy. La comprobación de que así están las cosas no debe llevar tan sólo a un superfluo desenmascaramiento de algo que se enmascara tan mal; quizá sea más provechoso preguntarse por qué las cosas están en efecto así.

Si la Argentina de 1870 tiene un sector dominante, la posición central dentro de él de los terratenientes de Buenos Aires no puede ser puesta en duda. ¿Y por qué toleran éstos en 1852, en 1867, en 1869, una situación cuyas consecuencias negativas evocan en interminables lamentaciones? Al parecer recae también sobre los ricos de la campaña ese desvalimiento político que para Hernández era la consecuencia más digna de atención de la pobreza de la plebe rural.

¿Por qué, en efecto, una clase que cuenta con los recursos de los terratenientes porteños no es capaz de defender más eficazmente sus intereses? El problema no lo encararon ni Barros ni Hernández; Sarmiento le concederá, en cambio, atención tangencial en un brevísimo pero penetrante examen de las peculiaridades del orden político que ha madurado en Buenos Aires a partir de Caseros. Para él la clave se encuentra en el hecho de que la clase terrateniente porteña está formada de propietarios ausentistas, que hacen sentir su gravitación sobre las masas rurales a través de agentes económicos (capataces, propietarios menores económicamente subordinados, comerciantes de campaña) a cuya acción política (celosamente controlada en cambio por el gobierno provincial) han prestado atención excesivamente distraída.

El resultado es que esos agentes económicos nunca lo serán de la influencia política de la clase terrateniente; han establecido, en cambio, vínculos directos con el personal que controla la administración provincial; como consecuencia de ello la clase terrateniente ha abdicado de antemano cualquier influjo sobre la vida política de la campaña. Pero esa abdicación no se ha traducido en una auténtica emancipación política de las masas pastoras, el arcaísmo que sigue caracterizando al económico-social de la campaña porteña la haría imposible; en cambio, esas masas han trocado la tutela de la clase terrateniente por la de un poder político aún más radicalmente indiferente a sus intereses y aspiraciones. De esta imagen que no deja lugar a la esperanza, Sarmiento no deduce ninguna propuesta de cambios drásticos: su propósito es contrastar el primitivismo político de la orgullosa Buenos Aires con la relativa madurez de su nativa San Juan, donde la arrogancia de la oligarquía liberal mitrista acababa de ser humillada en las elecciones por un electorado formado por labradores independientes, que había dado su apoyo al candidato favorecido por Sarmiento.

Ese desahogo de un intermitente mal humor frente a la primera provincia esconde entonces mal la aceptación resignada de los rasgos intolerablemente primitivos conservados por el orden social y el estilo político en lo que sigue siendo el núcleo del poderío económico del país. Es sin duda una actitud muy distinta de la que Sarmiento había manifestado frente al problema veinte años antes.

Durante la etapa de separación de Buenos Aires, en efecto, - una coyuntura especialísima hizo posible una formulación sin reticencias del proyecto de transformación rural que Sarmiento había declarado esencial para la creación de una nueva nación. En Chivilcoy, al oeste de Buenos Aires una comunidad de agricultores cultivaba tierras que habían sido dadas en propiedad por Rosas en lotes considerables, como recompensa a servicios políticos, a donatarios que no se proponían por cierto explotarlas directamente. De modo imprudente, éstos buscaron ahora hacer efectivos sus dudosos derechos de propiedad, y el conflicto que los opuso a los labradores de Chivilcoy vino a entrelazarse con los más complejos que la liquidación necesariamente incompleta del pasado rosista provocaba en el estado de Buenos Aires. Pero lo que facilitó la campaña de Sarmiento no fue tan sólo la posibilidad de presentar, ante una opinión pública exacerbadamente antirrosista, esos títulos de propiedad como “boletos de sangre” y a quienes los exhibían como criminales que pretendían ser premiados por sus víctimas. Fue sobre todo que un grupo compacto de

¹⁵ *El Río de la Plata*, 4 de setiembre de 1869.

esas masas rurales habitualmente pasivas (o reaccionando al servicio de causas que le eran ajenas) se había por una vez movilizado para defender un interés propio: Sarmiento revela ahora hasta dónde estaría dispuesto a llegar si contase con ese público popular al que siempre aspiró. En nombre del gaucho errante, del hijo del país, estigmatiza un sistema que expulsa a los hombres para dar más ancho lugar a los ganados; ecos del Evangelio y de Moro resuenan en la prosa del servidor disciplinado de un orden al que define como conservador, que parece más que dispuesto a comenzar una nueva carrera como agitador radical.

Chivilcoy abre así por un momento la perspectiva de una transformación de la campaña, a cuyas potenciales consecuencias políticas Sarmiento no es menos sensible que a las económico-sociales. Y no es por cierto el único en advertirlas; en lenguaje menos destemplado, pero no menos firme, Mitre levanta ahora su voz contra los “señores feudales” que dominan la campaña y la condenan a la despoblación y. el atraso.

Pero esa perspectiva se revela ilusoria, y a falta de un sector suficientemente amplio de las clases populares resuelto a identificarse con los cambios que Sarmiento propone, éste vuelve a un público para él más habitual, el de las clases ilustradas; ante ellas el programa de transformación rural debe ser defendido en lenguaje más mesurado, pero esa diferencia de estilo no se acompaña de ningún cambio sustancial en el contenido de sus propuestas; así, en el proyecto que presenta en 1860 como ministro de Mitre, si la reforma agraria que propone para el área destinada a ser servida por la continuación del Ferrocarril Oeste, es justificada por la necesidad de asegurar la rentabilidad de la línea, único modo de evitar que el fisco la costee, ya sea emprendiendo directamente su explotación a pérdida, o garantizando un interés mínimo a inversores privados (una justificación cuyo conservatismo fiscal no podría ser objetado por las clases propietarias) sólo permite a los terratenientes conservar la mitad de la tierra que ya poseen si éstos se avienen a ser indemnizados por la otra mitad al tenor de una valuación fiscal irrisoriamente baja.

Por detrás de esos argumentos de una irreprochable ortodoxia económica, Sarmiento podía evocar, en su diálogo con las clases ilustradas, motivos ya presentes en la imagen que esas clases habían acuñado del país y de sus problemas. Entre ellos se contaba la convicción de que el de la campaña no era exclusivamente económico, y que por lo tanto la solución más adecuada para él no podía ser la de introducir las explotaciones que asegurasen los más altos provechos, sino las que facilitasen una mayor difusión del bienestar y el avance más rápido de la cultura material y cívica de las poblaciones rurales.

Esa perspectiva dominaba ya en un economista ilustrado como Vieytes, y si en el pensamiento de la ilustración rioplatense debía luchar sin ventaja cierta contra las de quienes, sea en nombre del interés de la corona –como Félix de Azara o en el de terratenientes y exportadores –como Mariano Moreno–, preferían dejar actuar libremente a las fuerzas económicas, iba a ganar mayor peso desde que se creyó advertir que –en el contexto nuevo que ofrecía la nación independiente– el primitivismo de la campaña, así no fuese incompatible con significativos progresos económicos, imponía riesgos intolerables al desarrollo político argentino. Es la conclusión que propone la generación de 1837, que Echeverría ilustra en *El matadero* y que Sarmiento utiliza en Facundo para explicar las crisis de la Argentina posrevolucionaria: el primitivismo político que caracteriza a la confederación rosista revela en ella el fruto de la victoria de la barbarie pastoril sobre la civilización urbana.

Esa perspectiva iba a ser bien pronto seguida de un corolario preciso: la eliminación del primitivismo socio-cultural de la campaña requiere la del predominio ganadero; si la identificación entre economía pastoril y barbarie política se transforma en uno de los tópicos más socorridos de la polémica antifederal, la noción más general de que el tránsito de una economía ganadera a una agrícola es el elemento básico del ascenso de una entera civilización a una etapa superior es compartida también por los federales que se han detenido a examinar el problema: la afirma vigorosamente el gobernador Heredia, de Tucumán, para quien –en la Argentina, como en todas partes– la civilización en su marcha ascendente dejará atrás en el futuro la etapa pastoril para entrar en la agrícola¹⁶ (así como superará finalmente ésta para alcanzar la industrial).

En esa noción se apoya entonces el vasto consenso que propone la colonización agrícola de la campaña como solución no sólo para el atraso de ésta sino para los problemas socio-políticos de la entera nación. Ese consenso no va a ser nunca recusado: los alegatos en favor de la colonización seguirán siendo, hasta 1880, ejercicios de elocuencia política destinados a no evocar sino la aprobación del público. A través de ellos mismos, sin embargo, es posible percibir la creciente aceptación de un orden rural sin duda en proceso de honda transformación, pero no por eso más cercano al modelo propuesto a mediados de siglo.

Así, mientras Nicasio Oroño propone para los territorios que serán ganados a los indios un programa de colonización agraria que sigue ortodoxamente la inspiración del proyecto que hubiera debido englobar a toda la nación admite implícitamente que las zonas económicamente más vigorosas de ésta no serán tocadas

¹⁶ “Alejandro Heredia a Marcos Paz”, Tucumán, 28 de enero de 1837. En Universidad Nacional de la Plata. *Archivo del coronel doctor Marcos Paz*, tomo I, La Plata, 1959, p. 64.

por los cambios que proyecta; dentro de ellas ofrece como modelo la trayectoria del proceso colonizador en su provincia de Santa Fe, cuyas limitaciones conoce sin embargo muy bien, ya que no sólo en su función pública ha seguido la marcha de ese proceso, sino está participando en él como terrateniente fundador de colonias agrícolas.

El punto de llegada de esa continua redefinición del programa de cambio rural mediante la colonización agraria, que viene a asignarle un papel cada vez más modesto en el marco de la transformación rural en curso, está admirablemente representado por la propuesta de formación de colonias con hijos del país, incluida por José Hernández en sus *Instrucciones del estanciero*, de 1881. Sin duda, Hernández propone todavía un plan de colonización para la provincia de Buenos Aires, y subraya la necesidad de asegurar la participación de la población rural nativa en sus beneficios. Pero ese plan es de ambiciones muy modestas: se trata de crear “cuatro o seis colonias” sobre el modelo de la que su hermano Rafael ha contribuido a establecer en San Carlos, partido de Bolívar. No es necesario examinar más detenidamente que Hernández las peculiaridades de ese modelo que halla admirable (aunque no deja de causar perplejidad una colonia que en cien casas y doscientas chacras aloja a “cerca de tres mil argentinos”; los agricultores independientes difícilmente podrían ser allí el grupo numéricamente dominante, por numerosas que se supongan a sus familias. Baste observar que un programa así definido no puede ser visto como el instrumento de una transformación global de la campaña. Desde luego Hernández no lo ve desde esa perspectiva; la colonización agrícola debe traer alivio a las consecuencias de los progresos de la ganadería, que están reduciendo las necesidades de ésta en cuanto a mano de obra. Las colonias reemplazarán así con ventajas a las opresivas e ineficaces leyes de vagancia. Un programa de renovación rural redefinido en un diálogo exclusivo con los grupos dominantes (es éste un límite que Hernández reconoce muy bien y se proclama dispuesto a acatar: “no hacemos proclama –observa al respecto– ni es nuestro ánimo tocar ninguna de las fibras delicadas del sentimiento popular”) no puede sino aceptar de antemano la necesidad de adecuar sus alcances a las perspectivas de esos grupos. Sería absurdo reprochar a Hernández su aceptación de un contexto sociopolítico que ni podía –ni tampoco probablemente deseaba– cuestionar; aun así, su versión final del proyecto de renovación de la campaña refleja muy bien hasta qué punto la acatada gravitación de ese contexto ha servido de constante freno al impulso renovador que, sin duda, no sentía menos vivamente que Sarmiento.

Pero la fatigada reiteración del homenaje a un ideal renovador que se sabe destinado a no realizarse sino en mínima parte, no impide una paralela revisión de los supuestos en que se apoyaba la propuesta renovadora. Una circunstancia privilegiada nos permitirá asistir al enfrentamiento puntual entre ésta y una más modesta propuesta alternativa. El 3 de octubre de 1868, el pueblo de Chivilcoy ofrece un banquete a Sarmiento, presidente electo; el 25 lo brinda a Mitre, presidente saliente. El primero va a utilizar la ocasión para reafirmar el lugar central que la creación de una nueva sociedad campesina tiene en la transformación nacional que se dispone a impulsar; el segundo la empleará para recusar la noción misma de que la economía y la sociedad de la campaña requieren ser rehechas hasta sus raíces.

Para Sarmiento, Chivilcoy es una prueba viviente de la justeza de su punto de vista; algunos gauchos antes vagos, junto con una masa heterogénea de inmigrantes, han creado una réplica austral de la democracia rural norteamericana. Más aún: han dejado ya atrás a su modelo: mientras en el Norte la máquina de coser tardó en encontrar quienes la usaran, y “el pobre obrero que la había descubierto, estuvo a riesgo de morir de hambre, porque la pobre humanidad es así; tiene ojos para no ver a primera vista”, por su parte “las damas de Chivilcoy no tuvieron tiempo de aprender a coser por el método antiguo, tan nueva es esta sociedad”... El programa de Sarmiento es claro: “hacer, CIEN CHIVILCOY en seis años de gobierno y con tierra para cada padre de familia, con escuela para sus hijos”. He aquí una afirmación muy clara. ¿Es posible percibir alguna fisura en esa fe en la necesidad absoluta de la redistribución de la tierra, para lograr no sólo un ritmo sino un estilo de desarrollo aceptable en la campaña? Sólo podrá adivinarse un anuncio de ella en su evocación entusiasta de los progresos logrados también por el resto de la campaña porteña, donde la memoria de hombre alcanza para recordar el momento en que la galleta primero y el pan luego fueron introducidos en la dieta del peón, y donde sin embargo “la escuela de Mercedes figura entre los más bellos monumentos de la provincia” y “en veinte partidos, en las villas, se han construido escuelas magníficas, iglesias, casas consistoriales, bibliotecas, clubes, cementerios y moradas suntuosas”, cambios todos que pudieron obtenerse sin afectar el tan ásperamente denunciado estatuto tradicional de la tierra.

Ese tema discordante, que se insinúa en sordina en el discurso de Sarmiento, va a dominar el de Mitre. Este se adecua perfectamente a la peculiar posición del primer presidente de la nación unida, que tras de imprimir a la consolidación del Estado central un ritmo más rápido de lo que él mismo había previsto y deseado, se encuentra marginado de él y al frente de un grupo escasamente homogéneo de fuerzas menguantes, con más arraigo en el pasado que esperanzas en su propio futuro. En Chivilcoy, Mitre hace gala de ese buen sentido deliberadamente pedestre que dominará también su polémica con Juan Carlos Gómez,

adornándolo para su público popular y campesino de ribetes demagógicos. Frente a “los maestros presuntuosos que creen que el saber humano está encerrado únicamente en un libro y un tintero” (y sin duda quienes escuchaban a Mitre no habrán tenido dificultad en adivinar el original de este retrato tan poco favorecido), el discurso exalta la sabiduría colectiva del pueblo, la ciencia práctica de los humildes. Sin duda, los obstinados errores de los sabios no dejaron de beneficiar a Chivilcoy. Estos, viendo “crecer los trigos en mayor abundancia... por la sencilla razón que aquí se sembraba más... creyeron... que sólo aquí podrían darse los cereales, y alrededor de esta suposición arbitraria basaron todo un sistema de división de la tierra y de explotación del suelo, en que como siempre el bien se produjo por resultados opuestos a sus previsiones”. Los mismos sabios propusieron luego construir un ferrocarril para acercar los trigos de Chivilcoy al mercado de la capital; esa “candorosa idea” no tomaba en cuenta que el ferrocarril “podría transportar en una semana todo el trigo y el maíz que se producía en Chivilcoy”. Mitre se guardó “muy bien de propalar este secreto, por temor de que se les ocurriese no continuar el ferrocarril empezado”, ya que en su inagotable tontería “creían de buena fe que los ferrocarriles sólo se habían inventado para los trigos”. Esa lucidez de la que están privados los sabios la comparten con Mitre los habitantes de Chivilcoy, que por su parte advirtieron de inmediato las ventajas que el ferrocarril ofrecía para la cría de ovejas.

Por debajo de estas burlas algo gruesas, y no del todo respetuosas de los hechos, hay dos argumentos serios que Mitre quiere proponer a sus oyentes. El que subraya más insistentemente proclama que “la mente... es la inteligencia presidiendo a todas las acciones del hombre”. Cada conquista técnica, así no esté basada en conocimientos teóricos, es obra de esa inteligencia (“hay inteligencia en el brazo que gobernando el arado... hace mayor y mejor tarea que los demás... en la mano que empuña la espada, cuando la esgrime mejor que su adversario”); la inteligencia popular que Mitre evoca para confusión de los supuestos sabios es a la vez la inspiradora y la resultante de las experiencias acumuladas por una sociedad en lucha contra la naturaleza y contra sí misma. El argumento menos explícitamente subrayado sostiene el carácter histórico de esa experiencia a través de la cual rastrea el desplegarse de la inteligencia popular. Al respecto, Mitre va a ofrecer en rasgos breves y magistrales un entero cuadro de la evolución histórica rioplatense, y a proclamar –contra la obtusa crítica retrospectiva de los sabios– la total racionalidad del proceso que evoca. Desde la conquista española hasta ese año de 1868, una línea continua de avance ofrece la mejor prueba de su aserto; la “barbarie pastora” hizo posible la ocupación del territorio; los ganados lo conquistaron más seguramente que los escasos hombres. Es erróneo creer sin embargo que el único mérito de la etapa pastoril es haber creado las condiciones para su futura superación: cuatrocientos mil habitantes en la pastoril Buenos Aires “producen casi tanto y consumen más” que cuatro veces esa población en un Chile agrícola y minero; sería pura insensatez denunciar a Buenos Aires como bárbara porque “es más rica y más feliz siguiendo sus instintos que obedeciendo a reglas convencionales de que el tiempo ha dado cuenta”.

Se advierte muy bien cómo la conciencia histórica que Mitre ha conquistado (y que pronto habrá de inspirar sus grandes escritos historiográficos) da mayor profundidad y riqueza de matices a una opción que es precisamente la opuesta a la aún vigorosamente reflejada en los escritos de Sarmiento, que negaba la legitimidad de elaborar planes de cambio social a partir de criterios exclusivamente económicos. En efecto, ¿qué enseña ese instinto gracias al cual la población porteña es “rica y feliz”? El sugiere a ésta “ideas exactas sobre sus conveniencias” y le permite “sin contrariar las leyes de la riqueza resolver prácticamente un arduo problema económico”. Pero desde el comienzo mismo de la historia española y argentina de este rincón agreste, ese instinto marcó con la misma seguridad el rumbo justo de las decisiones, en todo de acuerdo ya entonces con las “leyes de la riqueza”. La rápida conquista del territorio, hecha posible por la actividad pastoril, ofreció la mejor solución para un equilibrio de recursos en que la tierra era sobreabundante y el hombre escaso; todavía ahora esa actividad debe su triunfo a la “vasta extensión de territorio poblada por un escaso número de habitantes, teniendo a su servicio medios de producción tan abundantes y tan baratos”. La racionalidad que se despliega en la historia, y con la que comunica instintivamente la inteligencia popular, es en suma la de la economía. Es en particular la justeza de la teoría de ‘la división internacional del trabajo la que es confirmada por el éxito que la Argentina ha alcanzado, adaptándose instintivamente a sus dictados; lo que Mitre viene a decir a sus rústicos oyentes es, en efecto, que la Argentina lo debe a su decisión de concentrar su esfuerzo productivo en aquellos renglones para los cuales las condiciones localmente favorables se reflejaban en bajos costos de producción.

En un contexto ideológico menos complejo, es precisamente ésa también la conclusión de José Hernández. Si es “una verdad histórica... que la marcha de las sociedades en la senda de su progreso ha sido recorriendo penosa y lentamente la escala de pueblo cazador a pastor, de pastor a agricultor y de agricultor a fabril”, tal verdad es válida para los pueblos antiguos, que vivían en el aislamiento. Precisamente la creación del nuevo lazo que es el comercio es la que ha hecho inactual esa concepción del progreso; los avances técnicos, sólo encuentran límites fijados por acondicionamientos materiales, y son igualmente rápidos en

todas las ramas de la actividad humana. En un mundo al que el comercio y la común participación en los beneficios del progreso técnico finalmente han hecho uno, no hay “industria. Privilegiada”, pero por lo mismo la concentración en una rama de actividad tampoco concede privilegio a una economía nacional. Sin duda “América es para Europa la colonia rural”, pero Hernández ve en este lazo uno de los dos que definen una relación de interdependencia que se le aparece rigurosamente simétrica: de inmediato se apresura a agregar que “Europa es para América la colonia fabril”.

Se ha completado aquí la redefinición del problema de la campaña; no ha de ser definido como político o como socio-cultural, sino como económico; su solución ha de provenir, como había querido Alberdi, de la apertura, sin reticencia alguna, de ese campo nuevo a la acción de las fuerzas económicas desencadenadas por el rápido desarrollo de Europa y los Estados Unidos y su creciente dominación sobre un mundo en trance de unificación económica. Pero el triunfo póstumo de la visión alberdiana no deja de encerrar un aspecto irónico: Alberdi había recomendado, en efecto, una transformación de la relación del Estado y la economía y las sociedades rurales que –aunque de signo opuesto– no debía ser menos radical que la propuesta por Sarmiento. Si quienes tomaban a su cargo planear el futuro de la nación debían, según Alberdi, ponerse sin reticencias al servicio de las clases propietarias, su servicio específico sería revelar a esas clases qué les convenía. Para Mitre dichas clases, junto con el entero mundo rural, sabían ya perfectamente bien lo que les convenía; los consejos que Alberdi se proponía prodigarles eran superfluos, y lo que se imponía era una adecuada reverencia ante el despliegue, a través de cuatro siglos de historia, de los frutos de una sabiduría a la vez ciega e infalible. Así redefinido, el énfasis alberdiano en los aspectos económicos del cambio no incita a planear ningún futuro; al proclamar la racionalidad económica de la realidad presente, hace más fácil aceptarla tal como es.

Y esa lección de conformidad con el *statu quo* va también ella a integrar bien pronto el consenso decididamente autocontradictorio, pero no por eso menos vastamente compartido, que ha venido a crearse en torno al proyecto renovador que para la conciencia colectiva sigue guiando la marcha del país. Ese aspecto está fielmente reflejado en los escritos que Avellaneda dedicó al problema agrario: a lo largo de su carrera tiene ocasión de celebrar los progresos de la división de la propiedad territorial en Buenos Aires que, si no ha creado una clase de campesinos propietarios, ha ampliado extraordinariamente la de terratenientes, pero también de exaltar, con acentos que recuerdan los de Sarmiento, los avances de la colonización agraria en Santa Fe, y todavía de amonestar el excesivo pesimismo y la superficialidad del examen que Barros ofrece de los problemas de la campaña ganadera: lo que a Barros le parece derroche de recursos es consecuencia de la excesiva abundancia de éstos en relación. con los hombres; cuando la población crezca, los supuestos errores desaparecerán solos junto con los abusos administrativos cuyas consecuencias de todos modos Barros exagera. Todas esas posiciones no son necesariamente contradictorias; son aspectos de un examen penetrante de una realidad inevitablemente compleja; lo que ya no está vivo en ellas es la fe en la posibilidad, y por lo tanto la necesidad, de construir en el desierto pampeano una sociedad campesina radicalmente nueva, que ofrecerá fundamento sólido a una nación igualmente renovada.

La reconciliación en aumento con el espectáculo que la campaña ofrece es sólo uno de los signos de un cambio más general de actitud. La creciente distancia con ese momento inaugural que es Caseros y la percepción cada vez más viva de que a partir de ese instante se vienen acumulando transformaciones a la vez irreversibles e irreductibles a las que habían sido propuestas en cualquiera de los modelos entonces delineados, no van a estimular la formulación de ningún otro de veras nuevo, destinado a reemplazar a los que el tiempo y sus sorpresas han tornado en parte irrelevantes. Lo que ellas inspiran es la convicción cada vez mayor de que ese instante en que el país parecía ávido de recibir una nueva forma ha sido irremisiblemente dejado atrás. Ha pasado la hora de dibujar libremente un futuro; se acerca la de trazar el balance retrospectivo de lo logrado en ella.

Balances de una época

Ya quienes los vivieron, vieron en los sucesos de 1880 la línea divisoria con una etapa nueva de la historia argentina. En 1879 fue conquistado el territorio indio; esa presencia que había acompañado la entera historia española e independiente de las comarcas platenses se desvanecía por fin. Al año siguiente el conquistador del desierto era presidente de la nación, tras de doblegar la suprema resistencia armada de Buenos Aires, que veía así perdido el último resto de su pasada primacía entre las provincias argentinas. La victoria de las armas nacionales hizo posible separar de la provincia a su capital, cuyo territorio era federalizado. La moraleja era propuesta por un Avellaneda que concluía sobre ese trasfondo marcial una presidencia colocada bajo el signo de la conciliación: nada quedaba en efecto en la nación que fuese superior a la nación misma. La trayectoria de su sucesor iluminaba mejor sobre el sentido que en tal contexto

alcanzaba esa definición. Más que la victoria del Interior del que era oriundo (hijo de una familia tucumana de complicada historia y divididas lealtades políticas), el triunfo de Roca era el del Estado central, que desde tan pronto se había revelado difícilmente controlable, sea por las facciones políticas que lo habían fortificado para mejor utilizarlo, sea por quienes dominaban la sociedad civil. Su emergencia en el puesto más alto del sistema político argentino había sido lenta y sabiamente preparada a lo largo de una carrera que lo había revelado servidor eficazísimo de ese Estado en los campos de la guerra externa y la lucha civil, y a la vez agente igualmente eficaz de los sucesivos presidentes en el laberinto de una política provinciana cada vez más afectada por su progresivo entrelazamiento con la nacional. Aun su creación de una base política en las provincias y la empresa que lo identificaba con las más arraigadas ambiciones de la clase terrateniente porteña –la Liga de Gobernadores y la Conquista del Desierto– estuvieron a su alcance gracias a las posiciones cada vez más elevadas que su constante destreza y su pasada subordinación a las inspiraciones de lo alto le habían permitido ir conquistando en el aparato estatal.

La Argentina es al fin una, porque ese Estado nacional, lanzado desde Buenos Aires a la conquista del país, en diecinueve años ha coronado esa conquista con la de Buenos Aires. ¿Es ése un resultado aceptable del ingente esfuerzo por construir un país nuevo, que dura desde 1852? En 1883 Sarmiento debe concluir que no. En la melancólica carta-prólogo a Mary Mann, con la que abre las téticas divagaciones de su último gran libro, señala precisamente en la hazaña política realizada por Roca la prueba mejor de que la Argentina no es de veras un país nuevo. La melancolía no lo incita a la humildad, y en esa hora oscura reivindica –en las altivas frases citadas al comienzo de esta introducción– hasta el empeño regenerador en el que ha participado, una grandeza que no ha proclamado tan explícitamente ni aun en las de sus mayores triunfos: en “toda la América española y en gran parte de Europa, no se ha hecho para rescatar a un pueblo de su pasada servidumbre, con mayor prodigalidad, gasto más grande de abnegación, de virtudes, de talentos, de saber profundo, de conocimientos prácticos y teóricos”. Lo logrado prueba sin duda que “no luchamos treinta años en vano contra un tirano”. Aun así, esos progresos “carecen de unidad y de consistencia”. Y no es evidente que para alcanzarlos fuesen necesarios los esfuerzos de algunos argentinos dotados de mirada profética y tenacidad inmovible: esos mismos progresos alcanzan a un África y una India que no los han solicitado; mientras Sarmiento escribe se están tendiendo los rieles de un ferrocarril “que parte del caudaloso Níger, y se interna a través de la selva de cocoteros”. Aunque misericordiosamente su memoria ha borrado esa vieja disputa, lo que Sarmiento viene a decir es que Alberdi había tenido razón: los cambios vividos en la Argentina son, más que el resultado de las sabias decisiones de sus gobernantes posrosistas, el del avance ciego y avasallador de un orden capitalista que se apresta a dominar todo el planeta:

.Y ese progreso material necesariamente marcado por desigualdades y contradicciones, en que “nada se siente estable y seguro”, es menos problemático que la situación política. Es ésta la que verdaderamente “da que pensar”. La Argentina de Roca no es en el fondo mejor que la Venezuela de Guzmán Blanco: aquí y allá la misma adulación desenfrenada, que oculta mal un descreimiento radical.

Pero si Sarmiento lleva luto por el gran esfuerzo frustrado de autorregeneración de un país, la mayor parte de los testigos del surgimiento del régimen roquista parecen hasta haber olvidado que alguna vez se lo afrontó. No es sorprendente que ninguna evocación enfadosa de las desafortunadas esperanzas de treinta años antes turbe la serenidad de Roca al tomar posesión de la presidencia. Con su triunfo se han resuelto para siempre “los problemas que venían retardando hasta el presente la definitiva organización nacional, el *imperium* de la Nación establecido sobre el *imperium* de provincia, después de sesenta años de lucha”. Lo que queda atrás es más que una etapa de construcción cuyas obras requieren ser justipreciadas aunque Roca no deja de evocar los “rápidos progresos y las conquistas en medio siglo de vida nacional”, se rehúsa aún en este contexto a reconocer fisonomía propia a la etapa inaugurada en Caseros, un “período revolucionario” marcado por “preocupaciones y (...) conmociones internas, que a cada momento ponían en peligro todo”. La nueva etapa de la historia argentina no ha comenzado en 1852, está sólo comenzando en 1880. En ella dominará el lema de “paz y administración”; de él se ha destacado más de una vez la promesa implícita de mantener y cimentar la coincidencia entre el Estado nacional y los sectores que dominan la economía argentina y sacan mayor ventaja de sus progresos. Ese motivo se encuentra sin duda en la presentación que hace Roca de su futura política, pero en ella es aún más vigorosamente subrayada como finalidad esencial la coronación de la tarea continuada a través de tan graves alternativas en la etapa dejada atrás: la construcción del Estado. El primer objetivo del nuevo presidente es la creación de un ejército moderno; incluso el segundo –rápido desarrollo de las comunicaciones– lo ve predominantemente desde esa perspectiva; si no deja de aludir a la “profunda revolución económica, social y política” aportada por los ferrocarriles y el telégrafo, es esta última la que le interesa sobre todo: gracias a ella “se ha alcanzado la unidad nacional, se ha vencido al espíritu de montonera, y se ha hecho posible la solución de problemas que parecían irresolubles”. El tercero –acelerar el poblamiento de los territorios por él despejados de “sus enemigos tradicionales” –está más

decididamente alejado de la esfera política; aun aquí, para Roca el papel del Estado debe ser ofrecer “garantías ciertas a la vida y la propiedad”, más bien que prohijar ninguno de los experimentos social-agrarios tan en boga (por lo menos como tema de discusión) en la etapa que su victoria ha clausurado.

Pero si Roca invita a admirar, en la emergencia del Estado que su victoria ha venido a consolidar, la conquista que justifica retrospectivamente seis décadas de desdichas y discordias nacionales, también quienes contemplan con mente más crítica el surgimiento de su régimen tienden a colocar al Estado y su peculiar organización política en el centro de sus preocupaciones.

En *Problemas argentinos*¹⁷, José Manuel Estrada intenta un inventario de los que afligen al país a setenta años de su emancipación. Muy significativamente, comienza su examen por la vida política, cuya esterilidad denuncia desde el título mismo del capítulo que le dedica; esa esterilidad nace del “divorcio de la política y la sociedad”. Sin duda el conflicto político ha perdido parte de su antigua violencia, gracias a “la aglomeración de fuerzas pacificadoras, aunque puramente materiales”, que si no ha alcanzado a evitar que “nadie permanezca en el poder con tanta firmeza como los representantes del elemento democrático más enfermizo y bárbaro”, por lo menos “ha permitido que se consoliden las apariencias de la legalidad”. Esa progresiva desvirtuación de un elemento democrático que inspira a Estrada las más vivas desconfianzas no ha dado lugar a una integración de los titulares del poder político con las élites intelectuales o socio-económicas; la vida política sólo atañe “a los pretendientes y corto número de afiliados”, mientras las “clases conservadoras (...) sufren por el desorden y se amedrentan en vista del incremento impreso por los ambiciosos al democratismo que les sirve de instrumento”, e igualmente mediatizadas se encuentran “las muchedumbre campesina tiranizada por intrigantes de cuenta y en provecho de facciones egoístas” y “la población extranjera, tan numerosa ya que no puede ser olvidada en cuerdas combinaciones políticas, y que regida casi exclusivamente por el móvil económico... sólo aspira a tener quietud... ya sea... nacida de la paz social, ya sea... apoyada en el despotismo”. De este modo la entera sociedad “sufre pasivamente, sin estímulo que la aliente, sin perspectivas que la consuelen”, bajo el peso de un Estado que no se identifica con ninguno de sus sectores.

No todos los defectos de la vida social provienen sin embargo de ese Estado. La opinión pública nacional y extranjera tiende a identificar a la Argentina con sus ciudades, pero en más de sus dos terceras partes la población es aún campesina. Y si en la campaña sobrevive una barbarie intelectual que no alarma demasiado a Estrada (“una masa popular –nos asegura– jamás llegará probablemente a recibir la iniciación científica que le prometen filántropos visionarios”), más le preocupa una “barbarie moral y de costumbres” cuya intensidad cree posible medir con precisión a través de la proporción de nacimientos ilegítimos.

A ese análisis insuficiente de un fenómeno tan complejo (Estrada no considera, por ejemplo, si en el desnivel entre las provincias no influye la desigual implantación eclesiástica en la campaña de varias de ellas) sigue una brevísima pero muy aguda descripción del fatalismo y el amoralismo de la población rural como fruto de la demasiada larga opresión: “cuando alcanza la tradición hacia lo pasado es para los hombres de su clase una historia de dolor... y su vida angustiada, ni inquieta ni conduce a las clases preponderantes, desdeñosas y olvidadizas”. En las páginas que dedica a analizar la sociedad urbana, esos breves relámpagos de lucidez no han de repetirse, en parte porque en ellas se hace aún más imperiosamente dominante la preocupación que ha movido a Estrada a indagar los problemas argentinos: la de probar que sólo podrán ser resueltos aceptando los principios cristianos y católicos como fundamento para la vida social y política.

Las soluciones que Estrada sugiere son las fácilmente previsibles en una etapa de su carrera en que –renunciando a su anterior tentativa de conciliar liberalismo y catolicismo– sigue disciplinadamente la orientación cada vez más antiliberal y adoptada por la Iglesia. No se las ha de examinar aquí, salvo para indicar que contribuyen a restar precisión a sus análisis (en la medida en que lo incitan a subsumir el examen de una realidad tan peculiar como la Argentina en una crítica genérica del mundo moderno) y confieren a su actitud una ambigüedad que no es sino la de un catolicismo cuya recusación global de la modernidad oculta mal una tentativa –destinada a madurar bien pronto– de hacer sus paces con ella, reservando a la Iglesia una posición que, agotado el ímpetu renovador del primer capitalismo y la era de las revoluciones democráticas, terminará por serle reconocida.

Todo esto confiere al escrito de Estrada un aire de irrelevancia que recuerda el que afectaba a los publicados por Frías treinta años antes (confirmado por el hecho de que los principios que avanza en nombre de la Iglesia no parecen siempre orientar la conducta de ésta: mientras su paladín denuncia la farsa democrático-electoral como un aspecto del retorno ofensivo del paganismo, y alerta a los católicos para una táctica de diferenciación y defensa frente a ese ataque oblicuo de una gentilidad renaciente, el nombre del

¹⁷ En José Manuel Estrada. *Obras completas*, tomo XI, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1904.

arzobispo de Buenos Aires encabeza listas de candidatos al congreso que incluyen también los de respetadas luminarias de la Masonería). Pero si la tentativa de deducir de la situación argentina la necesidad de instaurar todo en Cristo es de nuevo recibida con fría indiferencia, la imagen de esa situación de la que Estrada parte no está ya (como cuando Frías alertaba contra los peligros de inminentes convulsiones sociales y los porteños se negaban a ser distraídos por esas extravagantes profecías de sus tanto más apasionantes disputas políticas) demasiado distante de la aceptada por otros observadores que se identifican con principios muy distintos de los de un catolicismo cada vez menos liberal.

Hay en particular un punto en que Estrada, al seguir una inspiración ideológica muy alejada del consenso argentino de su tiempo, viene sin embargo a expresar nociones ampliamente compartidas dentro de ese consenso. Es el examen de la emergencia de un régimen pseudo-representativo, cuya peculiaridad es advertida con penetración, pero cuya condena se formula en términos que impugna tanto el principio democrático como el carácter sólo nominal de su implantación en la Argentina. Si Estrada puede haber sido estimulado para englobar ambos aspectos de la realidad argentina en una única condena por la polémica católica contra las novedades del siglo, la misma actitud se volverá a encontrar en el prólogo que Vicente Fidel López antepuso a su *Historia de la República Argentina*¹⁸ de 1883-93. López –masón y decididamente anticlerical– no comparte desde luego los supuestos de Estrada. Al final de una larga y poco exitosa carrera pública, que ha incluido un nada breve cuasi destierro en Montevideo, ese brillante fundador del grupo de 1837 parece haber extraído de ella una desengañada sabiduría política. Este amigo del progreso ordenado y la libertad racional no desarma sus reservas frente a la revolución francesa y la norteamericana; sus modelos políticos son una Inglaterra en la que no parece advertir los progresos sin embargo ya evidentes de la democracia, el Chile de la república conservadora y oligárquica, el Brasil imperial. Si para Estrada el problema causado por la irrupción de la plebe en la vida política no tiene en rigor solución exclusivamente política (ya que requiere nada menos que una regeneración del mundo moderno bajo signo cristiano) para López sí la tiene: se trata de asegurar, contra el predominio de la mayoría electoral, el de la opinión pública, mediante el establecimiento de un régimen parlamentario. ¿El principio de soberanía popular es compatible con ese reinado de una opinión integrada no por ninguna mayoría estadística del cuerpo de ciudadanos, sino por aquellos cuya independencia y luces les permiten de veras definir su opinión con conocimiento de causa? López no está muy seguro de ello; le parece en cambio indiscutible que, si es preciso optar entre una y otra, la preferencia por el gobierno de opinión se impone.

Esa ideología *whig*, que López ha reinventado espontáneamente, desemboca en una crítica de la realidad política argentina que, como en Estrada, presenta al electoralismo como la causa última de su corrupción. Desde perspectivas diferentes, Estrada y López vienen en suma a denunciar la independencia que la clase política que ha unido su destino al del Estado, ha ganado, gracias a la fuerza militar y la manipulación de las instituciones representativas, frente al resto de las élites argentinas, que Estrada define como clases conservadoras y López como opinión pública; la independencia que también ha obtenido respecto del resto de la sociedad argentina, y que es vista por Estrada como positiva, no es siquiera tomada en cuenta por López (para quien la representatividad del gobierno argentino es perfectamente comparable a la de Estados Unidos, también él expresión de un electoralismo inevitablemente corrompido).

En suma, mientras la Argentina parece haber encontrado finalmente el camino que le había señalado Alberdi, y haberse constituido en república posible, hay un aspecto de la previsión alberdiana que se cumple mal: el Estado no ha resultado ser el instrumento pasivo de una élite económica cuyos objetivos de largo plazo sin duda comparte, pero con la cual no ha alcanzado ninguna coincidencia puntual de intereses e inspiraciones.

¿Los problemas de la república posible, problemas creados por la excesiva gravitación del Estado, ese servidor prematuramente emancipado y difícilmente controlable de un sector dirigente que no tiene, para su desgracia, la homogeneidad que Alberdi le asignaba podrían resolverse mediante una transición acelerada a la república verdadera? En favor de ello puede argumentarse que un régimen electoral menos sistemáticamente falseado puede contribuir a ampliar el control de la sociedad sobre el Estado. Es la solución que prefiere Sarmiento y que inspira en parte la última campaña periodística de su agitada vida, en la que intenta persuadir a los residentes extranjeros que deben naturalizarse en masa.

El sistema representativo, tal como funciona en la Argentina, ha permitido la emergencia de una clase política integrada por “aspirantes que principian la vida, bajo los escozores de la pobreza, buscando abrirse camino como y por donde se pueda”, en cambio de los suspirados “representantes de la riqueza y saber” de las provincias. El resultado es la mala administración y el derroche, inevitables en un gobierno cuyo personal está integrado por aventureros y en cuya base electoral predominan abrumadoramente los que

¹⁸ Buenos Aires, Editorial Sopena Argentina, tomo I, 1957.

no tienen nada que perder. Si los extranjeros se integrasen en la ciudadanía, contribuirían a formar “una mayoría de votantes respetable y respetada”, capaz de imponer “ideas de orden, honradez y economía en el manejo de los caudales públicos”; si no en el presente, en un futuro ya cercano los extranjeros serán numéricamente la mayoría dentro de lo que Estrada llama las clases conservadoras, y Sarmiento, con mayor precisión, las clases propietarias (aunque, como se apresura a agregar, ello sólo tiende a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires). Pero no es difícil entender por qué la propuesta de Sarmiento, inspirada sobre todo por su desesperanza ante el creciente marasmo de la vida política, fue muy fríamente recibida por sus destinatarios: al cabo, las clases propietarias argentinas, dotadas de derechos electorales, no se mostraban más ansiosas por usarlos independientemente. Más bien que un proyecto realizable, el de Sarmiento es una nueva manifestación de la curiosa lealtad al ideal democrático que mantiene a través de una larga carrera política en que su papel más frecuente fue el del defensor del orden, y aun en momentos en que su preocupación inmediata es –como en esta última etapa de ella– limitar la influencia de los desheredados'

Pero la propuesta que Sarmiento formula en favor de la república verdadera está lejos de representar la actitud dominante en esa Argentina que concluye esa etapa que debía ser de construcción de una nueva nación, y que ha sido sobre todo la de construcción del Estado. La Argentina de 1880 no se parece a ninguna de esas naciones que debían construirse, nuevas desde sus cimientos, en el desierto pampeano; al preocuparse por ello, Sarmiento se muestra de nuevo escasamente representativo del ánimo que domina ese momento argentino. Pero tampoco se parece a la que asistió a la derrota y fuga de Rosas; es a su modo una nación moderna.

Quienes echan una mirada por primera vez retrospectiva sobre el proceso que la conformó prefieren –se ha visto– no detenerse en ese aspecto de los cambios transcurridos; más les preocupan las tensiones entre un Estado que ha alcanzado en la etapa que se cierra un triunfo quizá demasiado completo, y las aspiraciones de una sociedad que aun las voces disidentes identifican con sus sectores dominantes.

Pero no es imposible adivinar, en la imagen por ellos propuesta de los problemas políticos de la nación, un comienzo de toma de conciencia de que sus transformaciones esenciales no han sido sólo políticas. Si en 1880, como quiere Sarmiento, “nada se siente estable ni seguro”, ello no se debe tan sólo a lo que en el proyecto transformador se ha frustrado; se debe también –y quizá más– a lo que de él no se ha frustrado. Porque ese proyecto no ha fracasado por entero, se acerca la hora en que los dilemas que la realidad del siglo XIX había planteado a Tocqueville –y en los cuales sus lectores del Plata no habían reconocido los que afrontaba su propia comarca– se anuncian en el horizonte argentino. Esa Argentina de 1880, que no está segura de haber concluido victoriosamente la navegación que debía dejar como herencia un país nuevo, comienza a adivinar que pronto ha de emprender otra. En el trasfondo de esos exámenes sin complacencia de la república posible, empieza a discernirse una de las preguntas centrales de la etapa que va a abrirse: si es de veras posible la república verdadera, la que debe ser capaz de ofrecer a la vez libertad e igualdad, y ponerlas en la base de una fórmula política eficaz y duradera. Es quizá significativo que los primeros pilotos de esa nueva, navegación no tengan nada de la optimista seguridad de los que, casi medio siglo antes, habían trazado el derrotero de la que ahora se cerraba.